

PORVENIR/CONTESTACIÓN DEMANDA/15001310500120230000900.

Daniel Felipe Ramírez

Mié 07/06/2023 9:29

Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Boyacá - Tunja <j01lctotun@cendoj.ramajudicial.gov.co>; yesid.vega@tgconsultores.net <yesid.vega@tgconsultores.net>; MAUROVP1007@HOTMAIL.COM <MAUROVP1007@HOTMAIL.COM>

CC: Luis Carlos Pereira Jimenez <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>; Natalia Andrea Sepulveda Ruiz <accioneslegales@proteccion.com.co>; Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>

 1 archivos adjuntos (10 MB)

Contestacion J 01 (2023-00009).pdf;

Señores,

JUZGADO PRIMERO (01) LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

E.S.D

REFERENCIA.	Proceso Ordinario Laboral de LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y OTRO.
RADICACIÓN.	15001310500120230000900.
ASUNTO.	Contestación de la demanda por ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

DANIEL FELIPE RAMÍREZ SANCHEZ, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de apoderado especial de la compañía **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** parte demandada dentro del proceso de la referencia, de acuerdo con el poder general conferido a la firma **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.**, firma en la que me encuentro inscrito como abogado tal y como consta en su certificado de existencia y representación legal, doy contestación a la demanda que dio origen al proceso de la referencia.

En esta oportunidad en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, y en el numeral 14 del art. 78 del CGP se remite el presente numeral con copia a COLPENSIONES (notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co); PROTECCIÓN (accioneslegales@proteccion.com.co); COLFONDOS (procesosjudiciales@colfondos.com.co) y a la parte demandante (yesid.vega@tgconsultores.net Y maurovp1007@hotmail.com).

De su Señoría,



Daniel Felipe Ramírez Sánchez

CC. 1.070.018.966 de Cajicá-Cundinamarca.

T.P. 373906 del C.S. de la J.

dramirez@godoycordoba.com

Bogotá · Calle 84 A No. 10-33, piso 11

PBX: (57-1) 317 4628

Celular: (317) 5384811

www.godoycordoba.com

Bogotá | Barranquilla | Cali | Medellín



Godoy Córdoba Abogados forma parte de la práctica de derecho internacional Littler Global, que opera en todo el mundo a través de una serie de entidades jurídicas independientes. Para obtener más información, visite: www.Littler.com

Señores,
JUZGADO PRIMERO (01) LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA
E.S.D

REFERENCIA. Proceso Ordinario Laboral de **LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO** contra **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y OTRO.**

RADICACIÓN. 150013105001**20230000900.**

ASUNTO. Contestación de la demanda por **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

DANIEL FELIPE RAMÍREZ SANCHEZ, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de apoderado especial de la compañía **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** parte demandada dentro del proceso de la referencia, de acuerdo con el poder general conferido a la firma **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.**, firma en la que me encuentro inscrito como abogado tal y como consta en su certificado de existencia y representación legal, doy contestación a la demanda que dio origen al proceso de la referencia, en los siguientes términos:

I. EN CUANTO A LOS HECHOS

Al 1.	Es cierto , de conformidad con la documental que reposa en el archivo de mi representada, donde se evidencia su fecha de nacimiento.
Al 2.	No me consta , se trata de un hecho del accionante respecto de sus relaciones laborales, frente al cual, mi representada no puede hacer algún pronunciamiento, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.
Al 3.	<u>Este hecho no existe en la demanda</u> , tal y como se evidencia a continuación: 6. HECHOS Y/U OMISIONES (NUMERAL 7, ARTÍCULO 25 DEL CPT Y SS): 6.1. El señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO , nació el 01/08/1964, según consta en su documento de identificación. 6.2. El demandante cotizó para su pensión a través de diferentes empresas privadas desde el 01/07/1991 hasta la fecha acreditante más de 1.533 semanas. 6.4. En el año 1995, el señor LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO se afilió a la COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS S.A. a efectos de vincularse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Al 4.	No me consta , se trata de un hecho del demandante ante una administradora ajena a mi representada como lo es la SOCIEDAD ADMINISTRADORES DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A. , por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.



Al 5.	No me consta , se trata de un hecho del accionante ante una administradora ajena a mi representada, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.
Al 6.	Es cierto , en este sentido la afiliación del demandante a mi representada en el año 1995 se presentó de manera libre, voluntaria e informada
Al 7.	No me consta , se trata de un hecho del demandante ante una administradora ajena a mi representada como lo es la SOCIEDAD ADMINISTRADORES DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.
Al 8.	No me consta , se trata de un hecho del demandante ante una administradora ajena a mi representada como lo es la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.
Al 9.	No es cierto , debe decirse que, el demandante al momento de suscribir el formulario de vinculación con mi representada, recibió información de manera clara, oportuna, suficiente y cierta, por parte de PORVENIR S.A., quien en cumplimiento de su deber de información y actuando dentro de la buena fe objetiva, presentó a cabalidad el funcionamiento, condiciones y características del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cual existe paralelamente con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, ambos ampliamente difundidos desde su entrada en vigencia y a los cuales se le atribuye la carga de informar a sus afiliados todas las características y condiciones propias de su sistema de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 97 del Decreto No. 663 de 1993 (normativa que contiene el deber de información oponible a las a AFP al momento en que se materializó el traslado de régimen pensional).
Al 10.	No es cierto , el fondo brindaba información cierta, clara y sin intereses de inducir en error a sus afiliados, de conformidad con las leyes vigentes para ese momento. Siempre se informaba sobre la naturaleza de capitalización propia del RAIS, lo que incluye la existencia de los rendimientos.
Al 11.	No es cierto , debe decirse que, el demandante al momento de suscribir el formulario de vinculación con mi representada, recibió información de manera clara, oportuna, suficiente y cierta, por parte de PORVENIR S.A., quien en cumplimiento de su deber de información y actuando dentro de la buena fe objetiva, presentó a cabalidad el funcionamiento, condiciones y características del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cual existe paralelamente con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, ambos ampliamente difundidos desde su entrada en vigencia y a los cuales se le atribuye la carga de informar a sus afiliados todas las características y condiciones propias de su sistema de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 97 del Decreto No. 663 de 1993 (normativa que contiene el deber de información oponible a las a AFP al momento en que se materializó el traslado de régimen pensional).
Al 12.	No es cierto , es preciso indicar que mi representada informó de manera clara, veraz, objetiva y oportuna sobre las condiciones, características, requisitos y funcionalidad del RAIS y del RPM, conforme a la normatividad vigente para la



	fecha y las particularidades propias de la demandante para dicha anualidad, esto sin ninguna clase de acoso o información errada o engañosa. En igual sentido, debe decirse que, PORVENIR S.A. informa de manera clara, oportuna, suficiente y cierta, las condiciones de las operaciones, de los servicios ofrecidos por la entidad y de cada una de las prestaciones económicas que regula la ley (pensión de vejez, sobrevivencia, invalidez, etc.), de tal forma que sea posible que nuestros afiliados conozcan en su integridad los productos y servicios, así como las obligaciones recíprocas que se generan
Al 13.	No es cierto como se presenta, toda vez que esa información únicamente es conocida por parte de los promotores comerciales de mi representada al momento en que el potencial afiliado diligencia el respectivo formulario de vinculación.
Al 14.	No es cierto como se presenta, toda vez que esa información únicamente es conocida por parte de los promotores comerciales de mi representada al momento en que el potencial afiliado diligencia el respectivo formulario de vinculación.
Al 15.	No me consta, se trata de un hecho del accionante respecto de sus relaciones laborales, frente al cual, mi representada no puede hacer algún pronunciamiento, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.
Al 16.	No es cierto, es preciso indicar que mi representada informó de manera clara, veraz, objetiva y oportuna sobre las condiciones, características, requisitos y funcionalidad del RAIS y del RPM, conforme a la normatividad vigente para la fecha y las particularidades propias del demandante para dicha anualidad. En todo caso, es de resaltar que el deber de buen consejo nació con la expedición del Decreto No. 2555 de 2010 y del Decreto 2071 de 2015, normativa que para la fecha de afiliación no le era exigible a mi representada
Al 17.	<p>No es cierto, debe decirse que, el demandante al momento de suscribir el formulario de vinculación con mi representada, recibió información de manera clara, oportuna, suficiente y cierta, por parte de PORVENIR S.A., quien en cumplimiento de su deber de información y actuando dentro de la buena fe objetiva, presentó a cabalidad el funcionamiento, condiciones y características del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cual existe paralelamente con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, ambos ampliamente difundidos desde su entrada en vigencia y a los cuales se le atribuye la carga de informar a sus afiliados todas las carteristas y condiciones propias de su sistema de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 97 del Decreto No. 663 de 1993.</p> <p>El fondo cumplió con su deber de información, según los mandatos legales vigentes para la época, bajo la estricta vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora, con independencia de la información otorgada al momento del traslado, las condiciones, características, ventajas y desventajas del RAIS se encontraban establecidas en la Ley 100 de 1993, por lo que, el demandante pudo validar en cualquier momento el contenido de la información suministrada.</p>



Al 18.	No es cierto en lo que respecta a mi representada , toda vez que al momento de la afiliación, así como durante la vigencia de esta, mi representada dio al demandante una continua asesoría e información en relación con las condiciones del régimen acorde a la normatividad vigente, y mantiene informados a sus afiliados de las distintas alternativas de ahorro, los cambios normativos, así como toda la información de relevancia en materia de seguridad social, a través de distintos canales (extractos trimestrales, medios de comunicación, página de internet, asesores comerciales).
Al 19.	No me consta , el presente numeral corresponde apreciaciones subjetivas de la parte actora en la cual mi representada no puede emitir pronunciamiento alguno.
Al 20.	No me consta , se trata de un hecho del demandante ante una administradora ajena a mi representada como lo es la SOCIEDAD ADMINISTRADORES DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A., por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.
Al 21.	No es cierto , véase que la parte demandante no acredita la presentación del derecho de petición en los diferentes canales de comunicación de mi representada, por lo que en efecto no cuenta con radicado de solicitud.
Al 22.	No me consta , se trata de un hecho del demandante ante una administradora ajena a mi representada como lo es la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.
Al 23.	No me consta , se trata de un hecho del demandante ante una administradora ajena a mi representada como lo es COLPENSIONES, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso
Al 24.	No me consta , se trata de un hecho del demandante ante una administradora ajena a mi representada como lo es la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.
Al 25.	No es cierto , véase que la parte demandante no acredita la presentación del derecho de petición en los diferentes canales de comunicación de mi representada, por lo que en efecto no cuenta con radicado de solicitud. En cualquier caso, Porvenir siempre emite respuesta de manera oportuna frente a las solicitudes de sus afiliados.
Al 26.	No me consta , se trata de un hecho del demandante ante una administradora ajena a mi representada como lo es la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS SKANDIA por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.
Al 27.	No me consta , se trata de un hecho del demandante ante una administradora ajena a mi representada como lo es la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso.
Al 28.	No me consta , se trata de un hecho del demandante ante una administradora ajena a mi representada como lo es COLPENSIONES, por lo anterior nos remitimos a lo que se pruebe e interese dentro del proceso



II. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES.

Me opongo a todas y cada una de las peticiones formuladas en la demanda que pretenda hacer recaer en mi representada cualquier tipo de consecuencia jurídica o económica en virtud del presente proceso y solicito al despacho absuelva de todas y cada una de ellas a mi representada, por las razones que se expondrán en las excepciones de la defensa, así como frente a cada hecho y pretensión particular.

- DECLARATIVAS:

A la 5.1	<p>Me opongo, en tanto que, el traslado de régimen pensional del demandante al RAIS y los traslados horizontales fueron completamente válidos, el cual estuvo precedido por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria, razón por la cual sería improcedente declarar un error de hecho, cuando en realidad lo que se alega aquí es un error de derecho frente a condiciones que están determinadas en la normatividad de público conocimiento, Conclusión a la que se arriba, en atención a que, no aporta prueba que permita indicar que su traslado de régimen pensional se dio bajo algún vicio del consentimiento, que dé lugar a concluir que el traslado es nulo. Por lo que, no es dable retrotraer la afiliación efectuada al RAIS.</p> <p>Así mismo, y tal como se desarrollará a lo largo de este escrito, en el presente caso, no se dan los supuestos necesarios para declarar la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS, por el contrario, se evidencia que el accionante durante el tiempo de vinculación a este régimen tuvo todas las posibilidades de conocer las características y condiciones.</p> <p>Si bien, el demandante alega una falencia en la información entregada por los fondos de pensiones a los cuales ha estado afiliada, debe tenerse en cuenta que, la estructura y condiciones del RPM y del RAIS se encuentran cabalmente estipulados en la Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias, por lo que no resulta plausible que el demandante alegue que no fue asesorada de manera completa, clara veraz, oportuna, adecuada, suficiente y clara sobre las diferencias de los regímenes, los beneficios y desventajas al momento de suscribir el formulario de afiliación a Porvenir. Se llama la atención del Despacho, en cuanto que el demandante en los hechos que relata lo que está haciendo es alegar la propia culpa en su beneficio, pues es indispensable manifestar que contaba con las condiciones necesarias y suficientes para verificar, corroborar y ampliar la información otorgada por parte de los fondos a los que ha estado vinculada. Cosa diferente es que el señor Demandante, en el marco de una actuación contraria a la de un buen padre de familia, no realizó ninguna gestión tendiente a informarse sobre su futuro pensional.</p> <p>Así mismo, es indispensable señalar que no es viable que el demandante</p>
-----------------	---



	<p>alegue hoy, más de 20 años posteriores a su traslado inicial de régimen pensional, la voluntad de retornar al RPM, cuando teniendo la posibilidad de ejercer su derecho al retracto no lo hizo y, teniendo la posibilidad de trasladarse de régimen, resolvió continuar haciendo sus aportes.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente señalar que, para la fecha del traslado del RPM al RAIS, los fondos de pensiones contaban con unas obligaciones establecidas de manera expresa en los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, por lo cual no se puede imponer a las administradoras de pensiones obligaciones que no se tenían para el momento en que se efectuaron las afiliaciones. Nótese que, sólo fue hasta la expedición del Decreto 2555 de 2010, el Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015, que las AFP adquirieron en su cabeza la obligación de asesoría e información tanto para sus afiliados como para el público en general. De hecho, la obligación de explicar a los afiliados las consecuencias del traslado de régimen, nace sólo a partir del inciso 4º del artículo 3 del Decreto 2071 de 2015, que modificó a su vez el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 de 2010, que indica:</p> <p><i>"En particular, las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado al Régimen de Prima Media, así mismo deben suministrar una información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de: las condiciones de su afiliación al régimen, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras del mismo o de elegir el tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos" o de seleccionar la modalidad de pensión o de escoger la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia. Lo anterior, sin perjuicio de la información que deberá ser remitida a los consumidores financieros en los extractos de conformidad con la reglamentación existente sobre el particular y las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto".</i></p> <p>En consecuencia, no hay lugar a acceder a la pretensión incoada en este numera</p>
A la 5.2	Me opongo , en tanto que, el traslado de régimen pensional del demandante al RAIS, así como los posteriores traslados horizontales, estuvieron precedidos por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria.
A la 5.3	Me opongo , pues si bien es una pretensión que se encuentra dirigida en contra de una administradora diferente a mi representada, si es necesario aclarar que el traslado de régimen pensional realizado por el demandante fue completamente válido, ya que estuvo precedido de una asesoría oportuna, profesional, informada y ajustado a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto



No. 663 de 1993.

De ahí que, no es procedente declarar la reactivación de la afiliación del demandante al RPM administrado por COLPENSIONES.

- CONDENATORIAS:

A la 5.4	<p>Me opongo, en tanto que, el traslado de régimen pensional del demandante al RAIS y los traslados horizontales fueron completamente válidos, el cual estuvo precedido por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria, razón por la cual sería improcedente declarar un error de hecho, cuando en realidad lo que se alega aquí es un error de derecho frente a condiciones que están determinadas en la normatividad de público conocimiento, Conclusión a la que se arriba, en atención a que, no aporta prueba que permita indicar que su traslado de régimen pensional se dio bajo algún vicio del consentimiento, que dé lugar a concluir que el traslado es nulo. Por lo que, no es dable retrotraer la afiliación efectuada al RAIS.</p> <p>Así mismo, y tal como se desarrollará a lo largo de este escrito, en el presente caso, no se dan los supuestos necesarios para declarar la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS, por el contrario, se evidencia que el accionante durante el tiempo de vinculación a este régimen tuvo todas las posibilidades de conocer las características y condiciones.</p> <p>Si bien, el demandante alega una falencia en la información entregada por los fondos de pensiones a los cuales ha estado afiliada, debe tenerse en cuenta que, la estructura y condiciones del RPM y del RAIS se encuentran cabalmente estipulados en la Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias, por lo que no resulta plausible que el demandante alegue que no fue asesorada de manera completa, clara veraz, oportuna, adecuada, suficiente y clara sobre las diferencias de los regímenes, los beneficios y desventajas al momento de suscribir el formulario de afiliación a Porvenir. Se llama la atención del Despacho, en cuanto que el demandante en los hechos que relata lo que está haciendo es alegar la propia culpa en su beneficio, pues es indispensable manifestar que contaba con las condiciones necesarias y suficientes para verificar, corroborar y ampliar la información otorgada por parte de los fondos a los que ha estado vinculada. Cosa diferente es que el señor Demandante, en el marco de una actuación contraria a la de un buen padre de familia, no realizó ninguna gestión tendiente a informarse sobre su futuro pensional.</p> <p>Así mismo, es indispensable señalar que no es viable que el demandante alegue hoy, más de 20 años posteriores a su traslado inicial de régimen pensional, la voluntad de retornar al RPM, cuando teniendo la posibilidad de</p>
-----------------	--

	<p>ejercer su derecho al retracto no lo hizo y, teniendo la posibilidad de trasladarse de régimen, resolvió continuar haciendo sus aportes.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente señalar que, para la fecha del traslado del RPM al RAIS, los fondos de pensiones contaban con unas obligaciones establecidas de manera expresa en los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, por lo cual no se puede imponer a las administradoras de pensiones obligaciones que no se tenían para el momento en que se efectuaron las afiliaciones. Nótese que, sólo fue hasta la expedición del Decreto 2555 de 2010, el Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015, que las AFP adquirieron en su cabeza la obligación de asesoría e información tanto para sus afiliados como para el público en general. De hecho, la obligación de explicar a los afiliados las consecuencias del traslado de régimen, nace sólo a partir del inciso 4º del artículo 3 del Decreto 2071 de 2015, que modificó a su vez el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 de 2010, que indica:</p> <p><i>"En particular, las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado al Régimen de Prima Media, así mismo deben suministrar una información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de: las condiciones de su afiliación al régimen, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras del mismo o de elegir el tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos" o de seleccionar la modalidad de pensión o de escoger la aseguradora previsional en el caso de seleccionar una renta vitalicia. Lo anterior, sin perjuicio de la información que deberá ser remitida a los consumidores financieros en los extractos de conformidad con la reglamentación existente sobre el particular y las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto".</i></p> <p>En consecuencia, no hay lugar a acceder a la pretensión incoada en este numeración</p>
A la 5.5	Me opongo, aun cuando se trata de una pretensión dirigida en contra de una codemandada, en tanto que, el traslado de régimen pensional del demandante al RAIS, así como los posteriores traslados horizontales, estuvieron precedidos por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria.
A la 5.6	Me opongo, aun cuando se trata de una pretensión dirigida en contra de una codemandada, en tanto que, el traslado de régimen pensional del demandante al RAIS, así como los posteriores traslados horizontales, estuvieron precedidos por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria.



	oportuna, con toda la información pertinente y necesaria.
A la 5.7	<p>Me opongo, pues si bien es una pretensión que se encuentra dirigida en contra de una administradora diferente a mi representada, si es necesario aclarar que el traslado de régimen pensional realizado por el demandante fue completamente válido, ya que estuvo precedido de una asesoría oportuna, profesional, informada y ajustado a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto No. 663 de 1993.</p> <p>De ahí que, no es procedente declarar la reactivación de la afiliación del demandante al RPM administrado por COLPENSIONES.</p>
A la 5.8	<p>Me opongo, pues si bien es una pretensión que se encuentra dirigida en contra de una administradora diferente a mi representada, si es necesario aclarar que el traslado de régimen pensional realizado por el demandante fue completamente válido, ya que estuvo precedido de una asesoría oportuna, profesional, informada y ajustado a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto No. 663 de 1993.</p> <p>De ahí que, no es procedente declarar la reactivación de la afiliación del demandante al RPM administrado por COLPENSIONES, ni gestiones administrativas a cargo de esta.</p>
A la 5.9	<p>Me opongo, al no haber fundamento de las pretensiones de la demanda, deberá absolverse a mi representada de todas y cada una de las pretensiones incluyendo cualquier condena que se pudiese imponer a título de facultades ultra y extra petita.</p>
A la 5.10	<p>Me opongo, por cuanto que, al no haber fundamento de las pretensiones de la demanda, deberá absolverse a mi representada de todas y cada una de las pretensiones y, en consecuencia, condenar al demandante en costas y agencias en derecho.</p>

A continuación, se presentan los hechos, fundamentos y razones de la defensa de mi representada con base en los cuales se deberá proferir sentencia absolutoria atendiendo a que todos y cada uno de los hechos y pretensiones de la demanda quedarán plenamente desvirtuados.

1. NO HAY RAZONES PARA DECRETAR LA INEFICACIA O LA NULIDAD DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

No existen razones fácticas o jurídicas que conduzcan a la ineficacia o a la nulidad del acto jurídico por medio del cual la demandante se trasladó de régimen pensional. La decisión tomada por la actora se hizo en forma consciente y espontánea, sin presiones o apremios de ninguna naturaleza y con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las normas que se hallaban vigentes para la fecha en que se produjo, pues: (i) antes de adoptar la decisión recibió información suficiente y veraz sobre las implicaciones de su

traslado y las características generales del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; (ii) suscribió el formulario de solicitud de vinculación, el cual cumplía con los requisitos de ley y fue aprobado por la entonces Superintendencia Bancaria; (iii) en cumplimiento de las exigencias legales, al suscribir la solicitud de vinculación, con la cual se concretó su traslado de régimen, manifestó en forma expresa que lo hacía en forma voluntaria y libre.

Esta expresión no puede ser considerada como un mero requisito formal o una manifestación vacía sin ninguna consecuencia, en cuanto corresponde a una exigencia normativa que, por lo tanto, no puede ser ignorada, como tampoco pueden ser desconocidos los efectos que produce. La circunstancia de que conste en un formulario previamente impreso no le resta validez a lo manifestado, ya que corresponde a una expresión inequívoca de la voluntad de el demandante.

Es claro, así las cosas, que el acto de traslado de régimen es completamente válido, pues cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad entonces vigente y no pesa sobre él ningún vicio u omisión que lo invalide.

2. LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES DEMANDADA CUMPLIÓ CABALMENTE LA OBLIGACIÓN DE DAR INFORMACIÓN AL DEMANDANTE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE ESA OBLIGACIÓN ESTABA ESTABLECIDA PARA LA FECHA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

Al momento en que el demandante tomó la decisión voluntaria de trasladarse de régimen pensional, la sociedad administradora de pensiones que represento cumplió a cabalidad con las obligaciones que le correspondían en materia de información, atendiendo los parámetros establecidos en las normas vigentes en ese momento, las cuales, debe aclararse, no exigían una información en los términos reclamados en la demanda, puesto que esa información tan rigurosa solo vino a ser determinada con mucha posterioridad, inicialmente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y, más adelante, por varias normas legales y reglamentarias.

Un breve recuento de las normas que regulaban el deber de información respecto de entidades como la aquí demandada para la fecha en que se hizo el traslado cuya nulidad se demanda, revela lo siguiente:

- Si se entendiese que los afiliados al Sistema de Seguridad Social pueden ser considerados como consumidores, les sería aplicable el artículo 14 del Decreto 3466 de 1982, que solamente establecía la obligación de dar una información veraz y suficiente.
- Posteriormente, el Decreto 663 de 1993 en su artículo 30 estableció para las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías la obligación de *"Suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas."*



- En la Ley 100 de 1993 no se estableció ninguna obligación puntual para las administradoras del sistema de pensiones en materia de suministro de información, si se tiene en cuenta que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 se limitó a señalar que *"La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley"*. Esta disposición legal solamente aludió a la manifestación de la elección del régimen, pero no fijó en cabeza de las administradoras ninguna carga en materia de entrega de información al afiliado.
- Ninguna de las normas reglamentarias de la Ley 100 de 1993 exigió a las administradoras pensionales la obligación de entregar una información como la aquí demandada. El Decreto 656 de 1994 que en sus artículos 14 y 15 regula las obligaciones de las entidades administradoras de fondos de pensiones no menciona la de entregar información a los afiliados.

De lo antes expuesto es forzoso colegir que si bien existía una obligación para las administradoras del Sistema General de Pensiones de entregar información dada a quienes pretendiesen vincularse a ellas, era una información necesaria, veraz y suficiente, pero nada más. Por lo tanto, no había obligación de brindar una asesoría, de dar un buen consejo incluso para desincentivar la afiliación, ni, mucho menos una doble asesoría. Tampoco existía la obligación de informar por escrito sobre los beneficios puntuales que cada uno de los regímenes pensionales ofrecía, ni sobre el monto de la pensión que se obtendría, esto es, no era obligatorio hacer proyecciones pensionales por escrito en uno u otro régimen, pues ninguna norma así lo exigía, si se tiene en cuenta que esos requerimientos surgieron con mucha posterioridad, como se explicó con antelación.

El ente gubernamental que vigila a las Administradoras de Fondos de Pensiones ha sido enfático en señalar que la obligación de otorgar información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación nace en el ordenamiento jurídico únicamente a partir de la entrada en vigor del Decreto 2241 de 2010. Así las cosas, en concepto 2017056668-001 del 12 de junio de 2017, la Superintendencia Financiera indicó:

"La obligatoriedad de ofrecer una asesoría, entendida como la "información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras (...)" se encuentra expresamente consagrada a partir del 1º de julio de 2010, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2241 de 2010."

Con la expedición del Decreto 2555 de 2010, del Decreto 2071 de 2015 y de la Ley 1748 de 2015 que las administradoras de fondos de pensiones adquirieron en su cabeza la obligación de asesoría e información tanto para sus afiliados como para el público en general.

Así lo estimó también la Superintendencia Financiera en concepto 2015123910 del 29 de diciembre de 2015, en el que se señaló:

"Sobre este particular, debe advertirse que no obstante la existencia del deber de asesoría, sólo hasta la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, es claro el deber legal de las administradoras de "poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado", por lo que en vigencia del Instituto de Seguros Sociales los traslados realizados por fuera de la vigencia de estas disposiciones la asesoría podía no contener la ilustración correspondiente a la favorabilidad en cuanto al monto de la pensión."

De otro lado, solo a partir de la expedición de la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera la obligación de conservar soportes documentales que den cuenta de la doble asesoría recibida.

Por lo tanto, para cuando se produjo el acto materia del proceso era perfectamente admisible que la información a quienes estaban interesados en vincularse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad se suministrara en forma verbal, sin que por ello pueda sostenerse que no fueran completas, transparentes, veraces y oportunas.

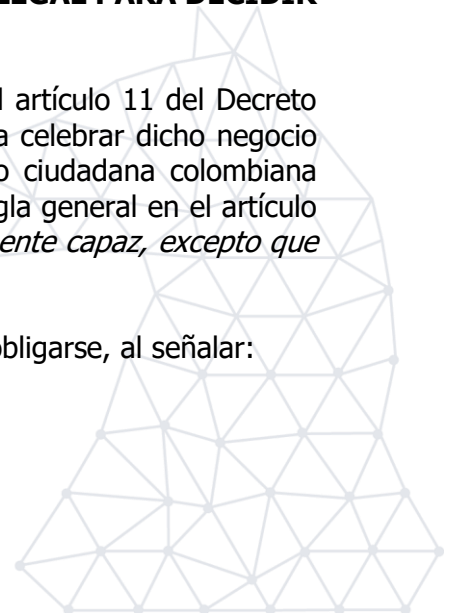
Cumple advertir, sin embargo, que aun en el caso de haberse efectuado una proyección pensional, que no era legalmente exigible, no estaría ella plenamente ajustada a la realidad pensional del afiliado, por cuanto en la mayoría de los casos, las variables laborales, de número de semanas cotizadas, de edad, de expectativa de vida, entre otras, modificarían de manera sustancial el contenido y exactitud de esa proyección.

En consecuencia, es forzoso concluir que en este caso esa obligación de información que debía darse a el demandante se cumplió en forma estricta, como surge de las pruebas del proceso.

3. EL DEMANDANTE CONTABA CON PLENA CAPACIDAD LEGAL PARA DECIDIR EL TRASLADO DEL RÉGIMEN DE PENSIONES.

Frente a la suscripción del formulario de afiliación impuesto en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994, se aprecia que la facultad que permitió a la afiliada celebrar dicho negocio jurídico recayó en su capacidad para adquirir obligaciones como ciudadana colombiana mayor de 18 años, capacidad que está contemplada como una regla general en el artículo 1503 del Código Civil, cuando indica que *"toda persona es legalmente capaz, excepto que la ley declara incapaces"*.

El artículo 1502 del Código Civil, establece los presupuestos para obligarse, al señalar:





"ARTICULO 1502. <REQUISITOS PARA OBLIGARSE>. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

1o.) que sea legalmente capaz.

2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.

3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.

4o.) que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra.

A este respecto cabe preguntarse: Si la Ley 1996 de 2019 considera capaz a toda persona incluso quienes tienen hoy una discapacidad cognitiva, ¿Cómo es posible que se pueda considerar incapaz de tomar libremente sus propias decisiones a los afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad?

No hay ninguna razón para considerar que en este caso el demandante no contara con la capacidad suficiente para dar su consentimiento en el acto de vinculación, por carecer del entendimiento suficiente para comprender las implicaciones del acto jurídico que estaba llevando a cabo, pues no cabe ninguna duda de que sus condiciones académicas, culturales y sociales le daban suficiente idoneidad y aptitud para entender las consecuencias del acto de traslado de régimen de pensiones:

3.1. LAS CONDICIONES ACADÉMICAS, CULTURALES Y SOCIALES DE LA AFILIADO LE DABAN SUFICIENTE IDONEIDAD Y CAPACIDAD PARA ENTENDER LA CONSECUENCIAS DEL ACTO DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

Bien se sabe que el consentimiento informado no tiene reglas estáticas, generales o uniformes, de tal suerte que el cumplimiento de ese requisito depende, entre varios factores, de las condiciones personales, académicas, culturales o profesionales de quien tiene derecho a recibir la información.

Entonces, una persona que, por razón de su oficio, de su actividad económica o de su profesión, puede tener fácil acceso a las normas legales y, en particular, a las que regulan el Sistema de Seguridad Social en Colombia no tiene por qué recibir la misma información que alguien sin estudios, si se tiene en cuenta que las reglas bajo las que operan los dos regímenes pensionales, y las diferencias entre ellos, no precisan de un conocimiento experto o calificado, en cuanto están contenidas en la ley.

3.2. NO TODA OMISIÓN EN EL DEBER DE INFORMAR AFECTA EL CONSENTIMIENTO.

A lo anterior cabe agregar que no toda omisión en la información en el acto de traslado puede afectar el consentimiento, puesto que, aparte de que debe establecerse la

incidencia que tenga en el caso particular de cada afiliado, para que esa afectación se dé se requiere que efectivamente, en realidad y no en abstracto o con base en meras especulaciones, la omisión produzca un daño claro, cierto y determinable en el afiliado. En este caso no hay ninguna prueba de ese perjuicio, el cual, como es apenas obvio, no puede determinarse con la sola diferencia eventual en los montos de las prestaciones que otorgan los dos regímenes pensionales, la cual, con todo, no está suficientemente determinada en el caso del demandante.

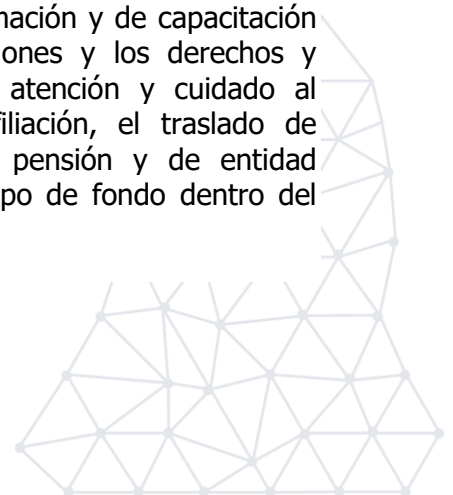
4. EL DEMANDANTE TAMBIÉN TENÍA EL DEBER DE INFORMARSE SOBRE EL ACTO JURÍDICO DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL Y SUS CONSECUENCIAS.

En la demanda se pretende hacer recaer en cabeza de la sociedad demandada toda la responsabilidad sobre el deber de dar información acerca de las consecuencias del cambio en el régimen de pensiones. La circunstancia de que esa entidad administradora tuviera algunas responsabilidades profesionales no es excusa para que el demandante, por su cuenta, no haya debido indagar sobre las implicaciones que tendría el traslado de régimen pensional, pues, aún el hecho de ser lego en el asunto no la eximía de actuar con dedicación en un asunto con implicaciones tan importantes.

Resulta claro que no puede descargarse totalmente el deber de informar en la Administradora de Pensiones, pues en virtud del principio de igualdad dicha obligación también recae sobre el afiliado, quien es conocedor de su situación particular y concreta de sus expectativas laborales, que en últimas son las que permitirán acceder a un mejor derecho pensional, situación que se escapa del conocimiento de la AFP.

Como todo consumidor financiero, el demandante debía actuar con mediana diligencia, lo cual suponía, por lo menos, obtener una información suficiente sobre el acto jurídico que estaba adoptando, con mayor razón si los datos relevantes que permitían precisar las consecuencias de esa decisión estaban claramente determinados en normas legales de común conocimiento.

Que todos los afiliados al Sistema de Pensiones tenían y tienen obligaciones lo corrobora el Decreto 2241 de 2010, al señalar que, como consumidores financieros, deben: (a) informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo sistema de administración de multifondos y de las diferentes modalidades de pensión; (b) aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden; (c) emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de multifondos, según sea el caso.



Por consiguiente, ese deber de obtener información le era exigible el demandante, así para la época del traslado no estuviesen vigentes las normas legales que actualmente gobiernan las obligaciones de los consumidores financieros, pues se trata de una obligación que recae en toda persona que obre con responsabilidad en el manejo de sus asuntos personales, con mayor razón, si eventualmente involucra a su familia.

5. QUE NO HAYA EXISTIDO DEBIDA INFORMACIÓN NO ES POR SÍ SOLO SUFICIENTE PARA LA INEFICACIA DEL ACTO DE TRASLADO DEL RÉGIMEN PENSIONAL.

Como todo acto jurídico, el de traslado de régimen pensional puede adolecer de algunas deficiencias. Pero no todas ellas conducen necesariamente a la ineficacia o pérdida de efectos del acto, pues ello dependerá de la incidencia que tenga en la debida conformación del acto y en la posibilidad de que sea corregido o saneado por las partes o por el paso del tiempo. Aunque, como se ha dicho, en este caso la información que recibió el demandante por parte de la sociedad llamada a juicio fue la necesaria, y la que estaba obligada a dar de acuerdo con las normas que regían en el momento del traslado, cabe advertir que esa falta de información, como una situación que pudo afectar el consentimiento, solamente podría generar, a lo sumo, una nulidad relativa en los términos del artículo 1741 del Código Civil, que solo da derecho a la rescisión del acto o contrato, pero no genera forzosamente la pérdida total de efectos del respectivo acto jurídico.

En consecuencia, solamente si la nulidad del acto de traslado está fundada en hechos que den lugar a una nulidad absoluta o, eventualmente a la inexistencia del acto, lo cual no se alega por la parte actora, se podría obtener la recuperación de régimen pensional, en razón a que la consecuencia sería el restablecimiento de los derechos del afiliado.

Pero ello no puede acontecer en este caso, aún si se entendiese, en gracia de discusión, que hubo una omisión en el suministro de la información, como se explica en seguida:

6. EL DEMANDANTE CONTÓ CON VARIAS OPORTUNIDADES PARA TRASLADARSE NUEVAMENTE DE RÉGIMEN Y NO LO HIZO.

Debe tenerse en cuenta que durante su vinculación como afiliada a la AFP demandada la actora contó con varias oportunidades para revertir su decisión de cambiar de régimen pensional y, pese a ello, no lo hizo, de lo cual solamente es posible concluir que siempre mantuvo un interés en mantenerse vinculada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Téngase en cuenta que el artículo 13 original de la Ley 100 de 1993, que estuvo vigente hasta su modificación por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, señalaba que los afiliados al Sistema General de Pensiones podían trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial. En todo el tiempo de vigencia de esa

disposición el demandante guardó silencio, como lo hizo después de que ese término se elevó a diez (10) años, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 2.

Importa anotar que de esta posibilidad de traslado se dio conocimiento a la opinión pública por parte de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) a través de la Circular Externa No 001 de 2004. Igualmente, Asofondos, entidad gremial que agrupa a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, hizo pública esa posibilidad en un comunicado que fue publicado en un diario de amplia circulación nacional.

Aparte de ello, el artículo 3 del Decreto 1161 de 1994 estableció un derecho de retracto para el traslado de régimen pensional.

Como se observa, el demandante contó con varias posibilidades legales para regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de las cuales es forzoso entender que tenía conocimiento por estar establecidas en disposiciones legales de público conocimiento. Alegar lo contrario equivaldría a aceptar que en este caso se justifica y excusa la ignorancia de la ley.

Es bien sabido que en cabeza de todos los ciudadanos se encuentra el deber de conocer las leyes, pues no es excusa su desconocimiento, tal y como se estableció en la sentencia C 651 de 1997, cuando la Corte Constitucional estudió la exequibilidad del artículo 9 del Código Civil que dispone: "*Art.9: La ignorancia de la ley no sirve de excusa*". Se indicó en la mencionada sentencia: *(...) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico*".

En ese sentido, debe apreciarse por parte del despacho que el demandante, quien es la mayor interesada en su situación pensional, actuó de forma poco diligente frente al traslado realizado y solamente después de muchos años mostró un inusitado interés por su situación pensional.

7. NO HAY NORMA LEGAL QUE ESTABLEZCA LA INEFICACIA DE UN TRASLADO DE RÉGIMEN DE PENSIONES POR AUSENCIA DE INFORMACIÓN COMPLETA AL AFILIADO.

Si en gracia de discusión se admitiese que lo que se pretende en este asunto es la ineficacia del acto de traslado de régimen de pensiones, es necesario tener en cuenta que no hay ninguna norma legal que consagre esa consecuencia en el evento en que exista una deficiencia en la información que se le dio a la afiliada antes de que tomara la decisión de desplazarse de régimen pensional.

El artículo 271 de la Ley 100 de 1993 no consagra expresamente la ineficacia de traslado de régimen pensional por fallas en la información suministrada al afiliado, toda vez que es de carácter eminentemente sancionatorio, en cuanto establece una sanción para quien



atente contra el derecho a la afiliación y a la selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social, pero no consagra ningún derecho sustancial. Nada dice respecto a las obligaciones de información por parte de las administradoras del sistema de pensiones, ni, mucho menos, sobre las consecuencias del incumplimiento de esa obligación, puesto que se refiere, con nitidez, al hecho de impedir el derecho de afiliación o de selección, mas no a las deficiencias en sus respectivos trámites.

Entender que una deficiencia en la información equivale a impedir el derecho de afiliación o de selección, constituye una hermenéutica equivocada que no se corresponde con las reglas de interpretación de las leyes aplicables en nuestro ordenamiento, vale decir, es hacerle decir a la norma algo que no surge de su tenor literal cabalmente entendido, que está dirigido a sancionar otro tipo de conductas diferentes al incumplimiento de una obligación. Lo que se sanciona es una actuación positiva y no una omisión, a la que por ningún lado se hace referencia. Asumir que la conducta de quien no da información completa es la misma de la de quien, con actos deliberados, impide una afiliación o la selección de régimen, no guarda ningún sentido, por más que se quiera conferirle a la norma un carácter eminentemente protector.

Por otra parte, las sanciones que se prevén en la norma solamente pueden ser impuestas por los ministerios del Trabajo o de Salud, según el caso, de suerte que la consecuencia de no producir efecto la afiliación allí prevista requiere: (a) que el hecho imputado sea impedir la afiliación; y (b) que medie una sanción por parte del ministerio del ramo, sin la cual esa consecuencia no se presenta. Esto significa que la pérdida de efectos va atada a la sanción impuesta a la persona que incurra en la conducta sancionable: no puede haber pérdida de efectos de la actora sin sanción al infractor.

De los artículos 272 de la Ley 100 de 1993, 13 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política tampoco es posible concluir la ineficacia del traslado de régimen ante la falta de información correcta al afiliado. Ninguna de esas normas establece esa consecuencia y, obviamente, no se refieren al traslado de regímenes pensionales, por lo que no hay ningún elemento de juicio para extraer de ellas una consecuencia puntual como lo es la ineficacia de un acto jurídico, solamente con base en su naturaleza proteccionista.

8. LA RELACIÓN JURÍDICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL NO ES UNA RELACIÓN CONTRACTUAL. POR LO TANTO, NO EXISTE DEBILIDAD NEGOCIAL DEL AFILIADO O POSICIÓN DOMINANTE POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES.

Como lo han explicado la doctrina¹ y la jurisprudencia de seguridad social², la relación jurídica de afiliación es una relación de carácter administrativo, que se manifiesta en varias relaciones jurídicas derivadas, siendo la más importante de ellas la que une al usuario con

¹ Entre otros, López Villegas Eduardo. Seguridad Social Teoría Crítica. Tomo 1. Capítulo Cuarto. Universidad de Medellín- Eduardo López Villegas. Medellín 2011.

² Sentencia del 2 de octubre de 2007. Radicación 30252



la administradora de pensiones y con las prestaciones. El contenido de esta relación no es acordado entre las partes y se concreta en un conjunto de derechos y obligaciones establecido en la ley, que no puede ser materia de modificación. Por esa razón, la relación de seguridad social que surge de la afiliación es reglamentaria en la medida en que el afiliado acepta las estipulaciones del reglamento respectivo, que solamente puede basarse en la ley, para efectos del recaudo, del pago de cotizaciones de las prestaciones y, en general, para determinar el contenido de los derechos y obligaciones. No puede haber, por lo tanto, acuerdos entre afiliado y administradora para determinar el alcance y contenido de los derechos y obligaciones³.

Las administradoras como la demandada desarrollan actividades de interés público y obviamente deben tener una estructura administrativa y financiera y recursos económicos que les permitan atender sus obligaciones. En cambio, el afiliado es una persona natural. Esa aparente asimetría entre las dos partes de la relación de seguridad social no significa que frente al afiliado exista una posición dominante que inexorablemente coloque en una mejor situación a la administradora al momento de llevarse a efecto la vinculación, por cuanto no se está discutiendo un contrato y por ello no es posible negociar las condiciones y efectos de la afiliación, pues estos están impuestos por la ley. Sí hay diferencias entre las partes, pero ello no permite hablar de una parte fuerte, dominante, y una parte débil, sometida.

Estipulaciones como el periodo de permanencia en el régimen de pensiones, la edad para pensionarse para hombres y mujeres, el valor de la mesada, el financiamiento de la mesada, entre otras, están previstas en la ley, por lo tanto, no existe una parte fuerte y una débil en el Sistema General de Pensiones en lo que respecta a las administradoras y a los afiliados, pues ante la no posibilidad de negociar las condiciones de la afiliación y acceso a la pensión, el afiliado tiene a su libre albedrío escoger otra administradora que más le llame la atención u otro régimen, incluso.

9. BUENA FE OBJETIVA DE LA AFP DEMANDADA.

La buena fe objetiva se traduce en un deber de comportamiento que se expresa a través de las reglas de honestidad y corrección, transparencia, diligencia, responsabilidad, consideración del interés del otro, entre otros deberes que emanan permanentemente del carácter normativo propio de ese principio, las cuales deben estar presentes en todas las actuaciones de a quienes les es exigible.

De acuerdo con lo anterior, el actuar de la administradora aquí llamada a juicio siempre ha sido de buena fe objetiva, pues todas sus acciones se ejecutaron en virtud de los presupuestos legales vigentes al momento del traslado de régimen, cumpliendo con todas las obligaciones que para ese entonces se encontraban a su cargo por mandato legal y

³ Téngase en cuenta lo dicho por López Villegas: “El carácter reglamentario excluye la posibilidad de condicionar la afiliación a acuerdos con la administración sobre cuándo se han de entender válidas las cotizaciones o sobre cómo cumplir el deber de cotizar de manera diversa a la establecida en los reglamentos, o pactar prestaciones en montos distintos a los que ya están señalados”. Ob. Cit. Página 346.



reglamentario. Es importante reiterar, a ese respecto, que para el momento del traslado no existían las cargas de asesoría y buen consejo que fueron impuestas solo hasta la expedición de los Decretos 2555 de 2010, el Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015.

En este punto es importante poner de presente que, una vez la accionante se preocupó por su situación pensional de cara a la llegada de la vejez, conociendo ya los rendimientos de su cuenta de ahorro individual, se observa en su reacción la inconformidad frente al régimen que la cobija. Sin embargo, la imposibilidad de traslado no opera por voluntad de la AFP sino por expresa disposición legal que lo prohíbe cuando el afiliado se encuentre a menos de 10 años de llegar a la edad reglamentaria para acceder a la pensión de vejez; disposición cuyo objetivo es, precisamente, impedir que el afiliado se aproveche indebidamente del sistema.

Por lo tanto, es palmario que lo que motiva a el demandante a solicitar la nulidad o ineficacia de su traslado de régimen de pensiones no reposa en la forma como este se produjo, sino en el supuesto hecho de no cumplirse sus expectativas sobre el eventual monto de la pensión que recibiría en este; monto que, como es obvio suponer, no podía ser determinado en el momento en el que se presentó su vinculación, al depender de muchas variables que no eran conocidas en su momento.

Esa es la razón por la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que de la sola circunstancia de no cumplirse las expectativas pensionales no puede predicarse un engaño:

"Un primer conjunto de elementos que recoge la situación personal del demandante, de haber ya cumplido 55 años, de contar veinte años de servicio, los montos de su salario para diferentes épocas; lo allí consignado no discrepa de lo que se alega, y por lo demás son datos que de alguna manera proporciona el mismo interesado, o que él está en posibilidad de verificar.

Un segundo conjunto de elementos son las proyecciones que, a partir de los datos anteriores, se construyen con fórmulas actuariales, y que dan cuenta del posible valor de la pensión en el sistema de ahorro individual, y su comparación con la que recibiría en el régimen de prima media; el valor de la primera, dando por admitida la corrección de las fórmulas, de su aplicación y de su pertinencia, es una proyección cuyo resultado final, depende del comportamiento real e histórico de variables, como el rendimiento financiero de los fondos, razón por la cual, del mero hecho de no cumplirse las expectativas, no puede predicarse engaño".
(Referencia: Expediente No. 31989).

10.SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS RENDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA -RPM- Y NO LOS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD -RAIS



En el hipotético caso de que se considere que en este caso debe declararse la ineficacia del traslado de régimen pensional, las determinaciones que se adopten deben estar en consonancia con esa declaratoria que supone, como lo ha explicado reiteradamente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que las cosas deben retrotraerse a su estado anterior, sin solución de continuidad y como si la afiliación al RAIS nunca hubiese existido. Por esa razón, cabe preguntarse si ¿es lógico dentro de esa perspectiva jurídica pensar que los rendimientos que deben trasladarse son los que generó la cuenta de ahorro individual del fondo de pensiones?

Bajo la ficción jurídica de que la persona nunca se ha trasladado de régimen pensional es dable concluir que los rendimientos que deben ser entregados a Colpensiones son los que habrían tenido los aportes en régimen de prima media con prestación definida. Respecto de esa consecuencia existen varias normativas que la avalan y dos antecedentes jurisprudenciales relevantes en esta materia por parte de la Corte Constitucional como lo son las sentencias C-1024 de 2004 y la SU – 062 de 2010, en donde para efectos de la validez del traslado de las personas que contaban con 15 años al primero de abril de 1994, se dijo que los rendimientos de los aportes debían ser equivalentes a los del RPM, no a los del RAIS al que se hallaba vinculado el afiliado.

Ahora bien, no es cierto que la rentabilidad de los aportes sea un tema ajeno al régimen de prima media porque, como se dijo, existen abundantes disposiciones normativas que nos enseñan, para diferentes efectos, que debe considerarse como rentabilidad de los recursos que administra el régimen de prima media con prestación definida, como los artículos 54 de la Ley 100 de 1993, 10 del Decreto 1887 de 1994, 11 a 17 del Decreto 1888 de 1994, 4 del Decreto 38000 de 2003, 17 del Decreto 3798 de 200, 7, 11 y 12 del Decreto 3995 de 2008, 4 del Decreto 1051 de 2014, 44 del Decreto 1748 de 1995, 3 del Decreto 816 de 2002 y 9 del Decreto 3771 de 2007.

Resulta claro, entonces, que para todos los efectos de traslados de recursos del régimen de prima media debe tenerse en cuenta la rentabilidad mínima de las reservas de Colpensiones, de tal suerte que con base en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de declararse ineficaz una afiliación al RAIS, constituiría un híbrido absolutamente extraño y alejado de los efectos jurídicos de la ineficacia exigir entregar a Colpensiones los recursos de la cuenta individual del afiliado con los rendimientos obtenidos en el RAIS, cuando lo que se ha manejado por parte de esta doctrina de la Corte es que las cosas deben volver a su estado anterior, esto es, debe considerarse como si el afiliado siempre hubiese mantenido su vinculación al régimen de prima media con prestación definida, para todos los efectos, lo que en sana lógica implica que los rendimientos que deben entregarse son los que habrían tenido sus aportes en ese régimen.

Bajo el escenario de aplicar en sentido plano la ineficacia como bien lo dijo la Corte Suprema de Justicia en su más recientemente jurisprudencia, implica que todas las cotizaciones efectuadas por el demandante al sistema general de pensiones, durante su

vida laboral, deben tenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones.

11.SOBRE LAS RESTITUCIONES MUTUAS. CALIDAD JURÍDICA DE LA AFP RESPECTO DEL AFILIADO CUYO TRASLADO HA SIDO DECLARADO INEFICAZ

En el caso de que se considere que como efectos de la ineficacia deben existir restituciones mutuas, debe tenerse en cuenta que, respecto de Colpensiones, la AFP ha actuado como un agente oficio involuntario, en los términos establecidos por los artículos 2304 y 2310 del Código Civil, en cuanto, creyendo administrar su propia actividad, administró los negocios de otro (el manejo de los aportes de un afiliado) y, luego de declarada la ineficacia del acto termina entregando unos rendimientos superiores a los que habrían tenido los aportes, de haber sido gestionados por el encargado. Si ello es así, esa agencia oficiosa involuntaria debe dar lugar al reembolso de la utilidad efectiva obtenida, lo cual se traduce en que solamente debería estar obligada a entregar a Colpensiones los rendimientos que habrían tenido los aportes de haber sido administrados por esa entidad.

Estas dos disposiciones tienen plena aplicabilidad por cuanto la AFP obró bajo la absoluta convicción que su afiliado era debidamente vinculado y porque, además, tenía el deber legal de recibirlo así lo dispone el artículo 112 de la ley 100 de 1993:

“Artículo 112. Obligación de aceptar a todos los afiliados que lo soliciten. Las personas que cumplan con los requisitos para ser afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad no podrán ser rechazados por las entidades administradoras del mismo”

Esta norma denota que bajo la premisa de la existencia de un formulario de afiliación con el lleno de los requisitos legales y donde no exista ningún tipo de restricción para su vinculación la AFP no tenía otro camino que recibir al afiliado, por tal virtud cuando creó la cuenta de ahorro individual, administró los recursos, e hizo toda la gestión y obligaciones que le encomiendan las normas que rigen a las AFP administró esas cuentas bajo el absoluto convencimiento que lo que estaba administrando le correspondía hacerlo.

Ahora bien, cuando se declara ineficaz el contrato de afiliación a pesar de que existe un documento de vinculación con el lleno de los requisitos legales y donde no existen otras disposiciones que impidan dicho traslado en el momento de esa declaración que tiene efectos ex tunc -según la propia Corte Suprema de Justicia- la AFP se constituye en un agente oficioso que hizo una gestión que generó utilidades mucho más allá de lo que su titular hubiese podido generar.

Bajo este contexto, resulta absolutamente desproporcionado que la AFP no pueda tener derecho al reembolso de las sumas que generó por su gestión, sin detrimento de la situación final del afiliado ni de Colpensiones, que lo recibe en las mismas condiciones de haberlo tenido siempre como vinculado.



Sin embargo, de llegar a considerarse que no es procedente reintegrar solo el equivalente a los rendimientos del RISS, sino que en su lugar se debe trasladarse la totalidad de los rendimientos financieros generados en el RAIS, debe autorizarse descontar de tal concepto las restituciones mutuas a que haya lugar, pues sin importar la causa que haya dado origen a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación al RAIS se debe reconocer a la AFP las expensas de los gastos que se haya hecho en favor del afiliado en procura de generar dichos rendimientos, bien sea i) reintegrando el porcentaje equivalente al 3% de la cotización mensual realizada al Sistema General de Pensiones por concepto de los gastos de administración (artículo 20 de la Ley 797 de 2003), durante el periodo en el que el afiliado estuvo vinculado a Porvenir o bien ii) pagando el valor que corresponda al costo de tener una persona afiliada a la AFP y generar los rendimientos obtenidos.

Lo anterior teniendo en cuenta que la justicia no puede desconocer que la AFP desarrolló durante un periodo determinado la administración de unos recursos que incrementaron notoriamente el saldo de la cuenta de ahorro individual y por ende debe realizar las compensaciones mutuas que tengan lugar, y no simplemente ordenar el traslado de los gastos de administración a COLPENSIONES, como quiera que tanto Colpensiones como las diferentes AFP reciben esta comisión a manera de retribución por los servicios que prestará al afiliado.

No ordenar la aplicación de las restituciones mutuas, ni compensaciones solicitadas por Porvenir sobre los rendimientos financieros generados, es generar un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones y/o el Estado "régimen de prima media con prestación definida", al permitir que dicha entidad se beneficie sin haber ejercido la administración de tales recursos durante los periodos anulados.

Establece el Artículo 1746 del Código Civil: *"La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita."*

En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluntarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo.

Cuando se ha declarado la nulidad o ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que se deben eliminar todos los efectos producidos por dicho acto, ordenado en consecuencia a las AFP el traslado de la totalidad de los dineros recibidos a título de cotizaciones a la administradora del RPM. Esto ha implicado, que las AFP deban devolver los dineros correspondientes a los gastos de administración y comisiones, incluido en algunas

ocasiones el valor desembolsado para cubrir la prima de seguro previsional, desconociendo que existen prestaciones que por su naturaleza no pueden retrotraerse y que constituyen un límite o excepción a los efectos retroactivos de la declaratoria de ineficacia.

10. IMPROCEDENCIA DEL TRASLADO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PRIMA DE SEGURO PREVISIONAL COMO CONSECUENCIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD

En el hipotético caso de que se declare la nulidad o la ineficacia del acto de traslado de régimen pensional que es materia del presente proceso no resulta viable que, como parte de las prestaciones mutuas que correspondan, se ordene a la administradora demandada la devolución de los gastos destinados a la administración y de las sumas que ha pagado por concepto de primas de los seguros previsionales que ha estado obligada a contratar. Ello es así porque las sumas correspondientes a los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica que, en este caso, cumplió plenamente su cometido en el periodo en el cual el demandante ha mantenido su vinculación con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de tal suerte que esas sumas ya fueron debidamente invertidas en la forma exigida por la ley y no se encuentran ya en poder de la demandada, pues fueron destinadas a cubrir todos los gastos que ha implicado la correcta administración de los recursos aportados a la cuenta individual de el demandante, principalmente el manejo de las inversiones tendientes a obtener el incremento o rentabilidad de esos recursos.

No tiene ningún sentido, y no se corresponde con las normas legales que gobiernan las restituciones mutuas en caso de nulidad de un acto jurídico, que la persona a la cual se le ordena restituir o devolver un bien, en este caso unas sumas depositadas en una cuenta, igualmente deba devolver las sumas que invirtió para mantener ese bien y para incrementarlo, en cumplimiento de mandatos legales que está obligada a acatar. Es claro, por lo tanto, que las sumas destinadas a los gastos de administración ya se agotaron o extinguieron por haber sido destinadas al cumplimiento de su objetivo: manejar los fondos y las cuentas individuales. No están en poder de la administradora, ya que por exigencia de la ley estuvo obligada a invertirlas en la obtención de la rentabilidad mínima que debe garantizar.

En el mismo orden de ideas, tampoco es procedente que la administradora deba restituir las sumas que pagó por concepto de primas de los seguros previsionales, por cuanto ya no están en su poder, sino en el de la compañía aseguradora que contrató para la cobertura del pago de las sumas adicionales necesarias para financiar las prestaciones que, por mandato legal, así lo requieran. La destinación de estas sumas también cumplió su objetivo y, en consecuencia, aquellas se agotaron y extinguieron. La cobertura que brindó la respectiva compañía de seguros ya se hizo efectiva y no puede retrotraerse en el tiempo, por ser material y jurídicamente imposible. Por esa misma razón, no es viable que se restituyan las sumas que sirvieron para que esa cobertura se presentara, con mayor razón si no cumplirían ningún objetivo en el Régimen de Prima Media, en el cual no existe

la necesidad de contratar seguros previsionales para los fines que sí están previstos en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Que no es jurídicamente procedente ordenar la devolución de gastos de administración y de lo pagado por concepto de prima del seguro previsional surge con claridad de lo que ha conceptuado la Superintendencia Financiera de Colombia⁴, entidad encargada de vigilar, entre otras, a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y que cuenta dentro de sus facultades con la de emitir conceptos doctrinales respecto de los temas de su competencia.

En efecto, luego de explicar las diferencias que existen entre los dos regímenes pensionales, que, pese a coexistir en un ambiente en el que se propende por la libre competencia y el desarrollo económico, no puede pasarse por alto que son excluyentes entre sí. Por ello, es impreciso comparar las mesadas pensionales o el cálculo a través del cual se determinan estas, tanto para quienes se encuentran afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, como para quienes se encuentran afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; lo anterior, debido a que pese a ser dos sistemas que buscan cumplir un mismo objetivo – asegurar los riesgos de vejez, invalidez o muerte-, reconocen prestaciones en condiciones y características totalmente diferentes.

Como muestra de lo anterior, expone la Superintendencia Financiera que, mientras que en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida los afiliados obtienen sus prestaciones en condiciones que ya se encuentran taxativamente regladas en la ley, por su parte, en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, los afiliados obtienen sus prestaciones de acuerdo con los valores que hayan ahorrado en su cuenta individual.

Se expresa igualmente que toda decisión judicial o administrativa de traslado de régimen pensional debe tener en cuenta el objetivo constitucional de estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional, pues no es viable efectuar traslados sin el monto de aportes necesarios en cada régimen; en segundo lugar, el mantenimiento del orden legal, por lo que es imperioso hacer un análisis macro de las consecuencias que se derivan de autorizar o conceder solicitudes de traslado aun cuando los demandantes no cumplan los requisitos legales; y, en tercer lugar, las decisiones deben apoyarse en criterios técnicos que determinen que no se generará una afectación al Régimen de Prima Media con prestación Definida, esto último, a la luz de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

Para esa superintendencia, en lo que tiene que ver puntualmente con el traslado de recursos entre los regímenes pensionales, deben efectuarse de conformidad con la norma específicamente prevista para ello, que lo es el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008. Esta disposición normativa debe aplicarse en todos los casos en que, por cualquier circunstancia, sea necesario efectuar un traslado de recursos, lo que, desde luego, incluye las restituciones que deben hacerse cuando se ordene la nulidad o la ineficacia del traslado.

⁴ Superintendencia Financiera de Colombia, concepto del 15 de enero del 2020, radicación No. 2019152169-003-000.



Consideramos entonces que, existiendo una norma que regula la situación, no se ve ninguna razón atendible para apartarse de ella e incluir conceptos que no contiene y que por razones lógicas no pueden trasladarse.

Afirma la superintendencia: "De esta manera, la normatividad existente permite inferir que en caso de resultar necesario un traslado de recursos del Régimen de Ahorro Individual al de Prima Media, lo procedente, además del traslado de la información correspondiente a la historia laboral del afiliado, es el traslado del valor de la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y lo correspondiente a la garantía de pensión mínima con sus rendimientos", lo cual debe hacerse también cuando se declare la ineficacia del acto de traslado de régimen pensional, "...respetando la destinación de los aportes pensionales realizados y la gestión de administración desarrollada por la administradora que genere los rendimientos que se trasladan a la administradora de destino".

Y en cuanto a las sumas pagadas por concepto de primas de seguros previsionales se ha pronunciado de la siguiente manera: "...en atención a que el porcentaje de la prima del seguro previsional ya fue sufragado y la aseguradora cumplió con su deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, este Despacho no considera viable el traslado de dichos recursos en el caso consultado..."

Como se observa, se considera que las sumas destinadas al pago de seguro previsional y los gastos de administración **no deben ser trasladados** al Régimen de Prima Media en la medida que, durante el periodo de afiliación la AFP cumplió con la finalidad de proporcionar al afiliado el aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte, es decir, se invirtieron conforme con la estructura del Régimen de Ahorro Individual.

Finalmente, y a modo de conclusión, la Superintendencia Financiera de Colombia ha manifestado que lo procedente sería que se respeten las restituciones mutuas que se hayan realizado, que no se ordene el traslado de la prima de seguro previsional, que tampoco se ordene la devolución de la comisión de las cuotas de administración que han sido utilizadas para generar rendimientos a la cuenta individual del afiliado y que corresponden al trabajo de administración de dichos recursos.

Dada la autoridad doctrinal de esa entidad, se considera que los criterios antes expuestos merecen ser considerados y debidamente ponderados en este caso.

12.LAS RESTITUCIONES MUTUAS NO DEBEN COMPRENDER GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES.

Ahora bien, es importante señalar que ha sido común en la resolución de los procesos de ineficacia de la afiliación del traslado que en su momento se realizara del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, que se imponga a la AFP del régimen privado la obligación de asumir con su propio patrimonio las sumas correspondientes a los gastos de administración y primas de seguros previsionales que durante la vigencia de la afiliación del demandante se descontaron del porcentaje total del aporte. De manera que

no sólo se impone como consecuencia la devolución del monto depositado en la cuenta de ahorro individual del afiliado, que contiene aportes y rendimientos, sino que, por demás, se deben asumir sumas que cumplieron con la destinación legal correspondiente.

En este punto es necesario indicar que, desde el establecimiento mismo del sistema general de seguridad social en pensiones, el legislador previó que el porcentaje del aporte realizado por el empleador y el trabajador tuviera una destinación específica, lo que implicaba que el cien por ciento del aporte no estaría destinado a la financiación de la pensión de vejez, sino que el aporte estaría dividido en su finalidad. Es así como el primer inciso del artículo 20 original de la Ley 100 de 1993 contemplaba que, del aporte a pensión, que inicialmente era del 8% para 1994, el 3.5% estaría dirigido al cubrimiento de las contingencias de invalidez y muerte, entendidas como pensión de invalidez y sobrevivientes, así como los gastos de administración en ambos regímenes se causarían.

El panorama anterior no cambió con la expedición de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, pues véase que en el inciso primero de su artículo séptimo estableció que, tratándose de los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sólo el 10.5% del ingreso base de cotización estaría destinado a la financiación de la pensión de vejez, mientras que el 3% restante estaría destinado a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. A su turno, el inciso segundo del artículo en comento señala que, en lo referente al Régimen de Ahorro Individual, sólo estará dirigido a la cuenta de ahorro individual el 10%, pues un 0.5% del IBC se destinaría al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el 3% restante tendría como destino la financiación de gastos de administración y las primas de seguros previsionales, esto es, seguros de invalidez y sobrevivientes.

Así, de la distribución y destinación que la norma prevé en relación con el aporte en cada uno de los regímenes pensionales, es claro que tanto en el RPM como en RAIS el cien por ciento de la cotización no está dirigida a la financiación de la mesada pensional y, por el contrario, al menos un tres por ciento tiene finalidad cubrir las primas de seguros previsionales para las contingencias de invalidez y muerte, así como los gastos en las que incurren las administradoras para la financiación de los aportes.

En la misma línea, el Ministerio de Hacienda en la respuesta dada ante la Corte Constitucional a razón del Auto 583 de 2021 señaló que, a razón de gastos de administración Skandia cobra un 0.9%, protección un 0.97%, Porvenir un 1,03% y Colfondos un 0,8%, mientras que Colpensiones cobra un 1.09%; asimismo, a razón de porcentaje destinado las contingencia de invalidez y muerte, cada una de las administradoras destina desde un 1.91%, para el caso de Colpensiones, hasta in 2.20% para el caso de Colfondos.

Es más, como también resalta el Ministerio de Hacienda, los gastos de administración se destinan por parte de las administradoras, incluyendo Colpensiones, a *"la acreditación de los aportes, los cobros de aportes en moral, la reconstrucción de la historia laboral para*

bono pensional, la administración financiera de los recursos (...), la atención al cliente, el reconocimiento de pensiones y el pago de nómina de pensionados”⁵

En este orden de ideas, es claro que, si lo dispuesto por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en relación con las implicaciones de la ineficacia de la afiliación es dar aplicación a lo señalado en el artículo 1746 del Código Civil y, en consecuencia, a las restituciones mutuas, que en síntesis supone poner a las partes en el estado que se hallarían si no hubiese existido el traslado o la afiliación, lo cierto es que de haber continuado el demandante afiliado al RPM, la administradora de este régimen, al igual que lo hizo la AFP demandada, habría descontado del aporte el 3% del IBC para cubrir con ello sus gastos de administración y la financiación de la pensión de invalidez y muerte. De manera que, tal y como sucede en el RAIS, de no haber operado el traslado de régimen pensional, Colpensiones no contaría con el 3% del IBC para la financiación de la pensión de vejez y, en consecuencia, las restituciones mutuas no deben comprender la devolución de emolumentos con los que no contaría el afiliado o su administradora.

III. EXCEPCIONES

EXCEPCIONES DE FONDO

a. PRESCRIPCIÓN

Sin que se reconozca derecho alguno a favor de la parte demandante, propongo la excepción de prescripción frente a todos aquellos derechos que eventualmente hayan perdido oportunidad de discusión y exigibilidad por el simple pasar del tiempo.

Tenga en cuenta señor Juez que el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo establece un término específico y especial para efectos de la prescripción en materia laboral, el cual a la letra reza lo siguiente:

"Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto."

b. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD

Si en gracia de discusión se aceptara que al momento del traslado de la parte demandante fuese objeto de algún tipo de vicio de consentimiento, no se puede pasar por alto que la pretensión de nulidad se encontraría actualmente prescrita, en atención a lo señalado en el artículo 1750 del Código Civil y los artículos 151 CPT y SS al igual que el artículo 488 CST. Posición que es reiterada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia 22.125 de 2014 indicó:

⁵ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2021). Respuesta a las preguntas remitidas a través del Auto 583 de 2021 (pp. 1-8). Bogotá: Ministerio de Hacienda.



“Es del caso agregar, que de haber existido un vicio que diera lugar a la única nulidad posible para el caso particular, esto es, la relativa, estaría vencido el plazo de cuatro (4) años para pedir la rescisión o nulidad del contrato previsto en el artículo 1750 ídem”

c. COBRO DE LO NO DEBIDO POR AUSENCIA DE CAUSA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

En la medida en la que la afiliación de la accionante al RAIS cuenta con plena validez, al llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, mi representada no se encuentra en obligación de acceder a las peticiones de la demanda.

d. BUENA FE.

Ahora bien, sin que lo presente signifique reconocimiento alguno a favor del demandante, debo señalar que mi representada siempre ha obrado de buena fe, y prueba de ello es que brindó asesoría en debida forma a la accionante, incluso previo al traslado, hecho que hace improcedente cualquier condena en contra de ella.

IV. PRUEBAS

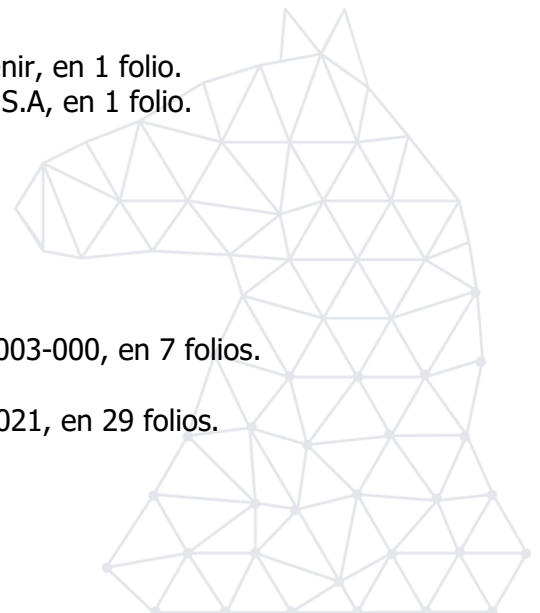
1. INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito al señor Juez que fije fecha y hora para que el demandante comparezca a su despacho a absolver el interrogatorio de parte que le formularé, con exhibición de documentos.

2. DOCUMENTAL

Me permito manifestar que la documental allegada con el presente escrito corresponde a la totalidad de documentos que reposan en el archivo de mi representada, cumpliendo así, lo exigido en la demanda.

1. Formulario de afiliación al Fondo de Pensiones Porvenir, en 1 folio.
2. Certificado de EGRESP expedido por la AFP Porvenir S.A, en 1 folio.
3. Historia Laboral Consolidada, en 4 folios.
4. Reporte Histórico de Movimientos, en 4 folios.
5. Relación de aportes, en 03 folios.
6. Historial de Vinculaciones SIAFP, en 2 folios.
7. Consulta Viabilidad en Asofondos, en 1 folio.
8. Consulta bono pensional, en 1 folio.
9. Concepto Superintendencia Financiera 2019152169-003-000, en 7 folios.
10. Comunicados de Prensa, en 3 folios.
11. Respuesta del Ministerio de Hacienda-auto 583 de 2021, en 29 folios.



3. PRUEBAS EN PODER DE LA DEMANDADA PORVENIR:

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero del art. 31 del CPTSS, se allega la documental solicitada que se encuentra en poder de mi representada, concretamente los soportes que hacen parte del expediente administrativo del demandante, y que se encuentran relacionados en el acápite de pruebas.

V. ANEXOS

Anexo a la presente contestación de demanda los siguientes documentos:

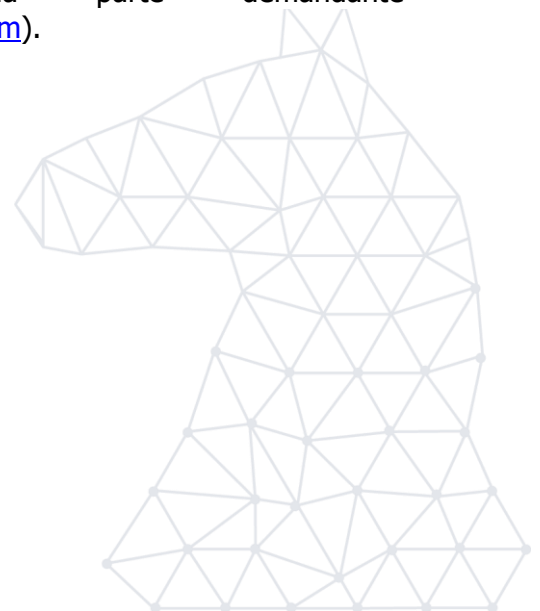
1. Los documentos relacionados en el respectivo acápite.
2. Copia de la escritura pública en la que se otorgó poder a Godoy Córdoba S.A.S. por parte de Porvenir S.A.
3. Copia del certificado de existencia y representación de Godoy Córdoba S.A.S., firma en la que me encuentra inscrito como abogado.
4. Copia de mi cedula de ciudadanía y de mi tarjeta profesional de abogado

VII. NOTIFICACIONES.

En mi oficina ubicada en la Avenida Calle 84 No. 10-33, piso 11 de la ciudad de Bogotá; notificaciones electrónicas a los correos: notificaciones@godoycordoba.com y dramirez@godoycordoba.com.

VI. TRASLADO A LAS DEMÁS PARTES

En esta oportunidad en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, y en el numeral 14 del art. 78 del CGP se remite el presente numeral con copia a COLPENSIONES (notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co); PROTECCIÓN (accioneslegales@proteccion.com.co); COLFONDOS (procesosjudiciales@colfondos.com.co) y a la parte demandante (yesid.vega@tgconsultores.net Y maurovp1007@hotmail.com).



De su Señoría,

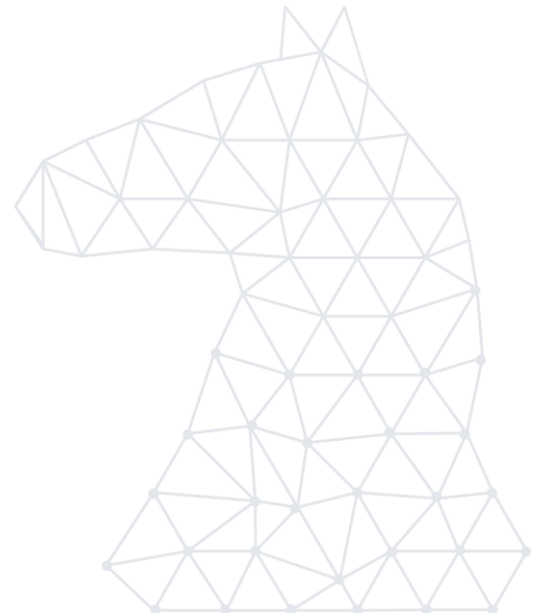


DANIEL FELIPE RAMÍREZ SANCHEZ

C.C. 1.070.018.966 de Cajicá-Cundinamarca

T.P No. 373906 del CJ de la J.

Correo electrónico: dramirez@godoycordoba.com





Porvenir
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.
NIT. 800.144.331-3

SOLICITUD DE VINCULACION

FECHA SOLICITUD			NUMERO	
AÑO	MES	DIA		
95	1	24	105330	

BOGOTA

VINCULACION INICIAL	<input type="checkbox"/>	AFP ANTERIOR	
TRASLADO DE AFP	<input type="checkbox"/>	ENTIDAD ADMINISTRADORA ANTERIOR	ISS
TRASLADO DE REGIMEN	<input checked="" type="checkbox"/>		

INFORMACION DEL TRABAJADOR

TIPO DE TRABAJADOR		NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD		TI.	CC.	C.E.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO		SEXO	
DEPENDIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	INDEPENDIENTE	<input type="checkbox"/>	4280283		X	COLOMBIANA	64	08	7	M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		PRIMER NOMBRE			SEGUNDO NOMBRE				
Maldonado		Maldonado		Luz			Eduardo				
DIRECCION DE RESIDENCIA				CIUDAD		DEPARTAMENTO		TELEFONO			
cr. 43 # 77-40				BOGOTA		CUNDINA		379018			
DIRECCION DONDE TRABAJA				CIUDAD		DEPARTAMENTO		TELEFONO EXT.			
cl. 37 # 72A-19				BOGOTA		CUNDINA		288 6130			
APARTADO AEREO		ENVIO		RESIDENCIA		LUGAR DONDE TRABAJA		APARTADO AEREO			
		CORRESPONDENCIA		<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
HA COTIZADO MAS DE 150 SEMANAS EN EL I.S.S. O CAJAS?											
NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/>		I.S.S. <input checked="" type="checkbox"/>		CAJANAL <input type="checkbox"/>		CAJA DEPARTAMENTAL <input type="checkbox"/>		CUAL	
EN CASO AFIRMATIVO IDENTIFIQUE EN CUAL ENTIDAD											
CAJA MUNICIPAL <input type="checkbox"/>		CUAL		OTRA <input type="checkbox"/>		CUAL					

INFORMACION VINCULO LABORAL ACTUAL

OCCUPACION O CARGO ACTUAL		SALARIO O INGRESO MENSUAL		% COTIZACION VOLUNTARIA	COMISION
Periodista		<input checked="" type="checkbox"/>			
NIT. O C.C. DEL EMPLEADOR		SALARIO INTEGRAL			
390.903.910-2		<input type="checkbox"/> \$469.000			
DIRECCION CORRESPONDENCIA EMPLEADOR		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
cl. 37 # 12A-19		R. e. n. Rodio			
		CIUDAD		DEPARTAMENTO	
		BOGOTA		CUNDINA	
				TELEFONO	
				288 6130	

INFORMACION BENEFICIARIOS

APELLIDOS Y NOMBRES		NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CLASE	FECHA DE NACIMIENTO			SEXO	CODIGO PARENTESCO	CODIGOS PARENTESCO	
SI SON MAS DE CINCO (5) BENEFICIARIOS, ADJUNTE RELACION			CC.	TI.	AÑO	MES	DIA	M	F	
Concepcion Mariana Vt. de Maldonado					68	02	05	X	03	01 CONYUGE
Carter Julio Maldonado					27	02	05	X	06	02 COMPAÑERO (A) PERMANENTE
Luz Dary Maldonado					33	02	05	X	06	03 PADRE O MADRE
										04 HIJOS
										05 HIJOS INVALIDOS
										06 HERMANOS INVALIDOS

LEA INSTRUCCIONES AL RESPALDO

RESPONSABLE FONDO DE PENSIONES	
NOMBRE	M. Contreras H.
REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
ZONA	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECTOR	<input checked="" type="checkbox"/>
ASESOR COMERCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
FIRMA ASESOR COMERCIAL	

FIRMA EMPLEADOR	
AUMENTO QUE LOS ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR PRESENTE CONTRATO SON LOS QUE CORRESPONDEN QUE ME HA SIDO SUMINISTRADA.	
OK	
BANCO	
BOGOTA <input type="checkbox"/> LAS VILLAS <input type="checkbox"/> OCCIDENTE <input type="checkbox"/> PORVENIR <input type="checkbox"/>	

VOLUNTAD DE AFILIACION	
HAGO CONSTAR, QUE REALIZO DE FORMA LIBRE, ESPONTANEA Y SIN PRESIONES LA SELECCION AL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, ASI COMO LA SELECCION DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR PARA QUE SEA LA UNICA QUE ADMINISTRE MIS APORTES PENSIONALES. TAMBIEN DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA SOLICITUD SON VERDADEROS.	
X	
FIRMA DEL TRABAJADOR	
4280283 Tara	
LLAME GRATIS	
TELEPORVENIR 9-800-10-800	



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3**

INFORMA QUE:

El (la) Señor (a) **MALDONADO MORENO LUIS EDUARDO** identificado (a) con CC 4280283, presenta en su cuenta individual número 405410 del **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS** los siguientes datos:

Vigencias

FECHA DE INICIO	FECHA DE RETIRO	ENTIDAD TRASLADO
01/02/1995	30/06/2000	FONDO DE PENS OBLIG COLFONDOS

Empleadores que efectuaron aportes:

NIT	RAZÓN SOCIAL
860,025,674	CARACOL TELEVISION S A
890,903,910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S

Valores Traslados:

FECHA PAGO	VALOR	ENTIDAD
12/11/2015	\$706,455	FONDO DE PENS OBLIG PROTECCION
24/08/2011	\$1,135,539	FONDO DE PENS OBLIG COLFONDOS

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Nombre afiliado:

Luis Maldonado

Tipo y número de documento:

CC 4,280,283

Fecha de nacimiento:

01/08/1964

Tu Historia Laboral Consolidada



¿Te hacen falta semanas cotizadas?
Para actualizar tu Historia Laboral,
[haz clic aquí](#)



¿Cuántas semanas cotizadas
tienes en los últimos 3 años?

0

Si has cotizado por lo menos 50 semanas en este periodo
estás cubierto por un seguro previsional que te ampara a ti y
a tu familia, teniendo en cuenta los demás requisitos legales.

* El valor del bono pensional es un cálculo provisional y no debe entenderse en ningún caso como una situación jurídica concreta y definitiva, el mismo puede variar por cambios en su historia laboral o por el tipo de redención de su bono pensional

Nombre Afiliado:

Luis Maldonado

Tipo y número documento:

CC 4,280,283



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	02/1995	02/1995	\$ 1,060,016	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	03/1995	03/1995	\$ 561,335	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	04/1995	04/1995	\$ 627,610	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	05/1995	05/1995	\$ 552,475	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	06/1995	06/1995	\$ 566,474	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	07/1995	07/1995	\$ 827,898	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	08/1995	08/1995	\$ 624,331	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	09/1995	09/1995	\$ 765,960	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	10/1995	10/1995	\$ 588,941	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	11/1995	11/1995	\$ 631,869	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	12/1995	12/1995	\$ 598,486	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	01/1996	01/1996	\$ 766,740	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	02/1996	02/1996	\$ 624,539	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	03/1996	03/1996	\$ 727,076	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	04/1996	04/1996	\$ 717,282	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	05/1996	05/1996	\$ 936,341	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	06/1996	06/1996	\$ 781,592	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	07/1996	07/1996	\$ 849,766	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	08/1996	08/1996	\$ 795,227	30			



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	09/1996	09/1996	\$ 741,013	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	10/1996	10/1996	\$ 769,581	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	11/1996	11/1996	\$ 854,700	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	12/1996	12/1996	\$ 733,611	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	01/1997	01/1997	\$ 880,482	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	02/1997	02/1997	\$ 873,273	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	03/1997	03/1997	\$ 966,270	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	04/1997	04/1997	\$ 1,018,341	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	05/1997	05/1997	\$ 1,026,144	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	06/1997	06/1997	\$ 966,270	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	07/1997	07/1997	\$ 908,625	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	08/1997	08/1997	\$ 1,036,178	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	09/1997	09/1997	\$ 964,040	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	11/1997	11/1997	\$ 924,230	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	12/1997	12/1997	\$ 1,011,146	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	01/1998	01/1998	\$ 1,124,871	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	02/1998	02/1998	\$ 1,297,175	30			
NIT	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	03/1998	03/1998	\$ 25,203	1			
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	08/1998	08/1998	\$ 83,333	5			

Nombre Afiliado:

Luis Maldonado

Tipo y número documento:

CC 4,280,283



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	09/1998	09/1998	\$ 2,250,000	30			
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	10/1998	11/1998	\$ 2,000,000	60			
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	12/1998	12/1998	\$ 2,694,667	30			
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	01/1999	05/1999	\$ 2,000,000	148			
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	06/1999	06/1999	\$ 3,000,005	30			
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	07/1999	08/1999	\$ 2,000,000	60			
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	09/1999	09/1999	\$ 3,002,000	30			
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	10/1999	11/1999	\$ 2,280,000	60			
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	12/1999	12/1999	\$ 3,434,000	30			
NIT	860025674	CARACOL TELEVISION S A	01/2000	04/2000	\$ 2,280,000	120			
							Total de semanas cotizadas:		
							240.5		

Para tus
solicitudes
consulta

Servifácil
porvenir





SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
Relacion Historica de Movimientos Porvenir

Cédula	4280283	Nombre	LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO	Numero Cuenta	405410
Dirección	KR 43 77 40	Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA
Estado Afiliado	NO_VIGENTE	SubEstado Afiliado	TRASLADO_SALIDA	Fecha Generación Informe	2023/05/31
Fecha Afiliación	1995/01/04	Fecha Efectividad Afiliación	1995/02/01	Tipo de Vinculación	TRASLADO DE REGIMEN

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2015/09/07	199502	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	47,701	18,550	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1995/03/10	199502	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	47,701	18,551	5,300	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1995/04/10	199503	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	50,520	19,648	5,613	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1995/05/08	199504	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	56,485	21,967	6,276	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1995/06/07	199505	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	49,723	19,337	5,475	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1995/07/07	199506	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	50,983	19,825	5,665	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2010/07/21	199507	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	19,385	7,539	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1995/08/04	199507	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	57,064	22,192	6,341	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1995/09/07	199508	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	56,190	21,854	6,243	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2010/07/21	199509	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	18,222	7,086	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1995/10/06	199509	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	53,144	20,667	6,303	0	0	3,693	0	0	Pen. Obli. Moderado
1995/11/07	199510	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	53,005	20,615	5,889	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1995/12/07	199511	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	56,868	22,116	6,319	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/01/10	199512	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	53,864	20,948	5,985	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/02/09	199601	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	76,674	26,834	7,667	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/03/08	199602	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	62,454	21,858	6,245	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/04/10	199603	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	72,708	25,448	7,271	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
1996/05/08	199604	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	71,728	25,104	7,173	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/06/07	199605	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	77,407	27,093	7,741	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2010/07/21	199605	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	19,473	6,816	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/07/09	199606	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	78,159	27,357	7,816	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/08/08	199607	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	84,977	29,743	8,498	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/09/09	199608	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	79,523	27,833	7,952	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/10/09	199609	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	74,101	25,935	7,410	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/11/07	199610	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	77,031	26,961	7,696	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1996/12/09	199611	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	85,470	29,914	8,547	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/01/08	199612	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	73,361	25,670	7,336	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/02/07	199701	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	88,048	30,816	8,805	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/03/10	199702	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	87,327	30,565	8,733	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/04/09	199703	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	96,627	33,821	9,663	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/05/09	199704	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	101,834	35,642	10,183	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/06/10	199705	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	102,614	35,914	10,261	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/07/09	199706	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	96,627	33,821	9,663	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/08/08	199707	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	90,863	31,801	9,086	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/09/09	199708	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	103,618	36,266	10,362	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/10/10	199709	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	96,404	33,740	9,640	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1997/12/10	199711	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	92,423	32,349	9,242	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2010/07/21	199712	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	19,755	6,914	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1998/01/13	199712	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	84,652	29,628	8,465	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2010/07/21	199801	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	19,913	6,969	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1998/02/10	199801	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	95,893	33,563	9,589	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1998/03/10	199802	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	113,262	39,642	11,326	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2010/07/21	199802	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	19,747	6,912	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1998/04/07	199803	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	2,520	882	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/03/05	199808	860025674	CARACOL TELEVISION S A	8,331	2,916	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/03/05	199809	860025674	CARACOL TELEVISION S A	224,971	78,740	22,500	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/03/05	199810	860025674	CARACOL TELEVISION S A	199,951	69,983	20,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/03/05	199811	860025674	CARACOL TELEVISION S A	199,952	69,983	20,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/04/23	199812	860025674	CARACOL TELEVISION S A	269,402	94,291	26,947	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/04/23	199901	860025674	CARACOL TELEVISION S A	199,933	69,976	20,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/04/23	199902	860025674	CARACOL TELEVISION S A	199,910	69,968	20,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/05/28	199903	860025674	CARACOL TELEVISION S A	200,000	70,000	20,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/06/23	199904	860025674	CARACOL TELEVISION S A	200,000	70,000	20,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/08/05	199905	860025674	CARACOL TELEVISION S A	200,000	70,000	20,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/08/27	199906	860025674	CARACOL TELEVISION S A	300,001	105,000	30,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/09/24	199907	860025674	CARACOL TELEVISION S A	200,000	70,000	20,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/10/22	199908	860025674	CARACOL TELEVISION S A	199,987	69,995	20,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/11/26	199909	860025674	CARACOL TELEVISION S A	300,222	105,078	30,000	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
1999/12/28	199910	860025674	CARACOL TELEVISION S A	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2000/05/05	199911	860025674	CARACOL TELEVISION S A	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2000/05/05	199912	860025674	CARACOL TELEVISION S A	343,407	120,193	34,300	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2000/05/05	200001	860025674	CARACOL TELEVISION S A	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2000/05/05	200002	860025674	CARACOL TELEVISION S A	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2000/05/23	200003	860025674	CARACOL TELEVISION S A	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2000/06/20	200004	860025674	CARACOL TELEVISION S A	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2000/07/25	200007	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	(13,105,786)	0	0	0	0	(12,640)	0	0	Pen. Obli. Moderado
2005/07/27	200507	2303	SOCIEDAD ADMINISTRADORA PORVENIR S.A.	442,119	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2011/08/24	201108	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	(1,135,539)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/11/12	201511	800138188	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A.	(706,455)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Saldo actual de la cuenta

Fecha de Generación	Saldo Obligatorio	Saldo Voluntario Empleador	Saldo Voluntario Afiliado
31/05/2023	0	0	0




SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
Relacion de aportes

Cédula	4280283	Nombre	LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO	Numero Cuenta	405410
Dirección	KR 43 77 40	Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA
Estado Afiliado	NO_VIGENTE	SubEstado Afiliado	TRASLADO_SALIDA	Fecha Generación Informe	2023/06/06
Fecha Afiliación	1995/01/04	Fecha Efectividad Afiliación	1995/02/01	Tipo de Vinculación	TRASLADO DE REGIMEN


Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	IBC	Dias Cotizados	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion
1995/03/10	199502	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	530,008	30	47,701	18,551	5,300	0	0	0	0	0
2015/09/07	199502	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	530,008	30	47,701	18,550	0	0	0	0	0	0
1995/04/10	199503	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	561,335	30	50,520	19,648	5,613	0	0	0	0	0
1995/05/08	199504	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	627,610	30	56,485	21,967	6,276	0	0	0	0	0
1995/06/07	199505	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	552,475	30	49,723	19,337	5,475	0	0	0	0	0
1995/07/07	199506	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	566,474	30	50,983	19,825	5,665	0	0	0	0	0
1995/08/04	199507	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	634,048	30	57,064	22,192	6,341	0	0	0	0	0
2010/07/21	199507	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	215,389	27	19,385	7,539	0	0	0	0	0	0
1995/09/07	199508	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	624,331	30	56,190	21,854	6,243	0	0	0	0	0
1995/10/06	199509	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	590,489	30	53,144	20,667	6,303	0	0	3,693	0	0
2010/07/21	199509	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	202,467	26	18,222	7,086	0	0	0	0	0	0
1995/11/07	199510	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	588,941	30	53,005	20,615	5,889	0	0	0	0	0
1995/12/07	199511	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	631,869	30	56,868	22,116	6,319	0	0	0	0	0
1996/01/10	199512	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	598,486	30	53,864	20,948	5,985	0	0	0	0	0
1996/02/09	199601	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	766,740	30	76,674	26,834	7,667	0	0	0	0	0
1996/03/08	199602	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	624,539	30	62,454	21,858	6,245	0	0	0	0	0
1996/04/10	199603	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	727,076	30	72,708	25,448	7,271	0	0	0	0	0

Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	IBC	Dias Cotizados	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion
1996/05/08	199604	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	717,282	30	71,728	25,104	7,173	0	0	0	0	0
1996/06/07	199605	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	774,066	30	77,407	27,093	7,741	0	0	0	0	0
2010/07/21	199605	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	194,730	25	19,473	6,816	0	0	0	0	0	0
1996/07/09	199606	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	781,592	30	78,159	27,357	7,816	0	0	0	0	0
1996/08/08	199607	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	849,766	30	84,977	29,743	8,498	0	0	0	0	0
1996/09/09	199608	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	795,227	30	79,523	27,833	7,952	0	0	0	0	0
1996/10/09	199609	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	741,013	30	74,101	25,935	7,410	0	0	0	0	0
1996/11/07	199610	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	769,581	30	77,031	26,961	7,696	0	0	0	0	0
1996/12/09	199611	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	854,700	30	85,470	29,914	8,547	0	0	0	0	0
1997/01/08	199612	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	733,611	30	73,361	25,670	7,336	0	0	0	0	0
1997/02/07	199701	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	880,482	30	88,048	30,816	8,805	0	0	0	0	0
1997/03/10	199702	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	873,273	30	87,327	30,565	8,733	0	0	0	0	0
1997/04/09	199703	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	966,270	30	96,627	33,821	9,663	0	0	0	0	0
1997/05/09	199704	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	1,018,341	30	101,834	35,642	10,183	0	0	0	0	0
1997/06/10	199705	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	1,026,144	30	102,614	35,914	10,261	0	0	0	0	0
1997/07/09	199706	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	966,270	30	96,627	33,821	9,663	0	0	0	0	0
1997/08/08	199707	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	908,625	30	90,863	31,801	9,086	0	0	0	0	0
1997/09/09	199708	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	1,036,178	30	103,618	36,266	10,362	0	0	0	0	0
1997/10/10	199709	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	964,040	30	96,404	33,740	9,640	0	0	0	0	0
1997/12/10	199711	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	924,230	30	92,423	32,349	9,242	0	0	0	0	0
1998/01/13	199712	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	846,521	30	84,652	29,628	8,465	0	0	0	0	0
2010/07/21	199712	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	197,550	25	19,755	6,914	0	0	0	0	0	0
1998/02/10	199801	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	958,930	30	95,893	33,563	9,589	0	0	0	0	0
2010/07/21	199801	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	199,130	25	19,913	6,969	0	0	0	0	0	0
1998/03/10	199802	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	1,132,617	30	113,262	39,642	11,326	0	0	0	0	0

Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	IBC	Dias Cotizados	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion
2010/07/21	199802	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	197,470	25	19,747	6,912	0	0	0	0	0	0
1998/04/07	199803	890903910	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S	25,203	1	2,520	882	0	0	0	0	0	0
1999/03/05	199808	860025674	CARACOL TELEVISION S A	83,333	5	8,331	2,916	0	0	0	0	0	0
1999/03/05	199809	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,250,000	30	224,971	78,740	22,500	0	0	0	0	0
1999/03/05	199810	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,000,000	30	199,951	69,983	20,000	0	0	0	0	0
1999/03/05	199811	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,000,000	30	199,952	69,983	20,000	0	0	0	0	0
1999/04/23	199812	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,694,667	30	269,402	94,291	26,947	0	0	0	0	0
1999/04/23	199901	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,000,000	30	199,933	69,976	20,000	0	0	0	0	0
1999/04/23	199902	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,000,000	28	199,910	69,968	20,000	0	0	0	0	0
1999/05/28	199903	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,000,000	30	200,000	70,000	20,000	0	0	0	0	0
1999/06/23	199904	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,000,000	30	200,000	70,000	20,000	0	0	0	0	0
1999/08/05	199905	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,000,000	30	200,000	70,000	20,000	0	0	0	0	0
1999/08/27	199906	860025674	CARACOL TELEVISION S A	3,000,005	30	300,001	105,000	30,000	0	0	0	0	0
1999/09/24	199907	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,000,000	30	200,000	70,000	20,000	0	0	0	0	0
1999/10/22	199908	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,000,000	30	199,987	69,995	20,000	0	0	0	0	0
1999/11/26	199909	860025674	CARACOL TELEVISION S A	3,002,000	30	300,222	105,078	30,000	0	0	0	0	0
1999/12/28	199910	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,280,000	30	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0
2000/05/05	199911	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,280,000	30	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0
2000/05/05	199912	860025674	CARACOL TELEVISION S A	3,434,000	30	343,407	120,193	34,300	0	0	0	0	0
2000/05/05	200001	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,280,000	30	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0
2000/05/05	200002	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,280,000	30	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0
2000/05/23	200003	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,280,000	30	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0
2000/06/20	200004	860025674	CARACOL TELEVISION S A	2,280,000	30	228,000	79,800	22,800	0	0	0	0	0



Asociación colombiana de administradores
de fondos de pensiones y cesantías




USUARIO: PVOMUNZAM


OLGA MILENA MUNZA MOLANO


6 de Junio de 2023


[Registrar servicio](#)


Buscar en Wiki SIAFP











Afiliados

Personas

Aportantes

Pagos

Entrega HL al RPM

Documentación

Usuarios

Administrador de Tareas

Historial de vinculaciones

Hora de la consulta : 10:58:19 AM
Afiliado: CC 4280283 LUIS EDUARDO MALDONADO MORENO

Vinculaciones para : CC 4280283							
Tipo de vinculación	Fecha de solicitud	Fecha de proceso	AFP destino	AFP origen	AFP origen antes de reconstrucción	Fecha inicio de efectividad	Fecha fin de efectividad
Traslado regimen	1995-01-04	2004/04/16	PORVENIR COLPENSIONES			1995-02-01	2000-06-30

Un item encontrado.
1

Vinculaciones migradas de Mareigua para: CC 4280283						
Fecha de novedad	Fecha de proceso	Código de novedad	Descripción	AFP	AFP involucrada	
1995-01-04	1996-06-13	01	AFILIACION	PORVENIR		
2000-05-15	2000-06-09	79	TRASLADO AUTOMATICO	COLFONDOS	PORVENIR	

2 registros encontrados, visualizando todos registros.
1

Imprimir

Regresar

Copyright © 2015 Asofondos. Derechos reservados



USUARIO: PVOMUNZAM

OLGA MILENA MUNZA MOLANO

6 de Junio de 2023

[Registrar
servicio](#)Buscar en Wiki SIAFP [Afiliados](#) ➤ [Personas](#) ➤ [Aportantes](#) ➤ [Pagos](#) ➤ [Entrega HL al RPM](#) ➤ [Documentación](#) ➤ [Usuarios](#) ➤ [Administrador de Tareas](#) ➤

Consulta de viabilidad

Hora de la Consulta : 10:57:42 AM

Los resultados obtenidos de la consulta son:

Identificación :	CC 4280283
Apellidos :	MALDONADO MORENO
Nombres :	LUIS EDUARDO
Certificado por :	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Fecha de certificación :	2021/10/20
Código de vigencia :	00 VIGENTE
Novedad de respuesta :	037 Afiliado a otro Administradora. Traslado viable AFP
Lugar de expedición :	TOCA
Fecha de expedición :	1983/06/22
Género :	M
Fecha de nacimiento :	1964/08/01
Edad :	58
Indicador fecha de nacimiento verificada :	Si
Nacionalidad :	
Fecha de traslado al RPM :	
Entidad del RPM :	
Entidad certificadora fecha de nacimiento :	ANI

Los cálculos sobre la viabilidad del traslado por edad, los cuales hacen referencia con que al afiliado le falten diez o menos años para pensionarse se realizaron con la fecha certificada en Siafp

[Imprimir](#)[Regresar](#)

SOLICITADO POR	<input type="text" value="mhmvillc 172.27.3.1"/>
FECHA Y HORA	<input type="text" value="06/06/2023 10:58:43"/>
ENTIDAD	<input type="text" value="SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A"/>

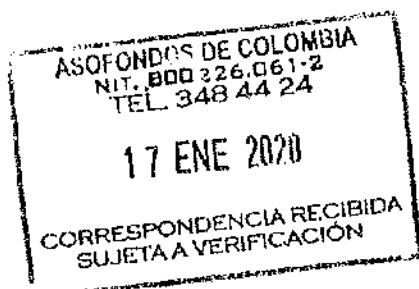
CONSULTA DE BONOS



* Tipo Documento	<input type="text" value="CEDULA CIUDADANIA"/>	Documento	<input type="text" value="4280283"/>
------------------	--	-----------	--------------------------------------

El beneficiario no se encuentra afiliado a la AFP solicitante.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



sfc Superintendencia
Financiera de Colombia

Radicación: 2019152169-003-000

Fecha: 2020-01-15 15:28 Sec. día 722

Anexos: No

Trámite: 116-CONSULTAS ESPECÍFICAS

Tipo doc: 39-RESPUESTA FINAL E

Remitente: 410000-DELEGATURA PARA PENSIONES

Destinatario: 114 - 30-ASOFONDOS - ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CE

Doctora

Clara Elena Reales

Vicepresidenta Jurídica

Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías ASOFONDOS

Calle 72 No. 8-24, Oficina 901

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019152169-003-000
Trámite : 116 CONSULTAS ESPECÍFICAS
Actividad : 39 RESPUESTA FINAL E
Expediente : AFILIAC-PENS-DEV
Anexos :

Respetada doctora Clara Elena:

Con todo gusto damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, en la cual, después de realizar una breve alusión al marco normativo que regula lo concerniente a la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación pensional, plantea tres interrogantes sobre el trato que debe darse a los aportes pensionales cuando se configuran las situaciones reseñadas.

Al respecto, previo a dar respuesta a los interrogantes que se relacionan en su escrito este Despacho encuentra oportuno hacer las siguientes consideraciones en relación con la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación pensional, así:

El Sistema General de Pensiones (SGP), creado por la Ley 100 de 1993, integra dos regímenes pensionales excluyentes entre sí pero que coexisten, estableciendo, entre otras características, la posibilidad de trasladarse libremente entre estos atendiendo unos términos mínimos de permanencia y edad, así como la de sumar de las cotizaciones hechas en ambos para efectos de reunir las condiciones que dan derecho a las prestaciones que este Sistema otorga a sus afiliados.

No obstante, en cuanto a las prestaciones que se reconocen en uno y otro régimen, el legislador dispone reglas que no permiten que su resultado sea comparable, si bien su finalidad es en ambos casos la *"garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones"*¹, en el Régimen Solidario de Prima Média con Prestación Definida (RPM), los afiliados obtienen prestaciones cuyas condiciones y montos se encuentran definidos en la ley y en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) las pensiones y prestaciones que se reconocen dependen directamente de los valores ahorrados en la cuenta individual de los afiliados².

¹ Artículo 10 de la Ley 100 de 1993

² Sobre el tema, la Corte Constitucional en Sentencia C-538 del 16 de octubre de 1996, destacó como principales diferencias las siguientes:

³ En el régimen de prima media con prestación definida los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definidas en la ley.

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

Conmutador: (571) 5 94 02 00 -- 5 94 02 01

www.superfinanciera.gov.co



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es importante considerar que el legislador en el diseño de la estructura de este Sistema tuvo en cuenta razones como *la viabilidad financiera, la falta de equidad y la baja cobertura del mismo*, las deficiencias administrativas, pero también se optó por un sistema que estimulara la libre competencia entre Regímenes y el ejercicio del derecho a elegir el régimen pensional y la administradora por parte de los afiliados, según sus intereses.

Sin embargo, las diferencias de origen legal entre los regímenes pensionales que pueden derivar en prestaciones de distintas cuantías generan inconformidades entre los afiliados que, después de cumplidos los años para pensionarse, encuentran un mejor beneficio en el régimen contrario, por lo que tienden a solicitar el traslado por fuera del término legal o la anulación de la afiliación.

En ese sentido, debe decirse que el marco legal³ para la procedencia de los traslados entre regímenes es claro y no da lugar a interpretaciones diferentes más allá del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas. Resulta evidente además que, en aras de salvaguardar los derechos de los afiliados, en distintas épocas desde la vigencia del Sistema General de Pensiones, se ha dado la posibilidad de regresar al régimen del cual se habían trasladado, sin contar que desde el inicio del SGP, una vez decidido el traslado, el afiliado tiene derecho al retracto.

El sistema dual acogido en el sistema pensional colombiano, es desarrollo de lo dispuesto en la Constitución Política, de allí que el legislador dentro de su libertad de creación normativa hubiese proferido la Ley 100 de 1993 para generar un correcto funcionamiento de la seguridad social con solidaridad, entendido este como un servicio público de carácter obligatorio, que se encuentra bajo la dirección y responsabilidad del Estado y que a su vez cuenta con la participación de los particulares, para de esta forma atender las prestaciones que se derivan de los riesgos del trabajo y de la necesidad de otorgar a las personas los medios para una subsistencia digna, cuando en razón de la edad ya no disponen de una adecuada capacidad de trabajo.

Quiere ello decir que no se podría a través de la Ley 100 de 1993 ni de sus decretos reglamentarios menoscabar las libertades individuales de las personas, entre ellas, la libertad de escogencia (libertad contractual), para lo cual es preciso revisar lo dispuesto en el artículo 1502 del Código Civil, el cual reza:

"ARTICULO 1502. <REQUISITOS PARA OBLIGARSE>. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

- 1o.) que sea legalmente capaz.
- 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
- 3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.
- 4o.) que tenga una causa lícita.

En este régimen son aplicables disposiciones vigentes para los sistemas de invalidez, vejez y muerte a cargo del I.S.S. y además las disposiciones sobre las materias contenidas en la Ley 100/93 (art. 31).

Dicho régimen se caracteriza porque los aportes de los afiliados y empleadores y sus rendimientos integran un fondo común de naturaleza pública, mediante el cual se garantiza el pago de las prestaciones a cargo de los recursos de dicho fondo, los gastos administrativos y las reservas, de acuerdo con la ley.

El administrador exclusivo de dicho régimen es el Instituto de Seguros Sociales, pues fue la única entidad que quedó autorizada para continuar afianzando trabajadores en lo sucesivo; por lo tanto, quedó planteada la competitividad entre dicha entidad y los administradores -fondos de pensiones- del sistema de ahorro individual de pensiones.

En el sistema de ahorro individual con solidaridad se incorporan y administran recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados. Está basado en los recursos del ahorro, administrados en cuentas de propiedad individual de los afiliados, proveniente de las cotizaciones hechas por los empleadores y trabajadores, más los rendimientos financieros generados por su inversión y, eventualmente, de los subsidios del Estado.

(...) Evidentemente al comparar los dos sistemas de pensiones, encuentra la Corte las siguientes diferencias:

• Los requisitos para obtener la pensión de vejez en el sistema de prima media (art. 33) son: haber cumplido 55 años de edad si es mujer, o 60 años de edad si es hombre y haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo. El monto mensual de la pensión de vejez se determina así: por las primeras 1000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación; por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2% llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2% hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente (art. 34), que no podrá ser inferior al valor del salario mínimo mensual vigente y que tiene la garantía estatal a que alude el art. 138.

• En el sistema de ahorro individual con solidaridad, el derecho a la pensión de vejez, en las diferentes modalidades (renta vitalicia inmediata, retiro programado o retiro programado con renta vitalicia o cualesquiera otras autorizadas) se causa en favor del afiliado a la edad que cada uno de ellos escoge, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual le permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de expedición de la ley, o reajustado según el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, o cuando opte por seguir cotizando, en las circunstancias descritas por el art. 64." (Subraya fuera de texto)

³ literales b y e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, Artículo 2.2.2.1. del Decreto 1833 de 2016 que incorpora el artículo 3° del Decreto 1161 de 1994. Parágrafo del artículo 2° del Decreto 1642 de 1995, Artículo 12 del Decreto 3995 de 2008

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01

www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

El emprendimiento
es de todos

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra."

En consonancia con lo anterior, podría decirse que dentro de lo que aquí se analiza, no es materia de discusión que el objeto y la causa en el traslado entre regímenes sean lícitas (existe todo un marco legal que así lo determina), ahora bien, en cuanto a que la persona sea considerada capaz debe verificarse que se den los presupuestos normativos dispuestos en los artículos 1503 y 1504 ibídem.

Respecto del consentimiento para obligarse al momento de suscribir el contrato de afiliación a los distintos regímenes, el numeral 2 del artículo 1502 señala que dicho consentimiento no debe adolecer de vicio alguno, los cuales son determinados en el artículo 1508 ibídem como error, fuerza y dolo, este, es sin dudas el punto crítico y de mayor problemática actualmente.

En relación con el consentimiento informado y libre, es decir, exento de vicios, considera este Despacho que se trata de un asunto meramente probatorio, que debe ser analizado y debatido en juicio, y que a su paso son los jueces de la república los responsables de valorar concienzudamente las pruebas aportadas tanto por administradoras como por afiliados, revisando además las posibles implicaciones financieras que conllevaría para el sistema, ordenar la nulidad de una afiliación, así como el traslado de regímenes.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia SU 062 de 2010 desarrolla la importancia de la prevalencia del orden económico, y al respecto indica: "La efectividad del derecho a cambiar de régimen pensional dentro del marco constitucional y legal vigente depende de que éste pueda ser ejercido sin trabas insalvables. Uno de estos obstáculos es precisamente impedir que el interesado aporte voluntariamente los recursos adicionales en el evento de que su ahorro en el régimen de ahorro individual sea inferior al monto del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido en el régimen de prima media con prestación definida. Esta barrera es salvable si el interesado aporta los recursos necesarios para evitar que el monto de su ahorro, al ser inferior en razón a rendimientos diferentes o a otras causas, sea inferior al exigido. Esto no sólo es necesario dentro del régimen general, sino también en los regímenes especiales con el fin de conciliar el ejercicio del derecho del interesado en acceder a la pensión y el objetivo constitucional de asegurar la sostenibilidad del sistema pensional." (subraya fuera de texto)

Como precedente de la anterior Sentencia de Unificación, el Alto Tribunal indicó en la Sentencia C-1024 de 2004, que "(...) el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudieran trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...) Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)" (Subraya fuera de texto)

En línea con lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional, esta Superintendencia considera que, al momento de evaluarse las solicitudes y demandas de traslado de régimen pensional, debe adoptarse por los operadores administrativos y judiciales criterios tales como: i) el objetivo constitucional de estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional en el que con miras a proteger el orden económico del sistema no es viable efectuar traslados sin el monto de aportes necesarios en cada régimen, y ii) el mantenimiento del orden legal, que puede verse afectado al autorizar o conceder solicitudes de traslados sin el cumplimiento de los requisitos legales toda vez que se dejaría sin piso los criterios de interpretación a la normativa aplicable.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En ese sentido, en consideración de este Despacho, la revisión que se hace a las solicitudes de traslado de régimen por vía judicial, debiera apoyarse en criterios técnicos en los que se determine que no se generará una afectación al Sistema General de Pensiones, atendiendo para ello los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

Respecto de los tres interrogantes, esta Superintendencia estima importante además señalar que la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación al Sistema General de Pensiones que se resuelva judicialmente, debe ser atendida por los actores en los términos que se disponga en los fallos judiciales correspondientes, teniendo en cuenta que, conforme a lo señalado en el artículo 57 de la ley 1480 de 2011, esta Superintendencia no puede en desarrollo de sus funciones jurisdiccionales conocer de ningún asunto de carácter laboral.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta la relevancia del asunto consultado y las posibles implicaciones que tiene para el Sistema General de Pensiones, se emite el siguiente concepto con el alcance indicado en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

a. Vinculación al Sistema General de Pensiones y destinación de los aportes.

Es necesario precisar que la vinculación al Sistema General de Pensiones se realiza a través de la suscripción del formulario de afiliación, este formulario hace las veces de contrato, en el que ambas partes se obligan de manera recíproca. Entre las principales obligaciones tenemos, por un lado, la de efectuar los aportes que correspondan legalmente y, por otro, recibir, administrar y conceder (ante el cumplimiento de los requisitos normativos) las prestaciones a que haya lugar.

Específicamente, en relación con las cotizaciones efectuadas en el Sistema General de Pensiones, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, determina la distribución que deben efectuar las administradoras del mismo, tanto en el Régimen de Prima Media con Solidaridad -RPM- como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad-RAIS-, señalando entre otros lo siguiente:

"Artículo 20. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.*

En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1o. de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores.

(...) Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la presente ley en los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993."

De allí, que el 3% de la cotización de los aportantes se destina a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

Ahora bien, en cuanto al funcionamiento de los recursos pensionales en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-el literal d) del artículo 60 de la mencionada Ley 100, se establece que el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

constituye un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la Administradora.

De la misma manera, en el artículo 100 de la Ley 1003 se establece que, con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema, las administradoras invertirán los recursos de los fondos en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, que hoy se encuentra recogido en el Decreto 2555 de 2010.

Corresponde en este punto precisar que, en el Régimen de Ahorro Individual, los aportes de los afiliados que ingresan al fondo deben cumplir con los requisitos mínimos e invertirse en papeles y activos permitidos, tales como TES, bonos, CDT y acciones, entre otros. Es decir, el dinero que aporta un afiliado para su cuenta individual se encuentra representado en las inversiones que realiza el fondo, donde cada afiliado tiene una cuenta de ahorro individual que se ve representada en unidades de participación del fondo. Dichas inversiones deben ser valoradas diariamente por los Fondos de Pensiones y de Cesantía, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 expedida por esta Superintendencia.

Por lo tanto, las cuentas individuales de los afiliados varían no solo con los aportes y retiros que estos realizan, sino también, por las variaciones en el valor de mercado de las inversiones que conforman los portafolios, las cuales cambian de forma diaria como consecuencia de los cambios en las tasas de interés y de los precios de los diferentes títulos que conforman los citados portafolios; situaciones propias del mercado de valores que fluctúan por factores tanto internos como externos que originan caídas o subidas en los precios de los títulos y demás inversiones y que no dependen del control y gestión de las Administradoras de los Fondos de Pensiones y de Cesantía.

Ahora bien, tal y como se observa en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, las Sociedades Administradoras deben garantizar a los afiliados una rentabilidad mínima en el manejo de los fondos que administran y, en caso de haber un incumplimiento a esta rentabilidad, la misma se garantiza con el patrimonio de dichas sociedades y con la reserva de estabilización. Esta reserva corresponde al 1% del valor del fondo administrado (pensiones obligatorias o cesantías) y debe estar invertida en las mismas condiciones que el correspondiente fondo.

Así mismo, en relación con el porcentaje destinado las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, se encuentra que dichos recursos son sufragados mensualmente, y destinados como lo ordena la norma a la aseguradora contratada, de esta forma el citado porcentaje como bien lo menciona en su oficio, permite a la aseguradora mantener la cobertura respecto del afiliado en relación con los riesgos asegurados (invalidez y muerte) durante la vigencia del seguro.

b. Traslado de recursos entre regímenes del Sistema General de Pensiones SGP

Vale la pena resaltar lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 en el cual, respecto del traslado de recursos entre regímenes del SGP, se establece lo siguiente:

"Artículo 7°. Traslado de recursos. El traslado de recursos pensionales entre regímenes, incluyendo los contemplados en este decreto, así como de la historia laboral en estos casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo siguiente:

Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado.

Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.

Tratándose del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, RPM, la devolución se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos.

Parágrafo. Con ocasión de la definición de la múltiple vinculación de sus afiliados y la determinación de las sumas a trasladar, las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones quedan facultadas para compensar, total o parcialmente, los saldos respectivos" (Subraya fuera de texto).

De esta manera, la normatividad existente permite inferir, que, en caso de resultar necesario un traslado de recursos del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, lo procedente, además del traslado de la información correspondiente a la historia laboral del afiliado, es el traslado del valor de la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y lo correspondiente a la garantía de pensión mínima con sus rendimientos.

Conforme con lo expuesto, de decretarse la ineficacia del acto jurídico de cambio de régimen pensional y/o la nulidad de la afiliación alguno de los regímenes pensionales del SGP, lo que implica el traslado de recursos y de información de un régimen a otro, debe darse la aplicación de lo dispuesto en la norma atrás citada, respetando la destinación de los aportes pensionales realizados y la gestión de administración desarrollada por la administradora que genera los rendimientos que se trasladan a la administradora de destino.

En ese orden de ideas, frente a los interrogantes tenemos:

1. ***¿Al decretarse la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado y ordenar la devolución de recursos, se deben respetar las restituciones mutuas y reconocer los gastos de administración a la administradora de pensiones, tal como establece el artículo 1746 del Código Civil, y solo se debe girar el valor de la cuenta de ahorro individual, con sus rendimientos y lo correspondiente a la garantía de pensión mínima con sus rendimientos?***

Teniendo en cuenta los argumentos atrás planteados, y sin perjuicio de lo que se haya ordenado en algunos de los fallos judiciales correspondientes, este Despacho considera que, al decretarse la nulidad e ineficacia de la afiliación procede el traslado de los saldos de la cuenta de ahorro individual del afiliado, que incluye lo correspondiente a los rendimientos generados como consecuencia de la administración de los recursos efectuada por la administradora, así como los porcentajes destinados a la garantía de la pensión mínima y sus respectivos rendimientos.

2. ***¿Al decretarse la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado y ordenar la devolución de recursos, se deben respetar las restituciones mutuas y excluir las sumas que por concepto de prima de seguro previsional fueron sufragadas a favor del afiliado mientras estuvo vigente su afiliación, dado que la compañía aseguradora mantuvo la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte de su asegurado durante la vigencia del seguro, y además por cuanto operó la figura de la prima devengada?***

En igual sentido, en atención a que el porcentaje de la prima del seguro previsional ya fue sufragado y la compañía aseguradora cumplió con su deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, este Despacho no considera viable el traslado de dichos recursos en el caso consultado; sin perjuicio de la vinculación que a este tipo de procesos se haga a las aseguradoras que han sido contratadas para dichos fines, para que puedan ejercer la defensa de sus intereses.

3. ***Conforme al marco normativo vigente, ¿sería válido el siguiente tratamiento legal que han de recibir los aportes recibidos, cuando por virtud de la declaratoria judicial de nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado, el afiliado debe retornar al RPM?***

Concepto	Devolución
Cuenta de Ahorro Individual (Aportes y Rendimientos)	Si
FGPM (aportes y rendimientos)	Si
Prima de Seguro Previsional	No
Comisión Administración	No

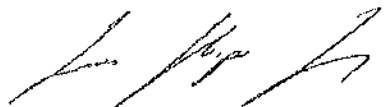


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este Despacho estima válido el tratamiento legal que se plantea en este interrogante, lo anterior, sin perjuicio de las decisiones adoptadas por los tribunales e inclusive por la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre judicial, quienes cuentan las facultades legales para adoptar la posición que en derecho encuentren pertinente.

De esta manera dejamos atendido el objeto de su consulta, con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



LUIS FELIPE JIMENEZ SALAZAR
410000-DELEGADO PARA PENSIONES
DELEGATURA PARA PENSIONES

Copia a:

Elaboró:

JULIANA SIERRA MORALES

Revisó y aprobó:

--**JULIANA SIERRA MORALES**

DERLY JULIET ALARCON PARRA

DERLY JULIET ALARCON PARRA



IMPUESTO / POR CADA DÓLAR ENVIADO, SE DESCUENTAN 11 PESOS

La Dian aclaró que tanto las casas de cambio, como los bancos deben retener este gravamen al momento de entregar el efectivo

La confusión que tenían las casas de cuantos con respecto al deblan cobraro no el cuatro por mil a los beneficiarios de las pensiones, fue aclarada ayer por la Ditan. La entidad aseguró que el impuesto se le debe retener a los receptores de los giros, así lo reciben a través de una casa de cambio o a través de un banco.

El lunes pasado, las casas de cambio dijeron que empezaron a cobrar este impuesto desde el primero de enero, pero los bancos explicaron que no lo cobraban porque lo asumían ellos directamente.

Sin embargo, ayer la Dian aseguró que en un concepto de noviembre del 2003 estableció que en la operación de giro familiares se causa debidamente el impuesto a



LAS CASA DE CAMBIOS ya están cobrando el impuesto

Las transacciones financieras. Debido a que el dinero no se mueve por un sobre, sino por los redes bancarias, la primera causación se da cuando el intermediario realiza el dinero de una cuenta para otro y regresa al beneficiario de la remesa. La segunda se presenta en el momento en que la persona recibe la plata.

Los bancos o las casas de cambio pueden estar exentos del tributo siempre y cuando identifiquen la cuenta que usan para recibir los recursos para el pago de giros (tal como ocurre con las personas naturales que registran las cuentas de

Alfonso García, presidente del gobierno que reúne a los caudatos de cambio, dijo que la autorización de la Dtas pone en igualdad de condiciones a los dos intermediarios.

Una fuente del sector bancario dijo que ellos de todas maneras seguirán asumiendo el impuesto y que no lo van a cobrar a sus usuarios.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Bancaria, Patricia Cárdenas, dijo que el sistema financiero no es partidario del gravamen a las transacciones bancarias y menos a las remesas.

Sobre la postura de la Dian en torno a quién debe pagar el tributo comentó que esa es un tema jurídico que hay que analizar con más detenimiento. Sin embargo, dijo que a la Dian lo que le debe interesar es que alguien lo pague.

Según los cálculos de Garzón, con el cambio por mil por cada dólar enviado en una remesa, al usuario se le descuentan 11 pesos.

El contador general de la Nación, Jaime Alberto Cano, indicó ayer que aunque el empalme contable del fin de año se encuentra en el 50 por ciento se las entidades públicas así como en las alcaldías y gobernaciones la entidad encontró dificultades en Medellín y en los departamentos del Valle y Cundinamarca.

En estos tres casos se detectó que si bien se hizo un corte de cuentas al 24 de diciembre del 2003, en la semana siguiente, es decir, entre el 25 y el 31 de diciembre los mandatos y salientes firmaron una cantidad de contenido por pago de bienes y servicios con la cual se afectó la disponibilidad de caja de los funcionarios y entrantes.

"Los compromisos que se adquirieron en las tres entidades generaron un déficit de 50.000 millones en el Valle, de 80.000 millones en Cundinamarca y de 100.000 millones de pesos en Medellín", dijo Cano Palón.

Comentario que en el caso de la capital antioqueña el nuevo alcalde tuvo que recurrir a préstamos de Tesorería para hacerle frente a la situación de liquidez.

ACTIONS DE MAJOR MOVEMENTS

[illegible]

IGMC
Índice de Cotações de ações de IGMC

Ano	Índice
1980	2.333,70
1981	2.464,10
1982	2.464,10
1983	2.464,10
1984	2.464,10
1985	2.464,10

DOW JONES
Índice de Cotações de ações de Dow Jones

Ano	Índice
1980	10.000,00
1981	10.000,00
1982	10.000,00
1983	10.000,00
1984	10.000,00
1985	10.000,00

[illegible][illegible][illegible]

Que, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 116 de 1998 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, inició un programa de limitación del suministro de energía eléctrica a partir del día 17 de enero de 2004, en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m., a los usuarios conectados en el ámbito nacional por la EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA S.A. E.S.P., entidad que actualmente se encuentra en mora de pago del incremento del 1 de diciembre de 2003 con el Mercado de Energía Mayorista;

Los sistemas pertenecientes a los requisitos desconectados y los que son demandados por sistemas ilicitudarios que no están en marcha, no están afectados por el programa de limitación de suministro.

Los honorarios en que se realizó el programa de limitación de suministros, se encuentran en los siguientes hechos:

[illegible]

Si la empresa tiene vigente un programa de iluminación de
suministro, los honorarios por corte de energía publicados en este
plan, quedan incluidos en el programa anterior.

Así mismo, inducir a todos los usuarios y a los terceros afectados por la limitación de suministro de energía eléctrica que les dañe y perjudice económicamente, serán responsables de la empresa eléctrica.

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías abajo firmantes, atendiendo las normas vigentes y lo dispuesto por la Superintendencia Bancaria se permite informar a sus aliados que:

1. El literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, estableció que los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden trasladarse entre los regímenes que lo integran cada cinco (5) años, salvo que le resten diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a una pensión de vejez.

- A continuación, se presenta lo que debe ocurrir en el período de gracia para acceder a quienes al 28 de agosto de 2004 han ingresado al AFO y aún no cumplen con la totalidad de requisitos para la pensión de vejez, según los criterios autorizados a las entidades administradoras del sistema de pensiones:
- 1. El Gobierno Nacional sancionó el Decreto 3869 del 28 de diciembre de 2003, mediante el cual reglamenta el derecho a jubilarse en el caso de los afiliados que se encuentran en la situación de desahucio.
 - 2. La Superintendencia Bancaria publicó la Circular Entrenía 001 del 8 de enero de 2004, mediante la cual permite a las instituciones financieras adheridas al Sistema General de Pensiones y en virtud de la cual se publica este aviso.

En consideración de lo anterior, se informa:

a. Sujetos beneficiarios de la norma. A quienes al 28 de enero de 2008 les faltaban diez (10) años o menos para cumplir edad de 55 años: plan mujeres 36 años, sin hombre, - y en conjunto de lo que extrínsecamente convalidan normas especiales en relación con la edad de pensión - pueden trasladarse por una única vez según el Régimen de Prima Medica Presión Elegida administrado por el ISS y el Régimen de Ahorro Individual gestionado por alguna AFP o Incajuvita, a libre elección, hasta dicha fecha.

El derecho de traslado a que se refieren las normas señaladas se aplica, igualmente, a toda persona que a la fecha de solicitud cuente con más de 55 años, si es mujer, ó 60 años, si es hombre, en la medida en que no tengan la calidad pensionados. No hayen solicitado la referida pensión, o respecto de los mismos no se haya presentado un siniestro que haya dado o dé lugar al reclamo de las prestaciones del Sistema General de Pensiones.

Igualmente, al derecho de traslado dentro del plazo indicado, puede ser ejercido por toda persona en las condiciones de su actividad, que se encuentre en situación de multiple vinculación, eligiendo el régimen al que prefiere estar vinculado los términos del artículo 2º del decreto 3600 de 2003 y la Circular Externa 901 de 2014 de la Superintendencia Bancaria.

ta. Ejercicio del derecho a trasladarse de régimen. Para electos de ejercer el citado derecho, los afiliados podrán ventilar sus empleadores a que administradora y régimen se realice el pago de la última cotización a personas con el fin de ventilar si están conformes con ese hecho.

Verificada la información anterior y evaluada la decisión que corresponda, los afiliados que opten por seleccionar un régimen diferente al cual se haya cotizado en el último período, deberán proceder a suscribir los formularios de traslado que corresponden a la nueva administración y régimen elegidos, hasta el 28 de enero de 2004.

c. Consecuencias del silencio del aliado. En caso de que el aliado opte por no tomar acción alguna y guardar silencio ante la denuncia de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 3800 de 2001, que su decisión es permanente y vinculada a la administración y régimen a la que se encuentra cotizando a 28 de enero de 2004 ó a aquella que resulte aplicable para pensiones antes de dicha fecha.

d. Requisitos adicionales para los beneficiarios del régimen de transición. Trabajadores de las afiladas en las condiciones antes indicadas, que tengan la cantidad de beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 10.193, es decir, aquellas personas que al 31 de abril de 1994 hubieran cumplido 35 o más años de servicios prestados a similitud, que se hubieran trasladado hacia el Régimen de Ahorro Individual, se podrán cancelar de algunos y reanudar el pago de la cuota mensual en el derecho hasta el 28 de enero de 2004.

Para hacer uso del derecho a trasladarse hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Delinida administrado por el sistema cumplir con los requisitos señalados en el artículo 3º del Decreto 3500 de 2003, esto es que el saldo en la cuenta ahorro individual se traslade al ISS, y que este aporte no sea inferior al monto total del aporte que dicho afiliado en el mes que hubiere permanecido en el Régimen de Prima Media.








COMUNICADO DE PRENSA

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías abajo firmantes, atendiendo las normas vigentes y lo dispuesto por la Superintendencia Bancaria se permiten informar a sus afiliados que:

1. El literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, estableció que los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden trasladarse entre los regímenes que lo integran cada cinco (5) años, salvo que le falten diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a una pensión de vejez;

Así mismo, y sin perjuicio de lo anterior, señaló período de gracia para aquellos a quienes al 28 de enero de 2004 les faltan diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, según el cual les autoriza a trasladarse por una única vez entre los regímenes del Sistema General de Pensiones, y sin cumplir el plazo anotado, derecho que pueden ejercer hasta dicha fecha;

2. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 3800 del 29 de diciembre de 2003, mediante el cual reglamentó el derecho a trasladarse en el caso de los afiliados que se encuentren en la situación de edad descrita;

3. La Superintendencia Bancaria expidió la Circular Externa 001 del 8 de enero de 2004, mediante la cual impartió instrucciones a las administradoras de pensiones del Sistema General de Pensiones y en virtud de la cual se publica este aviso;

En consideración de lo anterior, se informa:

a. Sujetos beneficiarios de la norma. A quienes al 28 de enero de 2004 les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad de 55 años, si son mujeres, ó 60 años, si son hombres, - y sin perjuicio de lo que expresamente consagren normas especiales en relación con la edad de pensión - podrán trasladarse por una única vez entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS y el Régimen de Ahorro Individual gestionado por alguna AFP o viceversa, a su libre elección, hasta dicha fecha.

El derecho de traslado a que se refieren las normas señaladas se aplica, igualmente, a toda persona que a la fecha de la solicitud cuente con más de 55 años, si es mujer, ó 60 años, si es hombre; en la medida en que no tengan la calidad de pensionados, no hayan solicitado la referida pensión, o respecto de los mismos no se haya presentado un siniestro que haya dado o dé lugar al reclamo de las prestaciones del Sistema General de Pensiones.

Igualmente, el derecho de traslado dentro del plazo indicado, puede ser ejercido por toda persona en las condiciones de edad señaladas, que se encuentre en situación de múltiple vinculación, eligiendo el régimen al que prefieren estar vinculados, en los términos del artículo 2º del decreto 3800 de 2003 y la Circular Externa 001 de 2004 de la Superintendencia Bancaria.

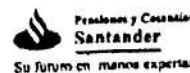
b. Ejercicio del derecho a trasladarse de régimen. Para efectos de ejercer el citado derecho, los afiliados podrán verificar con sus empleadores a qué administradora y régimen se realizó el pago de la última cotización a pensiones con el fin de verificar si están conformes con ese hecho.

Verificada la información anterior y evaluada la decisión que corresponda, los afiliados que opten por seleccionar un régimen diferente al cual se haya cotizado en el último período, deberán proceder a suscribir los formularios de traslado que correspondan ante la nueva administradora y régimen elegidos, hasta el 28 de enero de 2004.

c. Consecuencias del silencio del afiliado. En caso de que el afiliado opte por no tomar acción alguna y guardar silencio, se entenderá de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 3800 de 2003, que su decisión es permanecer vinculado a la administradora y régimen a la que se encontrará cotizando a 28 de enero de 2004 ó a aquella que recibió la última cotización para pensiones antes de dicha fecha;

d. Requisitos adicionales para los beneficiarios del régimen de transición. Tratándose de los afiliados en las condiciones de edad indicadas, que tengan la calidad de beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, aquellas personas que al 1º de abril de 1994 hubieran cumplido 15 ó más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que se hubieran trasladado hacia el Régimen de Ahorro Individual, si deciden cambiarse de régimen y recuperar los efectos de la transición, podrán ejercer ese derecho hasta el 28 de enero de 2004.

Para hacer uso del derecho a trasladarse hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003; esto es que el saldo en la cuenta de ahorro individual se traslade al ISS, y que este ahorro no sea inferior al monto total del aporte que debió efectuarse en caso de que hubiere permanecido en el Régimen de Prima Media.



Bogotá D.C,



Radicado: 2-2021-059078

Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2021 12:37

Señores Magistrados
Corte Constitucional
Honorable Magistrados
Sala Plena
Ciudad.

Referencia: Respuesta a las preguntas remitidas a través del Auto 583 de 2021.

Honorable Magistrados:

JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO en mi condición de Ministro de Hacienda y Crédito Público, respetuosamente me permito dar repuesta a los interrogantes remitidos por la H. Corte Constitucional mediante Auto 583 de 2021; explicaciones que corresponden a lo expuesto en la audiencia que ante ese honorable Sala se adelantó el pasado 28 de octubre del año en curso.

PRIMER EJE TEMÁTICO

- a. *¿Cuál es el monto y la destinación de los aportes que mensualmente los afiliados del Sistema General de Pensiones realizan a las diferentes administradoras de los dos regímenes de pensiones, y las diferencias relevantes en la administración de los recursos así obtenidos entre cada uno de dichos regímenes?*

El Sistema General de Pensiones contempla dos regímenes excluyentes entre sí, pero que coexisten. En este sistema dual, tanto los trabajadores del sector público como los del sector privado pueden elegir libremente entre cualquiera de estos dos regímenes según lo consideren más conveniente.

Ahora bien, como primera diferencia encontramos que, en la etapa de cotización, los aportes realizados tienen un destino diferente en cada uno de los regímenes, como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo:

IBC	Cotización RPM	Fondo Común de vejez	% administración y aseguramiento	FSP**	IBC	Cotización RAIS	Cuenta de Ahorro individual	% administración y seguro Previsional	FGP*	FSP**
< 4 SM	16%	13%	3.0%	0%	< 4 SM	16%	11.5%	3.0%	1.5%	0%
4 SM a 16 SM	17%	13%	3.0%	1%	4 SM a 16 SM	17%	11.5%	3.0%	1.5%	1%
16SM A 20 SM	17% - 18%	13%	3.0%	1.2% - 2%	16SM A 20 SM	17% - 18%	11.5%	3.0%	1.5%	1.2% - 2%

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Commutador (57 1) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

*FGP. Fondo de Garantía de Pensión Mínima
**FSP. Fondo de Solidaridad Pensional

Así las cosas, en un caso típico en donde el afiliado no devenga más de 4 salarios mínimos, se puede observar que en el Régimen de Prima Media (en adelante RPMPD o RPM, indistintamente), del 16% de la cotización, el 13% de la misma se acredita en el fondo Común de Colpensiones, en tanto el 3% restante sirve para pagar a Colpensiones la comisión que recibe por la administración del régimen y para abonar a los fondos comunes de invalidez y sobrevivencia.

Por el contrario, en el Régimen de Ahorro Individual (en adelante RAIS), del 16% de cotización, el 11.5% se destina a la cuenta de ahorro individual pensional del afiliado, un 1.5% es destinado a alimentar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en tanto el 3% restante se emplea para pagarles a las administradoras de pensiones los costos de administración del régimen y para pagar los seguros previsionales de los afiliados, que los cubren a ellos y a sus familias contra las contingencias derivadas de la invalidez y la muerte.

En este punto es preciso recordar que, mientras los recursos recaudados en el Régimen de Prima Media alimentan los fondos comunes de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de Colpensiones, y sirven para el pago de las prestaciones de los actuales pensionados del Régimen de Prima Media, los recursos que recibe cada afiliado de Régimen de Ahorro Individual se acreditan en una cuenta que le pertenece exclusivamente al afiliado y cuyos recursos serán los que se tengan en cuenta para determinar valor de la pensión de vejez en ese régimen.

Ahora bien, cada uno de los Regímenes del Sistema General de Pensiones cuenta con sus propias condiciones, requisitos y beneficios, lo cual implica que las prestaciones a las que pueden acceder los afiliados pueden variar según la elección del régimen al cual cotizan y por el cual se pensionan, tal como se presenta, de forma general, en el siguiente cuadro:

CARACTERÍSTICA	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES																									
	RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL																								
Destino de los aportes	El 13% de la cotización se destina al fondo de naturaleza común, en el cual se reciben las cotizaciones y con esos recursos se financian las pensiones de todos los pensionados del Régimen de Prima Media y sus beneficiarios.	El 11.5% de la cotización se destina a la cuenta de ahorro individual del afiliado. Con estos recursos se financia exclusivamente la pensión del afiliado y sus beneficiarios.																								
Costos de Administración y coberturas de invalidez y muerte	3% de la cotización para gastos de administración y fondos comunes de invalidez y sobrevivencia. De este 3%, Colpensiones tiene una cuota de administración de 1.09% y un 1.91% se destina a capitalizar los fondos de invalidez y sobrevivientes, pues con ellos se financian las pensiones de invalidez y sobrevivencia de los afiliados que incurran en alguna de estas contingencias, siempre que cumplan las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha del siniestro y demás requisitos legales. <table><tr><th>Administradora</th><th>% Administración</th><th>% Reservas invalidez /Sobrevivencia</th></tr><tr><td>Colpensiones</td><td>1.09%</td><td>1.91%</td></tr></table>	Administradora	% Administración	% Reservas invalidez /Sobrevivencia	Colpensiones	1.09%	1.91%	3% de la cotización se emplea para el pago de la cuota de administración y de la prima del seguro previsional. Este porcentaje se distribuye de forma diferente en cada administradora, así: <table><tr><th>Administradora</th><th>% Administración</th><th>% Aseguramiento</th></tr><tr><td>Old Mutual</td><td>0.90%</td><td>2.10%</td></tr><tr><td>Protección</td><td>0.97%</td><td>2.03%</td></tr><tr><td>Porvenir</td><td>1.03%</td><td>1.97%</td></tr><tr><td>Colfondos</td><td>0.80%</td><td>2.20%</td></tr><tr><td>Colpensiones</td><td>1.09%</td><td>1.91%</td></tr></table> <p>En el RAIS los pagos del seguro previsional garantizan al afiliado que haya cumplido las 50 semanas de cobertura en los tres años anteriores a la fecha de siniestro y demás requisitos legales, que la aseguradora COMPLETE el</p>	Administradora	% Administración	% Aseguramiento	Old Mutual	0.90%	2.10%	Protección	0.97%	2.03%	Porvenir	1.03%	1.97%	Colfondos	0.80%	2.20%	Colpensiones	1.09%	1.91%
Administradora	% Administración	% Reservas invalidez /Sobrevivencia																								
Colpensiones	1.09%	1.91%																								
Administradora	% Administración	% Aseguramiento																								
Old Mutual	0.90%	2.10%																								
Protección	0.97%	2.03%																								
Porvenir	1.03%	1.97%																								
Colfondos	0.80%	2.20%																								
Colpensiones	1.09%	1.91%																								

¹ El porcentaje máximo del 3% destinado a los gastos de administración y al pago del seguro previsional, va variando en el tiempo, sin exceder del 3%, según el valor de mercado que las compañías de seguros asignan al seguro previsional. La información presentada en el cuadro corresponde a la información del año 2021. Al respecto, es pertinente indicar que la información sobre los costos de administración y pago de la prima del seguro previsional son publicados de manera periódica por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

		capital que sea necesario para financiar su pensión o la de sus beneficiarios de invalidez o sobrevivencia.
Requisitos para obtener la pensión de Vejez	1300 semanas cotizadas	Contar con el capital suficiente para financiar una pensión de por lo menos el 110 % de una renta vitalicia de un SMLMV, que cubra al afiliado y su núcleo familiar.
Edad de Pensión de Vejez	62 Hombres - 57 Mujeres	62 Hombres - 57 Mujeres o antes si cuenta con el capital suficiente para pensionarse anticipadamente.
Requisitos para obtener la Garantía de pensión mínima de vejez.	1300 semanas cotizadas y contar con la edad mínima de 57 años y 62 años según el caso.	1150 semanas cotizadas, y contar con la edad mínima de 57 o 62 años según el caso.
Monto de la pensión	Corresponde a un monto fijo establecido en la norma según formula porcentual, que se calcula sobre el promedio del ingreso base de cotización de los últimos 10 años.	El valor de la pensión no es fijo y depende del capital ahorrado, de tal manera que la mesada corresponderá al valor del ahorro realizado con sus respectivos rendimientos, más el bono pensional si a él hay lugar, dividido por el número de meses que vivirán el afiliado y sus beneficiarios.
Requisitos para obtener la pensión de invalidez y sobrevivencia, monto y financiación.	<p>Invalidez: Tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.</p> <p>Sobrevivencia: Fallecer por causas de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de la muerte.</p> <p>Monto: Entre el 45% - 75% del promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años, según grado de invalidez y número de semanas cotizadas.</p> <p>Financiación: Esta pensión se financia con el Fondo común de invalidez o sobrevivencia, según corresponda, administrado por Colpensiones.</p>	<p>Invalidez: Tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.</p> <p>Sobrevivencia: Fallecer por causas de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de la muerte.</p> <p>Monto: Entre el 45% - 75% del promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años, según grado de invalidez y número de semanas cotizadas.</p> <p>Financiación: Estas pensiones se financian con los recursos acreditados en la cuenta del afiliado, y el capital que aporta la Aseguradora Previsional, para COMPLETAR el capital que sea necesario para financiar una pensión al afiliado y sus beneficiarios.</p>
Prestaciones sustitutivas, en caso de no cumplir requisitos de pensión.	<p>Indemnización sustitutiva:</p> <p>Corresponde a los aportes ajustados por inflación.</p>	<p>Devolución de saldos:</p> <p>Corresponde a los aportes ajustados por inflación + rendimientos reales.</p>
Administradora	Colpensiones (Entidad pública).	Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos (Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía de naturaleza privada).

Fuente: DGRESS – MHCP.

Como se puede observar, en el Sistema General de Pensiones existen diferencias sustanciales entre los dos regímenes pensionales, tanto en la etapa de cotización, como en la etapa de reconocimiento pensional. Así las cosas, el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), es un sistema en el que los afiliados o eventuales beneficiarios obtienen un beneficio pensional del sistema (pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una indemnización sustitutiva) cuyo monto se encuentra previamente definido por la Ley. En este régimen, los aportes y los rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se pagan las prestaciones de los pensionados y sus beneficiarios.

Por otra parte, encontramos el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en el cual los aportes efectuados por los afiliados durante su vida laboral y los rendimientos generados por las cotizaciones se capitalizan en una cuenta de ahorro individual del afiliado; estos dineros le permiten al afiliado obtener el pago



de la prestación que corresponderá al valor ahorrado en su cuenta pensional. **En el RAIS, el monto de la prestación por vejez es variable** a partir de una cotización definida. En el monto de la prestación inciden aspectos como: los recursos acumulados en la cuenta, la edad a la cual el afiliado desea pensionarse, la modalidad de la pensión elegida, las semanas cotizadas y la rentabilidad de los ahorros acumulados en la cuenta pensional.

- b. Cuál ha sido la evolución de la legislación en materia de traslados de un régimen de pensiones a otro? ¿Cuáles son las razones de (i) política económica y (ii) garantía del derecho constitucional a la seguridad social en pensiones que determinaron las reglas vigentes sobre traslados de un régimen a otro?**

Inicialmente, en la Ley 100 de 1993², se estableció que los afiliados al Sistema General de Pensiones podían escoger libremente el régimen de pensiones que prefiriesen. Sin embargo, una vez efectuada la selección, sólo podrían trasladarse de régimen cada tres (3) años.

Es de señalar que esta disposición fue regulada a través del Decreto 692 de 1994, en el que expresamente se indicó: (i) la selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias del régimen elegido (artículo 11), (ii) la selección de uno cualquiera de los regímenes es libre y voluntaria por parte del afiliado (artículo 11), (iii) cuando se trate de trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar (artículo 11), (iv) **las personas que decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora** (artículo 11), (v) **si el afiliado se traslada por primera vez del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en el formulario debe quedar consignado que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, para tal efecto el formulario puede contener la leyenda pre-impresa en este sentido** (artículo 11) y (vi) efectuada la selección de uno cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres años contados desde la fecha de la selección anterior (artículo 15).

Así mismo, por el mismo año de 1994, se expidió el Decreto 1161, hoy compilado en el Decreto 1833 de 2016, en el que se consagra el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario.

Posteriormente, el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 fue modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 (norma que se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico), siendo regulado a través del Decreto 3800 de 2003, indicando que los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden escoger el régimen de pensiones que prefieran. Sin embargo, una vez efectuada la selección, sólo pueden trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial.

También, establece esta disposición, que desde el 29 de enero de 2003 y hasta el 28 de enero de 2004, los afiliados podían trasladarse en cualquier momento, dándoles un periodo de gracia de un año. Sin embargo, indicó la norma que, a partir del 29 de enero del 2004, ningún afiliado puede trasladarse de régimen cuando se encuentre a diez (10) años o menos para cumplir la edad de pensión de vejez.³

Ahora bien, con el fin de dar claridad sobre las razones de garantía del derecho constitucional a la seguridad social en pensiones que determinaron las reglas vigentes sobre traslados de un régimen a otro, es preciso indicar que el periodo de carencia de los últimos 10 años introducido con la Ley 797 de 2003, no vulnera el

² Literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

³ e. Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.



derecho pensional de ningún afiliado, en la medida que: (i) si bien, en ambos regímenes las prestaciones a obtener tienen parámetros diferentes, por ejemplo, en el RAIS, la garantía de pensión mínima de pensión se obtiene con 1150 semanas de cotización, mientras que en Colpensiones se obtiene con 1300 semanas cotizadas), los dos regímenes garantizan a quien cumpla los requisitos allí establecidos la obtención de las prestaciones que permitan la cobertura de las contingencias de vejez, invalidez y muerte; (ii) no atenta contra el derecho de selección del afiliado de someterse a uno u otro régimen porque esa decisión es libre y voluntaria hasta que empiezan los 10 años de restricción, (iii) genera como efecto positivo incentivar la responsabilidad individual y social en cabeza de los afiliados de escoger oportunamente el régimen que deseen, (iv) la modificación normativa, que impulsó dicha restricción, contempló un periodo de gracia de un año para que los afiliados pudieran trasladarse en caso de haberse visto perjudicados por la disposición y (v) fue inaplicable para las personas que reunían las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, habiéndose trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no se hayan regresado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, quienes pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-.

Adicionalmente, frente a las razones de política económica, se observa que la norma tiene como objeto: (i) garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sistema general de pensiones, al controlar el fenómeno denominado "riesgo moral" de los afiliados que, con decisiones oportunistas (es decir a menos de 10 años de pensionarse), generan un impacto negativo en la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media, (ii) lograr una adecuada planeación financiera y presupuestal del sistema pensional, en esta medida se debe tener una fecha de corte para poder hacer las estimaciones actuariales y financieras del sistema, pues si se permitiera el traslado en el último año antes de pensionarse, es posible que en vez de pagar por 1.500.000 pensionados en un año, el régimen administrado por Colpensiones tuviese que pagar 1.700.000 pensionados, sin que se hubieran efectuado las provisiones presupuestales para tal efecto; y por último (iii) adecuar los pagos del sistema pensional a cargo de la Nación conforme al marco fiscal de mediano plazo que también se proyecta a 10 años, permitiendo que el sistema guarde su equilibrio financiero y la Nación su equilibrio fiscal, al poder determinar cuáles son las obligaciones futuras tanto de Colpensiones como del Estado para este periodo de tiempo.

De igual manera, como complemento de la respuesta anterior, es preciso tener en cuenta las consideraciones de la Honorable Corte Constitucional que, al estudiar la exequibilidad del periodo de carencia, concluyó, mediante Sentencia C-1024 del 20 de octubre de 2004, emitida por el Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, lo siguiente:

1. El periodo de carencia previsto en la norma no vulnera el derecho a la igualdad, ni ningún otro principio o derecho fundamental que emane de las relaciones de trabajo, en la medida en que ***“... el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato entre sujetos puestos aparentemente en igualdad de condiciones, tales como, el señalamiento de límites para hacer efectivo el derecho legal de traslado entre regímenes pensionales.”*** (negrilla fuera de texto)
2. El periodo de carencia, conforme al cual el afiliado no puede trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, es razonable y proporcional, en la medida en que ***“... el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad...”*** (negrilla fuera de texto)
3. El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia es el de ***“... evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y***



su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes. No sobra mencionar en este punto, que el sustento actuarial es el que permite asumir los riesgos que se encuentran involucrados con el sistema y que, en ese orden de ideas, su falta de ajuste con la realidad económica del país, simplemente podría llegar a poner en riesgo la garantía del derecho pensional para los actuales y futuros pensionados. (negrilla fuera de texto)

4. En la medida en que el Régimen de Prima Media se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse arbitre el sistema y se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, **“... resulta contrario al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), y al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en: obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social. Este principio en materia pensional se manifiesta en el logro de la sostenibilidad financiera autónoma del sistema integral de seguridad social en pensiones, en aras de garantizar ‘el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’, en los términos previstos en el artículo 53 del Texto Superior”.** (negrilla fuera de texto)
 5. El periodo de carencia evita que se impongan otros mecanismos legales más gravosos para los afiliados para conservar la sostenibilidad financiera del sistema, tales **“... como, por ejemplo, la reducción del número de mesadas pensionales pagaderas en un año o la imposición de un porcentaje que reduzca el valor de la pensión a cancelar”.**
 6. La norma NO puede ser aplicada a las personas que reúnen **las condiciones del régimen de transición** previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, habiéndose trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no se hayan regresado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, quienes pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Sentencia SU-062 de 2010, esto es que: (i) el afiliado tenga a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, es decir el 1º de abril de 1994, quince (15) años de servicios cotizados para la pensión de vejez, equivalentes a setecientos cincuenta (750) semanas, (ii) se traslade a Colpensiones todos los aportes pensionales (ahorro) que haya acumulado en su cuenta de ahorro individual, (iii) el ahorro efectuado en el Régimen de Ahorro Individual, incluidos sus rendimientos y el valor correspondiente del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del referido régimen, no sea inferior al monto total que habría obtenido en caso que hubiere permanecido en el Régimen de Prima Media, (iv) en caso de que el valor a trasladar del RAIS al RMPD sea inferior al que se hubiera efectuado en Colpensiones, el afiliado deberá pagar con sus propios recursos el valor diferencial, para poder completar el traslado.
- c. **¿Cuándo se materializa un traslado del Régimen de Ahorro Individual al de Prima Media, ¿qué valores se trasladan de la cuenta de cada afiliado, o qué montos son los que se entregan a la nueva administradora? ¿Estos valores son equivalentes a lo que se hubieren aportado o generado en caso de haber estado afiliado siempre al RPM? En caso negativo, ¿cómo se explica esa diferencia?**

Como se indicó en el literal a) del presente cuestionario, para los afiliados a un Fondo de Pensiones, el aporte mensual para acrecentar el ahorro pensional corresponde al 16% del salario (para los dependientes el 12% lo asume el empleador y el 4% lo aporta el afiliado). Si el salario es mayor o igual a 4 SMMLV el afiliado realiza un

aporte adicional al Fondo de Solidaridad Pensional, este porcentaje depende del salario y va desde 1% al 2% (del salario).

IBC	Cotización RAIS	Cuenta de Ahorro individual	% administración y seguro Previsional	FGP	FSP
< 4 SM	16%	11.5%	3.0%	1.5%	0%
4 SM a 16 SM	17%	11.5%	3.0%	1.5%	1%
16SM A 20 SM	17% - 18%	11.5%	3.0%	1.5%	1.2% - 2%

En este punto es de recordar que, el valor límite de los costos de administración y el pago del aseguramiento de invalidez y sobrevivencia es del 3% para todas las administradoras del sistema, el cual, en todo caso puede distribuirse internamente en cada administradora de forma diferente, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Administradora	% Administración	% Aseguramiento
Old Mutual	0.90%	2.10%
Protección	0.97%	2.03%
Porvenir	1.03%	1.97%
Colfondos	0.80%	2.20%
Colpensiones	1.09%	1.91%

Ahora bien, en un traslado normal los valores que se entregan a la nueva administradora (en este caso, Colpensiones), corresponden a: (i) el capital ahorrado en la cuenta individual más los rendimientos generados, (ii) los aportes realizados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima también con sus rendimientos.

No es objeto de traslado el valor del bono pensional, en la medida en que no se ha efectuado su pago o con el bono pensional tipo A pagado al RAIS no se financian las pensiones del RPMPD, pues el fundamento normativo que da lugar a la expedición del bono, resulta ser precisamente la pertenencia a uno u otro régimen. Tampoco se traslada el valor de los costos de administración, en la medida en que se consumieron en las actividades de la administradora como son la creación de la cuenta, la acreditación de los aportes, los cobros de aportes en mora, la administración financiera de recursos, la atención al cliente, el reconocimiento de pensiones y los pagos de la nómina de pensionados, entre otros.

Tampoco es objeto de traslado el porcentaje de los recursos destinados al pago de los seguros previsionales, pues con ellos se le pagó a la aseguradora la prima que protege al afiliado y sus beneficiarios, por el periodo de cobertura, de las contingencias derivadas de la invalidez y la sobrevivencia. En este punto es de recordar, que, si una persona se traslada de régimen, posteriormente es calificada por la nueva administradora, y la Fecha de Estructuración de la Invalidez (FEI) es anterior a la fecha de traslado, corresponderá conocer del trámite de pensión de invalidez a la administradora de pensiones en la que se encontraba afiliada dicha persona al momento en que ocurre el siniestro, pues fue esa entidad la que recibió el pago del aseguramiento.

Por otra parte, en un traslado por recuperación de régimen de transición, el traslado es diferente en la medida en que, si el ahorro en el RAIS no fuera equivalente al que se hubiera efectuado en el RPMPD, el afiliado debe pagar la diferencia entre lo ahorrado entre el Régimen de Ahorro Individual y el monto total del aporte legal correspondiente, en caso que hubiera permanecido en el Régimen de Prima Media, lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado por la jurisprudencia constitucional ya reseñada. Además de lo anterior, debe efectuarse el

traslado del capital ahorrado y del aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con sus respectivos rendimientos.

Finalmente, frente a la pregunta de si los valores trasladados del RAIS al RPMPD son equivalentes a los que se hubieren aportado o generado en caso de haber estado afiliado siempre al Régimen de Prima Media, es necesario aclarar que esta regla solo se aplica por mandato particular de la Corte Constitucional, frente a los beneficiarios del régimen de transición, para quienes si es posible que en un periodo determinado de tiempo, los recursos cotizados en el RAIS no sean equivalentes a lo que hubieran ahorrado en el RPMPD, debido a las fluctuaciones del mercado, evento en el cual debe hacerse uso de la regla consagrada en la Sentencia SU-062 de 2010.

d. ¿En qué tipo de gastos de administración o asociados, -de seguros, por ejemplo-, incurre una entidad administradora de cada uno de los regímenes a lo largo de la permanencia de un afiliado y/o pensionado, que deban ser considerados al momento de ordenar un traslado?

La distribución del 3% de los gastos de administración y aseguramiento actual en las administradoras del RAIS y Colpensiones, es la siguiente:

Administradora	% Administración	% Aseguramiento
Old Mutual	0.90%	2.10%
Protección	0.97%	2.03%
Porvenir	1.03%	1.97%
Colfondos	0.80%	2.20%
Colpensiones	1.09%	1.91%

Como se indicó en la repuesta anterior, con el porcentaje establecido para los costos de administración, las administradoras de pensiones, incluida Colpensiones, pagan la creación de la cuenta, la acreditación de los aportes, los cobros de aportes en mora, la reconstrucción de la historia laboral para bono pensional, la administración financiera de recursos (mesa de dinero o mesa de inversión), la atención al cliente, el reconocimiento de pensiones y los pagos de la nómina de pensionados, entre otros,

Por otra parte, el porcentaje destinado al aseguramiento del afiliado frente a los riesgos derivados de la invalidez y la sobrevivencia, que en Colpensiones corresponde a un 1.91%, se destina a capitalizar los fondos de invalidez y sobrevivientes, pues con ellos se financian las pensiones de invalidez y sobrevivencia de los afiliados que incurran en alguna de estas contingencias, siempre que cumplen las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha del siniestro y demás requisitos legales. Mientras que en el Régimen de Ahorro Individual ese porcentaje se emplea para pagar a las aseguradoras del mercado, la prima del seguro previsional, mediante el cual se garantiza al afiliado que haya cumplido las 50 semanas de cobertura en los tres años anteriores a la fecha de siniestro y demás requisitos legales, que la aseguradora COMPLETE el capital que sea necesario para financiar su pensión de invalidez o sobrevivencia.

Ahora bien, al momento del traslado, los valores relacionados con los seguros (que ya fueron cubiertos) y gastos por administración (por los periodos transcurridos), no forman parte del monto ahorrado para la pensión, y, por tanto, estos valores no deben considerarse recursos a trasladar, pues tuvieron como objeto sustentar la operación de las administradoras y la financiación de las pensiones de invalidez y muerte.

SEGUNDO EJE TEMÁTICO



- a. ***¿Cuáles son los datos de litigiosidad judicial en materia de anulación de traslado de régimen pensional para obtener la pensión de vejez? Tener en cuenta como criterios relevantes (i) casos iniciados antes de pensionarse y después de haberse pensionado; (ii) caracterización del sujeto que pretende el traslado -edad, género, diferencia estimada en el monto de la pensión, y acceso a la pensión en cada régimen (por ej. beneficiarse de régimen de transición, entre otras)-; y (iii) casos en los que el litigio se inició faltando 10 años o menos para pensionarse y aquellos en los que restaba un lapso superior para adquirir la pensión.***

Conforme a los datos remitidos por Colpensiones, a esta cartera ministerial, encontramos, con corte a agosto de 2021, alrededor de 43.277 demandas de afiliados por nulidad de traslado, de las cuales han finalizado aproximadamente 11.104 procesos, con un porcentaje de sentencia desfavorable para Colpensiones del 92.3% (10.248). Sin embargo, conforme a los datos de las AFPS, los procesos llegan a ser poco más de 50.000, de los cuales miles de ellos no le han sido notificados a Colpensiones.

Con respecto a las demandas de pensionados, teníamos entendido que ascendían a 1200 aproximadamente, que han venido creciendo exponencialmente (1900), como consecuencia de las nuevas sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia y de algunos tribunales y jueces de instancia.

Es importante señalar en este punto que esta cartera ministerial conoce los datos generales de litigiosidad reportados por Colpensiones. Sin embargo, los datos exactos de edad, género, diferencia estimada en el monto de la pensión entre regímenes, régimen de transición y los casos en los que el litigio se inició faltando 10 años o menos para pensionarse, y aquellos en los que restaba un lapso superior para adquirir la pensión, deben ser suministrados por las administradoras de pensiones directamente.

No obstante lo anterior, de las bases de datos con las que fueron realizadas las proyecciones del efecto fiscal, se encuentra que no todos los afiliados son afiliados lego⁴. La gran mayoría de los afiliados que hoy están demandando, devengan entre 4 y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y son los que generan el 82.2% del déficit fiscal de la nulidad de afiliación, es decir, aproximadamente 29 billones de pesos del total de 35 billones.

De otra parte, al estudiar algunas casuísticas de la solicitud de ineficacia y nulidad de afiliación, se encuentra que la mayoría de demandantes son personas con cargos importantes en la empresa privada o en el sector público, quienes difícilmente pueden alegar la falta de información como excusa para no haberse traslado antes del periodo de carencia. En este punto es preciso recordar que, entre los demandantes hay congresistas, secretarios generales de entidades públicas, jueces, funcionarios públicos de nivel directivo del sector nacional, gerentes y trabajadores de los fondos de pensiones, agentes comerciales de las AFP, gerentes de bancos, entre otros.

Por lo anterior, resulta inequitativo que se haya trasladado la carga de la prueba al Fondo de Pensiones, en la medida en que los afiliados no son afiliados lego, pero además pudieron haber solicitado la información necesaria para efectuar su traslado de régimen en tiempo, y no lo hicieron, haciendo creer que toda la responsabilidad recae en el fondo de pensiones, cuando en realidad no hicieron el menor esfuerzo para informarse de un régimen u otro, y esperaron el último momento para saber cuál era la opción que más les beneficiaba, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del fondo común de Colpensiones.

- b. ***Teniendo en cuenta las anteriores cifras, (i) ¿cuáles son las valoraciones de impacto fiscal y de sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que se estiman frente al eventual traslado de régimen pensional, por anulaciones judiciales decretadas en favor de personas a las que les resta menos de 10 años para pensionarse y de aquellas que ya están gozando de la pensión? Explicar las fuentes, formulas y demás criterios relevantes para la comprensión del diagnóstico; y (ii) ¿cuál es el efecto diferencial***

⁴ Entiéndase por afiliado lego la caracterización de aquellas personas que no tienen conocimiento ni experiencia sobre un tema particular.

que el impacto fiscal podría tener sobre grupos económica o socialmente vulnerables (por ejemplo, efecto diferenciado por rangos salariales y género)?

1. Impacto por procesos judiciales en curso vs sffiados a los que les falta menos de 10 años para cumplir la edad mínima

En el siguiente cuadro se presenta una proyección del impacto por efecto de los procesos judiciales en curso, a partir de la información reportada por Colpensiones, con corte a agosto de 2021, versus el impacto estimado si la jurisprudencia vigente se extendiera a un porcentaje de la población que está afiliada al RAIS y que le faltan menos de 10 años para pensionarse.

	Impacto estimado 43.277 procesos	Total de la población afiliados al RAIS que les faltan menos de 10 años para pensionarse: 478.000	Efecto fiscal
Número de demandas	43.277 presentadas	223.306 Proyectadas que se presentarían	
Número demandas con sentencia desfavorable, ordenado nulidad de afiliación al RAIS	39.941 (Porcentaje de pérdida 92.4%)	223.306 (Porcentaje de pérdida es del 100%)	
Número de personas que se trasladan por efecto de la sentencia, que se pensionarían en Colpensiones	23.565	131.751	
Valor de los ingresos a Colpensiones por trasladado de las cuentas individuales (\$Billones)	5,3	29,4	Disminuye el déficit de la Nación
Valor del menor pasivo por bonos pensionales Tipo A anulados netos por los traslados (\$Billones)	1,8	9,9	Disminuye el déficit de la Nación
Valor del pasivo pensional de las pensiones reconocidas en el RPM, por efecto de los traslados (\$ Billones)	12,8	71,8	Aumenta el déficit de la Nación
Valor de las indemnizaciones sustitutivas de afiliados trasladados al RPM (\$ Billones)	0,4	2,5	Aumenta el déficit de la Nación
Valor del impacto fiscal neto (\$ Billones)	6,3	35,0	Total del déficit para la Nación

Elaborado por MHCP, DGRESS. Fuentes: Colpensiones, Superintendencia Financiera.

El impacto fiscal neto estimado por efecto de los procesos judiciales en curso es de \$6,3 billones en valor presente de 2021 y representa un 18% del impacto total estimado que puede llegar a ser de \$35,0 billones de considerarse un aproximado de223.305 demandantes.

También es de anotar que el impacto fiscal de estos traslados está altamente concentrado en los rangos salariales más altos, como resultado de los mayores subsidios que estos grupos reciben, en la medida en que, en el escenario presentado, el conjunto de los afiliados con aportes de más de 4 SML hasta 25 SML, que representan el 25,5% de la población demandante, es decir alrededor de 55.826 de un total de demandantes de 223.305, recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es 29 billones del total del déficit de la Nación aquí calculado.

A continuación, se hace una explicación de las fuentes, las fórmulas y los principales criterios y variables aplicados:

Fuentes

La fuente de estadísticas de afiliados y pensionados del RAIS y de Colpensiones es la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir de la información anonimizada de las entidades que supervisa.

La fuente de la información estadística de procesos judiciales en curso es Colpensiones.

Fórmulas

Las siguientes fórmulas fueron utilizadas para la estimación del impacto del traslado de afiliados. .

En particular, la siguiente fórmula se utiliza para estimar el pasivo total por efecto de la pensión de un **afiliado** que se traslada a Colpensiones y se proyecta que va a reunir los requisitos para pensión:

$$\text{Pasivo total} = \text{Ingreso Base} * \text{Tasa de remplazo proyectada} * \text{Factor actuarial}$$

Ahora bien, el traslado extemporáneo implica a su vez la anulación del bono pensional si el afiliado tenía derecho al mismo y al traslado del valor acumulado de la cuenta de ahorro individual hacia Colpensiones, incluyendo, además, los aportes efectuados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, de manera que para obtener el pasivo neto a cargo de Colpensiones al pasivo total deben restársele estos conceptos:

Pasivo Neto pensión

$$= \text{Pasivo total} - \text{Bono pensional anulado} - \text{Saldo de la cuenta individual}$$

En donde el saldo positivo del pasivo neto es el subsidio a cargo de Colpensiones. Es importante precisar que todos estos montos se presentan en valor presente al momento de cumplir la edad mínima para obtener la pensión.

En el caso de una persona que se traslada y no alcanza a reunir las semanas para pensionarse, Colpensiones reconoce una indemnización sustitutiva, de manera que el efecto fiscal es:

Pasivo Neto indemnización

$$= \text{Devolución de saldos} - \text{Bono pensional anulado} \\ - \text{Saldo de la cuenta individual}$$

En este caso de la indemnización, el pasivo neto puede ser negativo, lo que significaría un efecto fiscal a favor de Colpensiones.

La suma de los valores individuales de pasivo neto así obtenidos corresponde al impacto fiscal de las personas incluidas en la estimación.

Por otra parte, en el caso de los **pensionados** que se trasladan del RAIS a Colpensiones, en las respuestas a las tutelas se utiliza la información reportada en los antecedentes presentados para estimar los subsidios generados de cada caso individual. Para el cálculo global del traslado de pensionados, al no contarse con información individualizada, el impacto se calcula de manera global y aplicando promedios a partir de las estadísticas publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En este caso el subsidio a cargo de Colpensiones por las mesadas posteriores al traslado se calcula de la siguiente forma:

$$\text{Subsidio pensionado} = (\text{Mesada Colpensiones} - \text{Mesada RAIS}) * \text{Factor actuarial}$$

En donde el saldo positivo representa el subsidio a cargo de Colpensiones. Si se aplica lo dispuesto en un fallo reciente del Juzgado 3° Laboral del Circuito de Cali, a este subsidio habría que restarle los valores de las mesadas ya pagadas, el valor adicional que hubiera tenido la pensión al ser reconocida en Colpensiones y el traslado del saldo disponible en la cuenta individual del pensionado en el RAIS, de manera que se aplicaría la siguiente fórmula:

$$\text{Subsidio neto} = \text{Subsidio pensionado} - \text{traslado de saldo cuenta} - \text{mesadas anteriores}$$

En donde el saldo positivo representaría el subsidio a cargo de Colpensiones y los valores se presentan en valor presente a la fecha en que se hace efectivo el traslado de la pensión. Por tanto, el contenido de esta fórmula puede variar dependiendo de las exigencias de los fallos presentados.

Criterios y/o variables aplicados o tenidos en cuenta

Como puede verse en las fórmulas anteriormente expuestas, las variables aplicadas incluyen:

Ingreso Base: Se toma la información disponible de ingreso de los últimos 10 años reportada en la base de datos.

Tasa de remplazo proyectada: Se estima a partir del número de semanas cotizadas reportado en la base de datos y del número de semanas que se espera aporte en adelante la persona, a partir de su comportamiento histórico de cotización. Se aplica la fórmula de tasa de remplazo que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

Factor actuarial: Se puede entender como capital necesario, medido en número de mesadas, que con los rendimientos a la tasa proyectada alcanza a cubrir los pagos de la pensión durante la vida esperada de los beneficiarios. En este caso se calcula a partir de las tablas de mortalidad de la Superintendencia Financiera de Colombia, suponiendo que al morir cada pensionado tiene un cónyuge que lo sustituye en el disfrute de la pensión. Para los hombres el cónyuge se supone 5 años menor y para las mujeres se supone 5 años mayor.

Bono pensional anulado: El valor del bono pensional reportado en la base de datos es actualizado hasta la fecha esperada de corte del cálculo y se supone que es un valor inicialmente previsto que la Nación ya no debe pagar por efecto del traslado del afiliado a Colpensiones.

Saldo de la cuenta individual: Corresponde al monto acumulado en la cuenta individual del afiliado por efecto de los aportes que ha efectuado al RAIS y sus respectivos rendimientos financieros, además de los recursos aportados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. El total de estos recursos es trasladado a Colpensiones al hacerse efectivo el traslado del afiliado.

Finalmente, en cuanto a los criterios aplicados para definir la población que se incluye en la estimación del impacto por los traslados, cabe referirse a las premisas expuestas en el literal a) del eje temático 2. **Impacto fiscal por el traslado de afiliados que ya se han pensionado en el RAIS**

En el caso de los pensionados hay cuatro diferentes casuísticas, de las cuales se procede a hacer un breve resumen y exponer sus efectos sobre el Sistema General de Pensiones y su equilibrio:

1. Mediante providencia número SL373-2021, la Corte Suprema indica que no procede la nulidad de traslado, en la medida en que *el pensionado se encuentra en una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones. (...).*

Sin embargo, acto seguido el Alto Tribunal indica que, en todo caso, *“... el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora.”*

Con lo anterior, la Corte Suprema desconoce el precedente de la Corte Constitucional contenido en la Sentencia C-086 de 2002, mediante la cual indica, que *“no puede haber desconocimiento del derecho*



*a la igualdad en el caso de las normas acusadas pues la Ley 100 de 1993 contiene una regulación diferente para cada uno de los regímenes pensionales, apoyada en el principio de la libre elección que permite a los afiliados escoger el subsistema que más se ajuste a sus necesidades, de tal suerte que el futuro pensionado se somete por su propia voluntad a un conjunto de reglas diferentes para uno y otro régimen, y **simplemente se hará acreedor a los beneficios y consecuencias que reporte su opción.*** (negrilla fuera de texto)

Ahora bien, en la medida en que mediante la sentencia anteriormente referenciada se generaliza la idea de que la falta de información genera un daño por culpa, desconoce por una parte la máxima según la que la Ley es de público conocimiento y por otra parte, el deber de diligencia y responsabilidad propia del afiliado, así como la normatividad vigente para la época del traslado sobre la información a entregar por parte de las administradoras en relación con el sistema, ignorando el hecho de que los demandantes en la mayoría de los casos no corresponden a afiliados o pensionados lego, sino profesionales con altos cargos en la empresa privada o en el sector público, incluso asesores del sector pensional, que mal pueden alegar la falta de información como excusa para no haberse trasladado antes del periodo de carencia.

Como consecuencia se puede observar que los pensionados y los afiliados, con base en esta sentencia, han iniciado una cantidad considerable de demandas buscando la indemnización por daños y perjuicios, con el agravante de que el hecho causante no debe probarse, pues conforme con la decisión del Alto Tribunal, el solo hecho de no haber recibido asesoría en las condiciones normativas actuales, y no bajo las normas vigentes en su momento, resulta prueba suficiente de la culpa de la Administradora de Pensiones, desconociendo que el afiliado en razón de sus libertades individuales pudo haber acudido, antes del inicio del periodo de carencia, a cualquier instancia dentro de la AFP, como el defensor de consumidor financiero, o fuera de ella (por ejemplo al Ministerio de Trabajo o la Superintendencia Financiera de Colombia), para informarse de las condiciones pensionales en uno u otro régimen o pudo haber empleado herramientas diferentes como la opción de retracto o incluso el propio traslado antes de ingresar en el periodo de carencia.

Ahora bien, en caso de generalizarse esta práctica, se pondría en riesgo la estabilidad del Sistema General de pensiones, pues, en el caso hipotético de la liquidación de las AFP estaríamos ante un sistema puramente de prestación definida, lo que llevaría a la Nación a niveles de endeudamiento similares a los que tenía antes de la Ley 100 de 1993, además de amparar un sistema pensional inequitativo, en donde las personas de mayores ingresos reciben la mayor parte de los subsidios, como se verá más adelante.

2. En la segunda casuística que hemos conocido, se puede observar que el juez ordena a la AFP que pague el valor de la mesada pensional que el afiliado hubiera tenido en el RPPD, de haberse pensionado en ese régimen.

Esta sentencia, desconoce que los regímenes pensionales son diferentes y las prestaciones son diferentes, vulnerando el precedente contenido en la sentencia C 086 de 2002, ignorando las diferencias en la construcción financiera y actuarial de la prestación, y los postulados legales establecidos en la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, dado que en la cuenta de ahorro individual del pensionado solo se encuentran los saldos para reconocer la pensión que le fue reconocida, el resto de recursos para pagar la pensión que hubiera tenido en el RPMPD, deberán provenir de la administradora, lo que generará la posible liquidación y quiebra de las AFP, y, por tanto, el desequilibrio total del Sistema General de Pensiones, en la medida en que, como se indicó anteriormente, con la desaparición de los Fondos de Pensiones, la Nación volvería a niveles de endeudamiento similares a los de antes de Ley 100 de 1993.

- Como tercera casuística, encontramos reciente sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala de Decisión Laboral⁵, en la que, en el caso de una pensionada bajo la modalidad de renta vitalicia, el fallo indica que la aseguradora previsional debe devolver a Colpensiones el total de la suma que la fue trasferida para pagar la pensión reconocida en el RAIS, con el fin de que Colpensiones asuma la nueva pensión. Lo anterior, desconociendo la jurisprudencia vigente sobre régimen de transición y sobre la sentencia de la Corte Suprema en la que indica que las personas que están pensionadas ya no pueden ser objeto de nulidad de afiliación, dado que el pensionado se encuentra en *"...una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones."*, e igualmente, desconociendo las normas propias de los esquemas de aseguramiento y la forma en la que se diseña el amparo y cobertura de los riesgos, obligando a la devolución de unos recursos que ya fueron entregados a título de prima, y, que, por lo tanto, fueron invertidos por la aseguradora en la constitución de las reservas propias del sector asegurador.
- Finalmente, encontramos la cuarta sentencia en la que el Juzgado Laboral N°3 del Circuito de Cali, mediante fallo de enero de 2020, ordena: (i) que la AFP devuelva a Colpensiones el valor de las mesadas pagadas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS); (ii) que se traslade a Colpensiones del saldo de la cuenta de ahorro individual (CAI) del pensionado; (iii) que Colpensiones pague retroactivamente la diferencia entre la pensión otorgada en el RAIS y la pensión que se estima hubiera obtenido el afiliado en caso de pensionarse en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) administrado por Colpensiones; y (iv) que Colpensiones asuma el costo futuro de la pensión que se debe reconocer el RPMPD y por ende de los subsidios que se requerirían para hacer efectivo el pago de estas pensiones en ese régimen.

Ahora bien, si se aplican las sentencias de las casuísticas 3 y 4 a la totalidad de las pensiones de Retiro Programado y de Rentas Vitalicias reconocidas en el RAIS, se evidencia que la población potencial que podría demandar es de 55.587 personas pensionadas en Retiro Programado y 9.315 personas pensionadas en Renta Vitalicia.

En ese sentido, de "normalizarse" la jurisprudencia que permite la nulidad de afiliación de los pensionados en las Modalidades de Retiro Programado y Renta Vitalicia, se puede observar los siguientes efectos sobre el Sistema General de Pensiones:

		Retiros programados	Rentas vitalicias	Total	Efectos sobre el Sistema General del Pensiones
1	Número estimado de demandas	55.587	9.315	64.902	
2	Número de demandas con sentencia desfavorable, ordenando nulidad de afiliación al RAIS	55.587	9.315	64.902	Por la evolución de la Jurisprudencia actual, asumimos que el porcentaje de pérdida es del 100% de los procesos.

⁵ RADICACIÓN 76001310501720170003501.



3	Valor de los ingresos a Colpensiones por el pago que deben hacer las AFP a Colpensiones de las mesadas pensionales que ya le fueron pagadas al pensionado	\$10,8 Billones	\$1,6 Billones	\$12,4 Billones	<ul style="list-style-type: none">• La liquidación y quiebra de las AFP y aseguradoras, con las consecuencias que esto puede traer para la marcha y la estabilidad del Sistema General de Pensiones, que regresaría a niveles de endeudamiento similares a los de antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.• El precedente que representaría para el sistema financiero y el sector empresarial colombiano.
4	Valor de los ingresos a Colpensiones por el traslado del saldo de las cuentas individuales	\$17,6 Billones	\$2,7 Billones	\$20,3 Billones	En el corto plazo aliviaría la presión fiscal actual del fondo común de Colpensiones.
5	Valor del pasivo pensional de las pensiones inicialmente reconocidas en el RAIS, por efecto de las mesadas retroactivas que debe reconocer Colpensiones frente a esos pensionados	\$10,4 Billones	\$1,6 Billones	\$12,0 Billones	Déficit a cargo de la Nación.
6	Valor del pasivo pensional de las pensiones futuras en el RPM, por efecto de los traslados	\$23,6 Billones	\$3,2 Billones	\$26,8 Billones	Déficit a cargo de la Nación.
7	Valor del impacto fiscal neto (Sin incluir el punto 3.)	\$16,4 Billones	\$2,1 Billones	\$18,5 Billones	

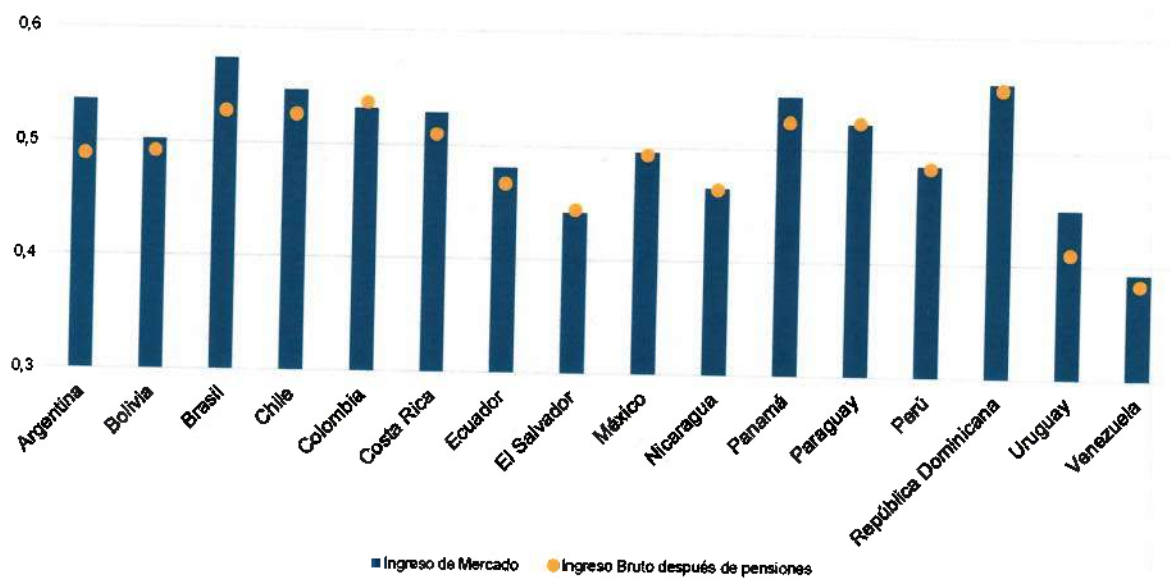
Es de señalar que el valor actualizado de \$10,8 billones de pesos que deberían pagar las AFP y los \$1,6 billones que deberían pagar las aseguradoras, a Colpensiones, por las mesadas pensionales que ya le fueron pagadas al pensionado en el RAIS, no fue incluido como alivio al déficit de la Nación, en la medida en que no van a poder pagarlo e implicaría la quiebra de las AFP, con las consecuencias que esto puede traer para la marcha y la estabilidad del Sistema General de Pensiones y el precedente que representaría para el sistema financiero y el sector empresarial colombiano.

Ahora bien, debe considerarse que estas proyecciones no toman en consideración las pensiones en la modalidad de retiro programado causadas con posterioridad a 2020, ni las reconocidas en la modalidad de renta vitalicia a las que hace referencia la tercera casuística antes mencionada, las cuales, dependiendo de la evolución que tenga la jurisprudencia, podrían también generar un impacto adicional muy significativo, sobre las finanzas del estado, las administradoras de Fondos de Pensiones y las aseguradoras de rentas vitalicias.

(II) ¿cuál es el efecto diferencial que el impacto fiscal podría tener sobre grupos económica o socialmente vulnerables (por ejemplo, efecto diferenciado por rangos salariales y género)?

Para contestar este punto cabe considerar que en Colombia la desigualdad en la distribución de los ingresos golpea de manera importante a la población en edad de pensión. En efecto, debido al diseño legal e institucional actual del Sistema Pensional, la distribución de subsidios no contribuye a mejorar este problema. Al respecto en el siguiente gráfico, elaborado por la CEPAL, puede verse una comparación del caso colombiano con respecto a otros países de Latinoamérica:

Gráfico - Coeficiente Gini antes y después de transferencias pensionales



Fuente: CEPAL

Al respecto, Colombia y el Salvador son los únicos países en los que la distribución del ingreso, medida a partir del coeficiente Gini, se hace más desigual después del pago pensiones, en la medida en que la redistribución favorece a las personas de más altos ingresos al obtener mayores subsidios implícitos en las pensiones reconocidas en el RPMPD:



Cálculos DGRESS-MHCP

Lo anterior, se puede ver de manera más detallada en el siguiente cuadro, que muestra cómo los subsidios que constituyen cerca del 45% del Presupuesto General de la Nación, no están correctamente focalizados en algunos sectores. En especial, en el sector pensional, los subsidios benefician a los grupos de mayores ingresos, agravando la desigualdad en lugar de disminuirla, incluso al incluir los beneficiarios del Programa Colombia Mayor, que actualmente tiene una cobertura cercana a 1,7 millones de adultos mayores de menores ingresos:

Cuadro - Distribución de subsidios sociales por quintil de ingreso

Sector	Magnitud subsidio (% PIB)	Focalización				
		1	2	3	4	5
Educación	2,97%	25,7%	23,4%	21,4%	18,1%	11,4%
Pensiones (Con Colombia Mayor)	2,31%	4,3%	7,8%	13,7%	23,4%	50,8%
Salud	1,85%	33,7%	23,6%	19,7%	15,1%	8,0%
Servicios públicos	0,66%	21,8%	23,2%	22,9%	20,4%	11,7%
Atención a la pobreza	0,46%	33,4%	23,0%	15,0%	17,2%	11,5%
Atención a la primera infancia	0,42%	32,0%	27,2%	22,1%	15,4%	3,22%
Vivienda	0,22%	11,3%	22,5%	29,6%	26,6%	10,0%
Otros	0,16%	48,7%	35,7%	7,5%	5,4%	2,6%
Distribución total	9,0%	22,4%	19,9%	18,8%	18,8%	20,2%

Fuente: MHCP; DNP; 2015

Como puede verse, con las normas actuales, el 50,8% de los subsidios transferidos por parte del Sistema Pensional está focalizado al quintil 5, es decir, que beneficia al 20% de la población con mayores ingresos de personas en edad de pensión, en tanto que el quintil 1, que es el de menores ingresos, recibe apenas el 4,3% de los subsidios, siendo en su mayoría un subsidio de menor valor como los del programa Colombia Mayor.

Ahora bien, volviendo al tema de los traslados extemporáneos, cabe anotar que, con la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, se agrava el problema de la focalización regresiva de los subsidios de la Nación a la población en edad de pensión. Entonces, la pregunta que debemos planteamos en este punto es: ¿A qué población le conviene la nulidad o ineficacia de afiliación?

Así las cosas, la posibilidad de efectuar traslados extemporáneos **no favorece a los afiliados que tienen la expectativa de pensionarse con una mesada de un salario mínimo**, ya que ellos obtendrán el mismo monto de mesada en cualquier régimen. De hecho, a estos afiliados, les conviene pensionarse en el RAIS con 1150 semanas y no con 1300 semanas exigidas en el RPMPD.

Tampoco **favorece, al grupo de afiliados sin expectativa de pensionarse**, pues en el RAIS obtendrán una devolución de ahorro con rendimientos, mientras que en el RMPPD recibirán una indemnización sustitutiva que es la devolución de cotizaciones indexadas con el IPC, siendo, por tanto, una indemnización de menor valor.

Por el contrario, **favorece a los afiliados que en Colpensiones recibirán un subsidio implícito en sus pensiones, en especial a los afiliados con salarios superiores a 4 millones pesos**, quienes recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es, \$29 billones del total de \$35 billones de déficit fiscal de la Nación.

Es importante anotar que el sesgo regresivo de los subsidios se replica también al interior de la población que se traslada. Para ilustrar este punto se muestra el impacto fiscal estimado y los respectivos subsidios ocasionados por estos traslados extemporáneos, tal como se presentan al separar los beneficiarios por nivel de ingresos:

Rango Salarial	Valor Presente pensiones e indemnizaciones	Saldos trasladados hacia Colpensiones	Flujo Neto de Bonos pensionales	Valor Presente Impacto fiscal	Distribución % de los subsidios	N° estimado de traslados con expectativa de pensión	N° estimado de traslados sin expectativa de pensión	N° estimado Total de traslados	Distribución % de las personas trasladadas
	(\$Bills)	(\$Bills)	(\$Bills)	(\$Bills)					
1 a 2 SML	11,7	-7,7	-3,2	0,8	2,3%	53.496	62.259	115.755	51,8%
2 a 3 SML	7,2	-3,4	-1,1	2,8	7,9%	22.928	10.169	33.097	14,8%
3 a 4 SML	5,4	-2,3	-0,7	2,4	6,9%	12.239	5.173	17.412	7,8%
4 a 5 SML	4,8	-1,9	-0,6	2,3	6,4%	8.358	3.277	11.635	5,2%
5 a 10 SML	19,1	-6,7	-2,1	10,2	29,1%	21.147	7.092	28.239	12,6%
10 a 25 SML	26,2	-7,4	-2,2	16,5	47,3%	13.583	3.585	17.168	7,7%
TOTAL	74,4	-29,4	-9,9	35,0	100%	131.751	91.555	223.306	100%

En este sentido, se reitera que en el escenario presentado, el conjunto de los afiliados con aportes entre 1 SML y 4 SML, que son el 74,5% del total (223.306), solo reciben el 17,2% de los subsidios que generan el impacto fiscal proyectado por este ministerio (35 billones), es decir, recibirán solo \$6.0 billones; en tanto que los afiliados con aportes entre 4 y 25 SML, que son el restante 25,5% de los afiliados (es decir unos 55.826 de un total de demandantes de 223.305), recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es \$29 billones del déficit fiscal de la Nación.

Lo anterior, demuestra la regresividad de los subsidios generados por la ineficacia o nulidad de afiliación⁶, considerando adicionalmente que las personas que se pretenden trasladar no han contribuido a la financiación y estabilidad del régimen del que ahora pretenden beneficiarse.

Finalmente, pero no menos importante, la ineficacia o nulidad de afiliación **desfavorece a las personas que van a ser más vulnerables en la edad de pensión**, porque con el déficit creado por la nulidad de traslados de **\$53.5 billones de pesos** (costo fiscal por afiliados y pensionados) **se podrían cubrir a 733.000 nuevos beneficiarios de Colombia Mayor** (adicionales a los 1.700.000 beneficiarios actuales) y el valor para todos los beneficiarios se incrementaría de **\$80.000 a \$145.000** que corresponde a la línea de pobreza extrema definida por el DANE para el año 2020.

Así las cosas, a los afiliados que les conviene un traslado al RPMPD, es a los afiliados que en Colpensiones obtendrán un subsidio implícito en sus pensiones, siendo los más beneficiados las personas de mayores ingresos y no los afiliados que pertenecen a las poblaciones que van a ser más vulnerables en la edad de pensión.

c. **¿Existe un impacto fiscal y financiero diferencial entre las anulaciones de traslados que operan sobre las personas a las que les falta menos de 10 años para pensión y las que se encuentran pensionadas?**

⁶ Cabe anotar que este escenario supone que se trasladan hacia Colpensiones:
 -El 90% de los afiliados con salario mayor a 1,6 SML.
 -El 45% de los afiliados con salario inferior a 1,6 SML.
 -El 30% de los afiliados que tienen salario a 1 SML y no tiene expectativa de pensión.

	Procesos de Pensionados	Procesos de afiliados
Número de demandas proyectadas	64.902	223.306
Número de demandas con sentencia desfavorable	64.902	223.306
Déficit fiscal	\$18,5 billones	\$35 billones
Pago anual promedio a en los primeros 5 años	\$739,000 millones	\$250.000 millones

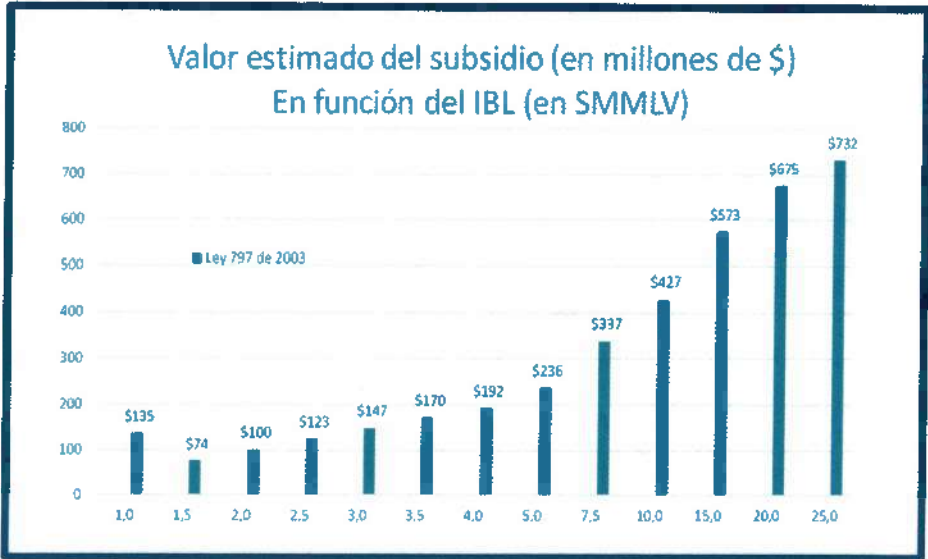
La diferencia en el flujo de pagos a partir del 2022 se debe al momento en que se hace efectivo el pago de las mesadas en cada uno de los dos casos. Al respecto, el impacto financiero y fiscal del traslado de personas ya pensionadas, tiene un efecto fiscal mediato, precisamente en la medida en que se trata de pensiones cuyas mesadas pasarían a pagarse inmediatamente en el Régimen de Prima Media.

Por el contrario, en el caso de las personas a las que les faltan menos de 10 años, los pagos de mesadas van ocurriendo solo a medida que se cumplen las edades de pensión y se completan las semanas requeridas, lo que da un plazo cercano a 10 años para llegar al nivel máximo de pagos pensionales de este grupo.

En todo caso, ambos grupos generarían a partir del 2022 una presión adicional sobre el fondo común de Colpensiones, de \$990 mil millones de pesos adicionales.

d. *¿Cómo valora la anulación judicial de traslados de régimen objeto de discusión, en términos de accesibilidad y adecuación del derecho a la pensión de vejez?*

- La restricción de los últimos 10 años antes de la edad de pensión para trasladarse de régimen, es una disposición que ya ha sido evaluada por la Corte Constitucional, que no afecta el derecho pensional, ni la libertad de elección de los afiliados, enmarcándose en la amplia potestad de configuración legislativa que le asiste al legislador en la materia y que fue expedida en defensa del equilibrio financiero del Sistema General de Pensiones.
- Ahora bien, con respecto a la población que le conviene la nulidad o ineficacia de afiliación, es necesario reiterar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no favorece a la población que en la vejez será más vulnerable, sino que beneficia a las personas que devengan más de 4 salarios mínimos, lo cual genera mayor inequidad en el sistema, en la medida en que esa población obtendrá mayores subsidios implícitos en sus pensiones, sin haber contribuido en los últimos 10 años a la financiación del régimen de prima media del que pretenden beneficiarse, veamos:





En ese sentido, como se puede observar en las repuestas de este cuestionario, el conjunto de los afiliados con aportes entre 1 SML y 4 SML, que son el 74,5% del total, solo reciben el 17,2% de los subsidios que generan el impacto fiscal proyectado por este ministerio (35 billones), es decir recibirán solo 6.02 billones, en tanto que los afiliados con aportes entre 4 y 25 SML, que son el restante 25,5% de los afiliados, recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es 29 billones. Esto demuestra la regresividad de los subsidios generados por la nulidad de afiliación, agravada por el hecho de beneficiar a personas que al no haber estado afiliadas en los últimos 10 años antes de pensionarse al RPM, no han contribuido a su financiación ni sostenibilidad, pero si pretenden beneficiarse de dicho régimen.

3. Ahora bien, si bien, en virtud del reparto de cargas públicas, la Nación tiene unas responsabilidades como lo son emitir las normas, los reglamentos y las circulares para el adecuado comportamiento de los actores del sistema, así como asumir el pasivo pensional que le sea asignado por Ley, los afiliados también tienen la responsabilidad de mantenerse informados en virtud de las libertades individuales y del artículo 95 de la Constitución Política que establece que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución **implica responsabilidades**, por lo cual los afiliados al Sistema General de Pensiones deben asumir las consecuencias de sus actos u omisiones.

En ese sentido, si el afiliado al RAIS por 15 años o más, en todo el tiempo que tuvo para madurar su decisión, no hizo lo posible por informarse acerca de las diferencias entre un régimen u otro, a través de los diferentes canales que tenía a su disposición, como por ejemplo, el defensor del consumidor financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia, los Ministerios de Trabajo o Hacienda, ni ejerció el derecho a retractarse de la afiliación, ni intentó devolverse en los 5, 10 o 15 años siguientes a la afiliación, ni hizo uso del periodo de gracia otorgado por la Ley 797 de 2003, no es posible que corresponda a la Nación, que generó reglas claras y comprensibles del sistema, asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas por los afiliados ni responder por sus omisiones o inacción.

Entonces, en la medida en que cada afiliado es responsable de mantenerse informado, no le es dable alegar el desconocimiento de las normas como excusa para iniciar un litigio que le permita incumplirlas. Tal afirmación riñe con la presunción legal *juris ignorantia non prodest* consagrada en el artículo 1509 del Código Civil y con lo prescrito en el artículo 9 ibídem según el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa.

4. Conforme con lo anterior, la inversión de la carga de la prueba que exonera al afiliado del deber de probar sus afirmaciones, no tiene justificación cuando el afiliado si está en posibilidad de probar (i) que buscó asesoría y no se la brindaron, o (ii) que la asesoría no fue suficiente para tomar una decisión acertada, pues dirimir la discusión jurídica sin que el afiliado que alega la ineficacia o la nulidad compruebe por lo menos que hizo uso los recursos a su alcance para poderse informar debidamente resulta inequitativo, máxime si se tiene en cuenta que no todos los afiliados son legos; por el contrario, la gran mayoría de los afiliados que hoy están demandando, devengan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, son profesionales e incluso ejercen altos cargos en la empresa privada o en el sector público, entre ellos hay congresistas, secretarios generales de entidades públicas, magistrados, jueces, funcionarios públicos de nivel directivo del sector nacional, y de los fondos de pensiones, funcionarios de organismos de supervisión, agentes comerciales de las AFP, gerentes de bancos, entre otros, de quienes se puede suponer un nivel educativo e intelectual suficiente para comprender los efectos de las decisiones adoptadas.



En este sentido, la inversión de la carga de la prueba que obliga a la administradora a probar que no lo engañó, siendo insuficiente probar que otorgó la información correspondiente según las exigencias de la normativa vigente para la época del traslado, viola el derecho a la tutela efectiva que tiene la demandada, toda vez que le impone una carga excesiva, además, porque son deberes de la persona y del ciudadano según lo prescribe la Constitución Política, *“colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia”*.

En razón de lo anterior, en los procesos de anulación o ineficacia de afiliación, se debe lograr, en razón de la dinamización de la carga de la prueba, que cada uno de los contendientes contribuya a que el juez conozca la verdad de los hechos debatidos aportando las pruebas a su alcance, con lo cual el afiliado debe demostrar que buscó asesoría y no se la brindaron, que la asesoría no fue suficiente para tomar una decisión o que en la misma se entregó información falsa o errónea. El afiliado, también debería estar en capacidad de demostrar que hizo uso de los servicios del Defensor del Consumidor Financiero o que elevó derechos de petición ante las AFP, Colpensiones, la Superintendencia Financiera o los Ministerios de Trabajo o de Hacienda, con el fin de conocer las diferencias entre régimen, pero no obtuvo respuesta, pues eso permitirá a los jueces y tribunales laborales, estudiar los casos con base en las pruebas que obren en el expediente..

5. Ahora bien, no puede descartarse que, a pesar de la diligencia del afiliado, pudo no haber sido debidamente asesorado en su traslado al Régimen de Ahorro Individual, que ningún beneficio podía ofrecerle, como es el caso de quien tenía derecho al régimen de transición, o había reunido los requisitos para la pensión o estaba muy cerca de obtenerla por haber cotizado en el RPM el 75% (975 semanas) o más de las semanas necesarias para obtener una pensión en dicho régimen, pues, estos afiliados tenían la expectativa legítima de pensionarse en él, por lo cual nunca debieron trasladarse al Régimen de Ahorro Individual, casos que deben ser analizados a la luz de la jurisprudencia existente en materia de régimen de transición y otros pronunciamientos aplicables.
6. Con respecto a los pensionados bajo cualquier modalidad, ya sea en retiro programado o a través de renta vitalicia, se estima adecuada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de indicar que los pensionados ***“...se encuentran en una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, los intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones...”***. Por ello, bajo ninguna circunstancia debería operar la nulidad o ineficacia de la afiliación en ninguna de las dos modalidades de pensión.

Sin embargo, nos apartamos de sus consideraciones sobre la posibilidad de iniciar procesos indemnizatorios por daños y perjuicios en contra de las AFP, en la medida en que las pensiones fueron reconocidas por solicitud propia del afiliado, quien antes de pensionarse firmó su historia laboral, negoció su bono pensional, escogió la modalidad de pensión y desplegó otra serie de acciones que no permitían inferir que en aquel momento estuviera inconforme con la pensión otorgada por el RAIS o que estuviera desinformado, pues todas sus acciones conducían a lograr la pensión en aquel régimen.

7. Finalmente, en materia de la orden de devolución de recursos que imparte el juez como consecuencia de la declaratoria de nulidad o ineficacia del traslado, en concepto de este Ministerio solo cabe trasladar los recursos acreditados en la cuenta de ahorro individual del afiliado más sus rendimientos y el 1,5% de cotización al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, más sus rendimientos.

No deben ser objeto de traslado el valor de los bonos pensionales que se encuentren acreditados en la cuenta de ahorro pensional del afiliado, porque éstos deben ser reintegrados a sus emisores



conforme las disposiciones que rigen la materia, por dos motivos: (i) porque con bonos A se financian pensiones del RAIS no del RPMPD y (ii) de darse lugar a la nulidad o ineficacia del traslado, tampoco se produce el fundamento fáctico del bono pensiona tipo A⁷, esto es la afiliación al RAIS.

Tampoco pueden ser objeto de traslado los recursos de los gastos de administración porque esos fueron utilizados para la operación normal de la administradora, y son los que hacen posible que los saldos devueltos por el RAIS al RPMPD, incluyan rendimientos. En el mismo sentido, no pueden ser trasladados los recursos empleados para el pago de las primas del seguro previsional, porque ellas ya fueron entregadas a las aseguradoras del mercado y no se encuentran en poder de la AFP, siendo destinadas al cubrimiento del riesgo asegurado.

Téngase en cuenta que las prestaciones que se deriven del acaecimiento de los riesgos de invalidez y muerte deben ser solicitadas ante la entidad administradora a la cual se encontraba afiliado el solicitante a la fecha de ocurrencia de la muerte o de la estructuración de la invalidez. Y en este evento la entidad administradora de pensiones de la cual queda retirada la persona y la compañía de seguros del previsional, tienen a su cargo la prestación de los servicios y el reconocimiento de las prestaciones derivadas de la invalidez y muerte por el periodo pagado, siempre que el afiliado cumpla con los requisitos de semanas cotizadas antes de la fecha siniestro (50 semanas en los tres años anteriores) y demás requisitos legales correspondientes.

CUARTO EJE TEMÁTICO

- a. **Desde la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Ley 100 de 1993): (i) ¿ha existido una política pública para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional?; (ii) ¿cuáles han sido sus etapas de acuerdo con la legislación vigente en cada momento?; y (iii) ¿cuáles han sido las responsabilidades y/o competencias asumidas por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Financiera (antes Superintendencia Bancaria), en esta materia?**

Política pública para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional y etapas de acuerdo con la legislación vigente en cada momento

El deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional, a fin de que éstos puedan adoptar una decisión libre sobre su futuro pensional, ha tenido una progresiva evolución desde la expedición de la Ley 100 de 1993, como resultado de una política tendiente a intensificar los deberes de las administradoras del Sistema Pensional para facilitar al afiliado o usuario la toma de una decisión responsable. En esta evolución se pueden distinguir varias etapas según la legislación aplicable.

1. **La primera etapa** se enmarca en lo dispuesto por los artículos 13, literal b), y 271, de la Ley 100 de 1993.

En esta etapa la legislación del Sistema General de Pensiones dispuso que "[l]a selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado".

Indicando igualmente, que, el empleador, y, en general, cualquier persona natural o jurídica, que impidiese o atentara en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e

⁷ Definiciones del artículo 1 del Decreto 1748 de 1994:

"Tipo A (Bonos Pensionales): Designación dada a los bonos regulados por el Decreto ley 1299 de 1994 que se expiden a aquellas personas que se trasladen al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad."

"Tipo B (Bonos Pensionales): Designación dada a los regulados por el Decreto ley 1314 de 1994 que se expiden a servidores públicos que se trasladen al ISS en o después de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones."



instituciones del sistema de seguridad social integral, *"se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario."*

Por su parte, no se dispuso en la ley medida alguna referente a la obligación de las administradoras de suministrar información a usuarios y afiliados para facilitar la escogencia del régimen de sus preferencias, ni relativa a la realización de simulaciones pensionales.

Sin embargo, dada la naturaleza de las administradoras de fondos de pensiones, como entidades que hacen parte del sector financiero, es importante indicar que estas se encuentran sometidas a las disposiciones del Decreto 663 de 1993, *«Estatuto Orgánico del Sistema Financiero»*, que, para la fecha, imponía a las entidades vigiladas el deber de *"suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado"*.

Al respecto, cabe anotar que el Decreto 663 de 1993 si bien no es una norma que regule específicamente las administradoras de pensiones, cubre a la totalidad de entidades financieras, por lo que los deberes de información impuestos en el citado artículo son deberes generales para garantizar la transparencia de las operaciones financieras de las entidades vigiladas, incluidas dichas entidades administradoras.

Atendiendo el significado de las palabras utilizadas, *"suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado"*, se puede evidenciar que, tratándose de administradoras de pensiones en el RAIS, el deber que les asistía contemplaba comunicar al afiliado que buscaba un traslado de régimen, entre otros aspectos, el esquema y características del Régimen de Ahorro Individual, su funcionamiento, y las obligaciones y derechos que adquirirían con su afiliación, las ventajas generales que ofrece este Sistema, la posibilidad que tienen de optar por una pensión a una edad anticipada siempre y cuando cuenten con capital suficiente que les permita financiar una pensión superior al 110% de un salario mínimo legal mensual vigente al año de 1993, tal como lo establece el artículo 64 de la Ley 100 de 1993; la figura de la Garantía de Pensión Mínima de Vejez a la que tienen derecho en el evento de no cumplir con el capital requerido para acceder a la pensión de vejez, siempre y cuando cumpliera con los requisitos de edad y semanas exigidos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 (1150 semanas de cotización); la posibilidad de obtener unos excedentes de libre disponibilidad; el factor herencia del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual a falta de beneficiarios de Ley, que son los elementos de juicio objetivos y generales que pueden determinar la decisión de optar por la selección del RAIS. A su turno, la conveniencia de la decisión no era para entonces del resorte de la administradora sino responsabilidad del cliente quien, de acuerdo con sus circunstancias, sopesaba, a la luz de la información recibida, la mejor decisión. No le era exigible entonces a la administradora hacer predicciones sobre el futuro pensional del interesado y mucho menos cuantificar el monto definitivo de la pensión, pues ello no solamente excedía el deber de información, sino que en todos los casos dependía de variables aleatorias según las circunstancias del afiliado, ajenas a la administradora.

Por su parte, en el año 1994 se expide el Decreto 692, que regula el derecho de información para las afiliaciones al RAIS, en cuyo artículo 11 dispone cómo debe diligenciarse la selección y vinculación a este régimen; cuál debe ser el contenido del formulario previsto para el efecto por la entonces Superintendencia Bancaria, so pena de no tener validez; y la exigencia de que *"Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora"* y que *"Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la leyenda pre-impresa en este sentido."*



En el mismo año se expide el Decreto 1161 que, en materia de traslado de regímenes, con el objeto de proteger la libertad de escogencia dentro del Sistema General de Pensiones, permitió el retracto del afiliado en todos los casos de selección, de una administradora de cualquiera de los regímenes o de un plan o fondo de pensiones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual haya manifestado por escrito la correspondiente selección, dándole espacio a las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, hubieren seleccionado expresamente un régimen de pensiones, quienes podrían ejercer el derecho de retracto dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la vigencia de éste.

Se impuso igualmente el deber de las administradoras de que cuando efectúen procesos de promoción, informen de manera clara y por escrito a los potenciales afiliados el derecho a retractarse.

De manera que, antes del 2009 se encontraban vigentes las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 1161 de 1994, que reglamentaron lo referente a la selección del régimen pensional y afiliación en el sistema general de pensiones, y que en momento alguno previeron la realización de una proyección pensional en la que se exhibiera el monto de la pensión de vejez en cada uno de los regímenes como requisito para efectuar el traslado, ni como componente de la información mínima a entregar por parte de las Administradoras. Estas disposiciones tampoco contemplaban que la asesoría debía estar orientada a indicar al interesado la conveniencia o inconveniencia del traslado según una valoración de su situación personal y particular, ni que existiera obligación de guardar los soportes de la información entregada, diferente a los formularios que debía suscribir el afiliado, y en los que la normatividad permitió la existencia de leyendas pre-impresas para validar la voluntariedad de la afiliación.

De forma tal que la evaluación sobre la conveniencia del traslado era responsabilidad del interesado, quien tenía el deber de informarse a sí mismo en la medida de sus capacidades, y valorar adecuadamente según su situación personal actual y proyecciones laborales futuras, cual resultaba ser el régimen que mejor respondía a sus intereses.

Es incuestionable que este sistema de información bien pudo dar lugar a decisiones equivocadas, como en los eventos de aquellas personas que, sin advertirlo, perdieron el régimen de transición, o que ya contaban con los requisitos para tener acceso al derecho pensional en el marco del régimen de transición o estaban próximos a cumplirlos, eventos que ya han sido solventados por la jurisprudencia constitucional, al establecer que las personas cobijadas por el régimen de transición pueden en cualquier momento optar por retornar al Régimen de Prima Media, cumpliendo los requisitos ya mencionados.

Por otra parte, en todo caso, es importante considerar que, a juicio de esta cartera, a menos que se determine probatoriamente que la situación era evidente para la administradora y que esta indujo en error o vicio al afiliado, se tendría que probar la falla en la actuación de la administradora, el vicio del consentimiento por parte del afiliado, y/o la información errónea que se le suministro y que el afiliado con el conocimiento propio de la Ley y las alternativas de protección previstas por la norma, para ese momento, como la misma posibilidad de traslado o el retracto, no pudo enfrentar, y que generó lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, para poder alegar que fue engañado o inducido a error por la omisión en la información que era relevante, pues esto pondría en práctica la dinamización de la carga de la prueba.

2. La segunda etapa se inicia con Ley 795 de 2003, continúa con la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010.

Es preciso recordar que, desde la Ley 795 de 2003 se formalizó la figura del defensor del consumidor y se estableció de forma obligatoria para todas las entidades vigiladas por la entonces Superintendencia Bancaria, y se modificó la redacción del EOSF en cuanto a la información a los usuarios, norma que fue desarrollada por el Decreto 690 de 2003.

Ahora bien, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, expedidos en protección de los consumidores financieros, reglamentan ampliamente los derechos de los consumidores, señalan los principios y el contenido básico de la información y establecen expresamente el deber de asesoría y buen consejo a cargo de las administradoras de pensiones, lo que evidencia la intención del legislador de fortalecer el deber de información, y de darle un alcance diferente, profundizándolo y estableciendo nuevos requerimientos frente a su alcance y forma de asesoría.

Al respecto, en la exposición de motivos de la Ley 1328, se expresó:

“La consagración de un régimen especial dentro del proyecto de reforma financiera, obedece al propósito claro de consolidar la protección al consumidor financiero, entendiendo por este toda persona natural o jurídica que accede a cualquiera de los productos y servicios ofrecidos por las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera. (...) “En tal sentido, efectuada la revisión de las disposiciones que consagran el mencionado régimen, se considera que si bien se ha avanzado, es necesario desarrollar aún más una cultura de protección al consumidor financiero adoptando a nivel legal una compilación breve, pero concisa, de derechos de los consumidores y de los deberes de las entidades. “El régimen propuesto se basa en tres pilares esenciales: El suministro de información, que debe ser entendido como el primer nivel de una verdadera protección ya que propicia la adecuada selección y manejo de servicios financieros, la debida diligencia en la prestación de servicios y la consolidación de la Defensoría del Cliente como institución orientada a la protección del consumidor financiero”.

En desarrollo de la Ley 1328 de 2009, se expidió el Decreto 2241 de 2010, por el cual se reglamentó el Régimen de Protección al Consumidor Financiero del Sistema General de Pensiones. En sus considerandos se señaló:

“Que para la protección de los afiliados al Régimen General de Pensiones, tanto en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad como en el de Prima Media con Prestación Definida, es fundamental definir claramente sus derechos y deberes para su ejercicio” y “Que las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones deben actuar con profesionalismo para la promoción y prestación de sus servicios, brindando para el efecto la asesoría e información suficiente que permita a los consumidores tomar decisiones”.

Desde entonces se impuso a las administradoras la obligación de realizar una asesoría, bajo el presupuesto de la “información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras (...). Este deber fue expresamente consagrado a partir del 1º de julio de 2010, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2241 de 2010, y, en consecuencia, solo a partir de ese momento se hace exigible tal información a las Administradoras de Fondos de Pensiones, pues anterior a ello, aunque les asistía el deber de información no era bajo esas premisas.

El deber de asesoría y buen consejo, con el alcance indicado, nace entonces con la legislación del 2010 y es distinta a la anterior obligación de informar. Así, la obligación de informar impone el deber de comunicar objetivamente los datos relevantes del régimen con el objeto de que el afiliado decida sopesando sus circunstancias cual es la mejor opción; el deber de asesoría y consejo va más allá, porque impone la orientación sobre la conveniencia de la decisión exponiéndole al interesado las ventajas y beneficios, los riesgos, desventajas y consecuencias de una u otra selección, según las circunstancias subjetivas del afiliado. La selección del afiliado sigue siendo libre y voluntaria, pero se toma previo un asesoramiento subjetivo, calificado e imparcial de su conveniencia o inconveniencia, sin que ello implique que se elimina la responsabilidad en cabeza del afiliado, de seleccionar de manera libre y voluntaria, como el único sujeto que conoce la totalidad de las condiciones y preferencias personales, que lo llevan a optar por uno u otro régimen pensional.

En este sentido, la distinción entre un deber y otro consiste en que, mientras el deber de información se cumple suministrando a la parte interesada los datos y circunstancias necesarios para que tome una decisión libre y voluntaria, el deber de consejo implica orientarlo y asesorarlo sobre la conveniencia o inconveniencia del negocio jurídico, valorando los riesgos y beneficios y explicándole las alternativas que tiene para elegir entre un sistema u otro. La decisión sigue siendo completamente libre del afiliado, pero es una decisión orientada mediante la opinión motivada del asesor que puede llegar a ser incluso una advertencia disuasiva, dadas las eventuales consecuencias que podría afrontar el afiliado.

3. La tercera etapa surge con la expedición de la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015, el Decreto 1813 de 2020 que adicionó el artículo 2.2.2.1.18. al Decreto 1833 de 2016 y las Circulares Externas Nos. 016 de 2016 y 024 de 2018 de la Superintendencia Financiera.

En esta nueva etapa el derecho a la información se intensificó en aras de lograr un asesoramiento imparcial y objetivo de los actores del Sistema. Hoy el afiliado que esté interesado en trasladarse de régimen puede obtener *“asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia”*. Es decir que recibe una doble asesoría por parte tanto del RPMPD como del RAIS, lo cual le permite conocer de parte y parte cuáles son, en su caso particular, las ventajas y desventajas de una selección u otra, y cuáles son las consecuencias jurídicas del traslado de uno de los regímenes pensionales al otro.

La Ley 1748 de 2014, adiciona la Ley 1328 de 2009, prescribiendo que las Administradoras del Sistema General de Pensiones deben garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre regímenes pensionales *reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes*.

El Decreto 2071 de 2015 reitera el deber del buen consejo que tienen las administradoras del Sistema General de Pensiones, y dispone que las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones *deberán garantizar que los afiliados que quieran trasladarse entre regímenes pensionales, esto es del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media y viceversa, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado*.

Señala adicionalmente que, como mínimo, la información conforme a la competencia de cada administradora del Sistema General de Pensiones debe contener: 1. *Probabilidad de pensionarse en cada régimen*. 2. *Proyección del valor de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, lo anterior frente a la posibilidad de no cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez a la edad prevista en la normatividad vigente*. 3. *Proyección del valor de la pensión en cada régimen*. 4. *Requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima en cada régimen*. 5. *Información sobre otros mecanismos de protección a la vejez vigentes dentro de la legislación*. 6. *Las demás que la Superintendencia Financiera de Colombia establezca*.

Por otra parte, a partir de la Circular Externa 016 de 2016, las administradoras deben mantener a disposición de la Superintendencia Financiera los documentos que soporten las solicitudes de traslado presentadas *con el propósito de que en cualquier momento se pueda verificar el cumplimiento del deber de asesoría, así como las instrucciones que en tal sentido se encuentran contenidas en la citada circular*.

Es relevante anotar que antes de la expedición de la Circular Externa 016 de 2016, a pesar de existir el deber de información y asesoría a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, no existía norma alguna que estableciera esta obligación de preservación de la documentación relacionada con la asesoría, cuya firma por parte del afiliado en el respectivo formulario de afiliación asegura que sí recibió la información y la asesoría y que comprendió los efectos legales así como los potenciales riesgos y beneficios de su decisión.



En resumen, solo a partir de la Ley 1328 de 2009, el Decreto 2241 de 2010 y más tarde de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen el deber de realizar, con el alcance indicado en cada una de las disposiciones reseñadas, el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo, sin perjuicio de que, en todo caso, la decisión continua recayendo en cabeza del afiliado.

Pero también es importante señalar que esta evolución legal del entendimiento y alcance que debe tener el deber de informar, no implica que de manera previa existiera una vulneración del derecho pensional ni una desprotección absoluta del afiliado, pues es claro que desde la vigencia de la Ley 100 de 1993 los afiliados tenían otros esquemas y con ello tuvieron varias oportunidades para regresar al Régimen de Prima Media haciendo uso, por ejemplo, de la facultad de retracto consagrada en el Decreto 1161 de 1994, que establece el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario, o haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que permitía trasladarse de régimen pensional cuando se hubiese permanecido en el mismo durante 3 años, sin la existencia de un periodo de carencia alguno relacionado con la edad de pensión (periodo señalado antes de la modificación de la Ley 797 de 2003, disposición original de la Ley 100 de 1993 que no incorporaba la restricción de los 10 años o menos de la edad de pensión).

Adicionalmente, también pudieron optar por regresar al RPMPD en el periodo o año de gracia otorgado por el artículo 1 del Decreto 3800 de 2003, que dispuso que *"las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha, prerrogativa ampliamente publicitada por las Administradoras de Fondos de Pensiones."*

También, pudieron haber efectuado un traslado voluntario, en su periodo de afiliación al RAIS, de manera previa a entrar en la restricción ya mencionada, de forma tal que en los aproximadamente más de 20 años de vigencia del nuevo sistema pensional, el afiliado ha contado con un sinnúmero de oportunidades para ejercer la libre elección de régimen pensional, antes de entrar en la restricción de los 10 años mencionada anteriormente.

Finalmente, todos los afiliados tuvieron acceso en cualquier momento al servicio del Consumidor Financiero, o pudieron hacer uso del derecho de petición para indagar ante la propia administradora, la Superintendencia Financiera de Colombia, los Ministerios de Trabajo (antiguo Protección Social) o el Ministerio de Hacienda los efectos de sus decisiones de selección de régimen.

Responsabilidades y/o competencias asumidas por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Financiera (antes Superintendencia Bancaria), en esta materia

La responsabilidad y competencias en materia de información en el Sistema General de Pensiones, puede verse desde dos puntos de vista. Por una parte, el diseño de políticas públicas, y por otra, la vigilancia y control de las administradoras sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

Desde el primer punto de vista, corresponde a los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público formular las políticas públicas en materia de seguridad social en pensiones, y el derecho a la información de afiliados y usuarios, en el marco de los parámetros dados por el legislador, a quien por voluntad constitucional corresponde el diseño y pautas de funcionamiento del sistema.

En este sentido, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, los mencionados Ministerios han cumplido con esta función y han promovido una profundización y mejora constante de los deberes de información de las administradoras, a través de la colaboración en la expedición de leyes en este sentido, y de la expedición de



decretos reglamentarios que desarrollaron en cada una de las etapas normativas ya referidas este derecho de los ciudadanos.

Los regímenes pensionales diseñados por la Ley 100 de 1993 son diferentes, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y esa dualidad, como lo ha considerado la Corte Constitucional,⁸ estimula la competencia entre los administradores de los sectores público y privado, y genera responsabilidad individual y social en cabeza de los afiliados de escoger el régimen que mayores ventajas les represente, así como la oportunidad para trasladarse dentro de las limitaciones que imponen las leyes, siendo ello un reflejo de otros postulados constitucionales, como el respecto al libre desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de la autonomía personal.

Gracias a las políticas progresivas diseñadas, hoy el consumidor financiero del Régimen General de Pensiones no solamente tiene el derecho de recibir información general, sino también de obtener la asesoría del buen consejo, y adicionalmente de recibir una doble asesoría de los representantes de las administradoras de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado, lo cual, sin dejar de preservar la libre elección, le facilita al afiliado información para que pueda tomar una decisión acerca del régimen pensional al cual quiere pertenecer. Sin que esta evolución del derecho a la información desconozca en momento alguno, que en todo caso, las disposiciones del sistema están establecidas en normas de rango legal, y, que, por ende, resultan de público conocimiento.

Desde el segundo punto de vista, la vigilancia y control de las administradoras del Régimen General de Pensiones, compete a la Superintendencia Financiera de Colombia (antes Superintendencia Bancaria) autoridad que tenía la supervisión y vigilancia del desaparecido ISS y hoy como autoridad de supervisión de la actividad financiera y aseguradora es el organismo vigilante de Colpensiones y de los Fondos de Pensiones y Cesantías, instituciones pertenecientes al sistema financiero. De manera que es su responsabilidad velar por el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas, lo referente al derecho de información del consumidor financiero.

b. Particularmente desde la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Ley 100 de 1993) y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, hasta la entrada en vigencia de las leyes 1328 de 2009 y 1748 de 2014, ¿qué acciones en concreto desplegaron las administradoras de pensiones y qué tipo de información suministraban a la persona interesada, para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional? Explicar el alcance de sus actuaciones y precisar si, a partir de las modificaciones normativas, desde 1993, han existido variaciones en la rigurosidad de este deber.

Como se indicó en la respuesta al punto anterior, antes del 2009 se encontraban vigentes las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 1161 de 1994, que reglamentaron lo referente a la selección del régimen pensional y afiliación en el sistema general de pensiones, y que en momento alguno previeron la realización de una proyección pensional en la que se exhibiera el monto de la pensión de vejez en cada uno de los regímenes, como requisito para efectuar el traslado, ni como componente de la información mínima a entregar por parte de las Administradoras. Estas disposiciones tampoco contemplaban que la asesoría debía estar documentada, ni que existiera obligación de guardar los soportes de la información entregada.

De esta manera, las distintas administradoras de pensiones realizaron una asesoría bajo el presupuesto de la información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que, bajo estos elementos, los consumidores financieros tomaron la decisión de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras.

Es así como podemos observar que el deber de asesoría e información de parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones ha tenido un desarrollo en la normatividad durante las últimas dos décadas de

⁸ Sentencia C -1024 de 2004.

funcionamiento del sistema, no siendo razonable ni jurídicamente válido que de manera alguna se les imponga a las administradoras deberes de información que no estaban previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento en que se generó el traslado de régimen, pues exigir el cumplimiento de normas aun no promulgadas desvirtuaría el principio de confianza legítima, seguridad jurídica y las normas propias de la aplicación de las leyes en el tiempo.

Como se mencionó anteriormente, desde la vigencia de la Ley 100 de 1993, se entregaba información general del funcionamiento del sistema y las particularidades propias del régimen pensional en el que se pretendía afiliarse el ciudadano y los afiliados tuvieron varias oportunidades y diferentes herramientas para modificar su decisión y regresar al Régimen de Prima Media haciendo uso de la facultad con que contaban para hacerlo en virtud de lo establecido en el Decreto 1161 de 1994, que consagra el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario, o también haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que permitió trasladarse de régimen pensional cuando ha permanecido en el mismo durante 3 años⁹, sin limitación de edad.

De la misma manera, también pudieron optar por regresar al RPMPD en el periodo o año de gracia otorgado por el artículo 1° del Decreto 3800 de 2003, que dispuso que *“las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha...”*, prerrogativa ampliamente publicitada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en medios de amplia circulación.

Adicionalmente, es de señalar que las AFPS han adelantado campañas de comunicación para darles a conocer a sus afiliados las características del Régimen de Ahorro Individual y sus diferencias con el Régimen de Prima Media, incluso en el caso de una AFP en particular, se tiene conocimiento de un trabajo desarrollado mediante el cual, contactaban a los afiliados y les explicaban, antes de que cumplieran 47 o 52 años de edad, cuales eran las diferencias entre las prestaciones reconocidas en cada régimen, informándole que una vez cumplida esa edad entraban en el periodo de carencia de los últimos 10 años y no podían trasladarse de nuevo al RPMPD.

Finalmente, es de recordar que durante todo el tiempo de existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones ha existido la figura del Defensor del Cliente (artículo 98 del EOF), conocida desde la Ley 795 de 2003 como defensor del Consumidor Financiero, al que cualquier afiliado pudo acudir si hubiese considerado que la entidad financiera no le prestó el servicio adecuadamente, no cumplió con lo acordado en la prestación de un servicio o proporcionó información que le resultara insuficiente para tomar una decisión.

Así las cosas, la teoría desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, en la que indica que la información entregada por las AFP conforme a las normas que regían la materia en su momento (antes de la Ley 1748 de 2014), es insuficiente y ello *per se*, se constituye en una causal válida para declarar la ineficacia o nulidad de afiliación, no es congruente con los principios de irretroactividad de ley y de confianza legítima de las administradoras de Pensiones y de la Nación.

Cordial saludo,

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Revisó: OAJ/ Subdirección Jurídica
Elaboró: Natalia Guevara Rivera/Gonzalo Casas Monsegny

⁹ Período señalado antes de la modificación de la Ley 797 de 2003.



Nº 3748

República de Colombia

1

NOTARÍA DIECIOCHO (18) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

ESCRITURA PÚBLICA: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO (3748)

Nº 3748

FECHA OTORGAMIENTO: VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS (2022)

PRIMER ACTO

REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL

PODERDANTE:

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A. con NIT. 800.144.331-3 debidamente representada por
SILVIA LUCÍA REYES ACEVEDO identificado(a) con C.C. No. 37.893.544
expedida en San Gil - Santander

APODERADOS:

ADOLFO TOUS SALGADO	CC. No. 8.285.008
ADRIANA ALEJANDRA ORDÓÑEZ BLANCO	CC. No. 1.098.761.066
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVEA	CC. No. 39.777.477
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO	CC. No. 53.077.586
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ	CC. No. 79.985.203
AMALIA MARIA TATIS ROMERO	CC. No. 52.324.621
ANA MARIA ROMERO LAGOS	CC. No. 1.019.119.578
ANA MARIA VALENCIA BOTERO	CC. No. 42.162.378
ANA XIMENA TAMAYO	CC. No. 36.286.470
ANDERSON ALIRIO ARDILA MEDINA	CC. No. 1.099.210.744
ANDREA AYALA GOMEZ	CC. No. 1.140.887.859
ANDREA DEL TORO BOCANEGR	CC. No. 52.253.673
ANDREA PATRICIA ROLONG AVELLA	CC. No. 1.045.685.857
ANDRES FELIPE ANGARITA ARCINIEGAS	CC. No. 1.140.857.122
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA	CC. No. 1.069.582.580
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA	CC. No. 1.053.844.786
ANDRES GONZALES HENAO	CC. No. 10.004.318
ANDRES LALINDE CERON	CC. No. 1.037.641.903
ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	CC. No. 84.451.973
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	CC. No. 1.098.814.116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	CC. No. 34.325.896

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



PC011715878



PC067845189

08-07-22 PC011715878

01/0004598

11-10-22 PC067845189

SMUTERVL05

TELEFONO 01 800 00 00 00

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



BEATRIZ LALINDE GOMEZ	CC. No. 32.305.840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	CC. No. 52.033.898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	CC. No. 41.421.981
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	CC. No. 1.018.467.943
CARLA SANTAFE FIGUEREDO	CC. No. 1.130.608.527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	CC. No. 91.475.103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	CC. No. 79.955.080
CARLOS DANIEL RAMIREZ GOMEZ	CC. No. 1.049.632.112
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	CC. No. 8.752.361
CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	CC. No. 79.693.893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT. No. 901.128.523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	CC. No. 37.726.059
CATALINA CORTES VIÑA	CC. No. 1.010.224.930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	CC. No. 51.960.087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	CC. No. 79.795.447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	CC. No. 43.511.802
CLAUDIA LUCIA BEDOYA MORENO	CC. No. 43.730.160
CLAUDIA PATRICIA CORZO RINCON	CC. No. 63.508.106
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	CC. No. 1.088.306.242
DANIEL FERNANDEZ FLORES	CC. No. 1.017.170.491
DANIEL RENDON ACEVEDO	CC. No. 1.017.219.299
DANIELA GARCIA VELEZ	CC. No. 1.088.023.743
DANIELA GUERRERO ORDONEZ	CC. No. 1.018.458.983
DANIELA PELAEZ RODAS	CC. No. 1.090.399.073
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	CC. No. 1.032.360.506
DIANA MARGARITA BERROCAL LENGUA	CC. No. 1.067.874.002
DIANA MARTINEZ CUBIDES	CC. No. 52.264.480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	CC. No. 84.451.268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	CC. No. 1.152.459.617
DUBAN ANDRES JIMENEZ AGUIRRE	CC. No. 1.152.463.385
EDUARDO JOSE GIL GONZALES	CC. No. 16.613.428
ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	CC. No. 43.868.037
ELIZABETH MOJICA CHACON	CC. No. 52.794.871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	CC. No. 32.779.976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	CC. No. 41.469.144
FEDERICO URDINOLA LENIS	CC. No. 94.309.563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	CC. No. 79.324.734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	CC. No. 19.499.248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	CC. No. 12.971.749
FREDDY QUINTERO LOPEZ	CC. No. 79.581.111
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	CC. No. 1.140.838.086
GLORIA ESPERANZA MOJICA	CC. No. 40.023.522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT No. 830.515.294-0
GRETTEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	CC. No. 1.129.580.678

Nº 3748 República de Colombia

3



GUILLERMO LEON CHAVEZ
 GUSTAVO VILLEGAS YEPES
 IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ
 IVONNE ASTRID ORTIZ GIRALDO
 JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ
 JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAVA
 JENNIFER GUILLEN FONSECA
 JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS
 JEYSON SMITH NORIEGA SUAREZ
 JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA
 JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ
 JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA
 JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES
 JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA
 JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO
 JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA
 JUAN DAVID RIOS TAMAYO
 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA
 JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO
 JUAN JOSE JARAMILLO SANCHEZ
 JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO
 JUAN SEBASTIAN RAMIREZ MORALES
 JUANA LUCIA VARGAS ORTIZ
 JULIANA BARONA MORALES
 KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ
 KEREN MARIA PAEZ HOYOS
 LAURA DANIELA PARRA SAENZ
 LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA
 LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS
 LEONARDO ANDRÉS RODELO ORTIZ
 LINA MARIA VARGAS LIBERATO
 LIZ WENDY PEREZ MATOS
 LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.
 LUIS CARLOS GEBAUER MORALES
 LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN
 LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA
 LUIS GUILLERMO IGLESIAS BERMEO
 LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO
 LUISA FERNANDA CURREA FRANCO
 LUZ DARY CUERVO DUARTE
 LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO
 LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE
 LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES
 MANUELA MOLINA VALENCIA

CC. No. 13.011.276
 CC. No. 1.144.054.635
 CC. No. 32.737.160
 CC. No. 32.243.789
 CC. No. 1.010.185.094
 CC. No. 80.879.894
 CC. No. 1.018.427.249
 CC. No. 1.053.801.795
 CC. No. 1.030.548.705
 CC. No. 1.015.401.438
 CC. No. 1.110.479.285
 CC. No. 1.144.127.106
 CC. No. 79.443.280
 CC. No. 79.914.477
 CC. No. 91.534.199
 CC. No. 10.097.139
 CC. No. 1.130.676.848
 CC. No. 19.248.144
 CC. No. 72.255.168
 CC. No. 1.035.877.468
 CC. No. 1.036.623.986
 CC. No. 1.036.929.558
 CC. No. 1.017.227.899
 CC. No. 1.015.462.399
 C.C No. 22.731.988
 CC. No. 1.045.675.899
 CC. No. 1.030.673.595
 CC. No. 1.037.595.474
 CC. No. 53.905.165
 CC. No. 1.018.440.292
 CC. No. 1.049.639.055
 CC. No. 1.143.165.172
 NIT. No. 830.118.372-4
 CC. No. 77.191.671
 CC. No. 79.157.258
 CC. No. 10.020.115
 CC. No. 1.082.930.759
 CC. No. 94.540.769
 CC. No. 1.072.709.498
 CC. No. 52.966.520
 CC. No. 52.647.144
 CC. No. 51.768.337
 CC. No. 1.094.890.026
 CC. No. 1.152.212.193



PC011715879



PC067845190

08-07-22 PC011715879

F50H220V6C

Impresión en tinta



11-10-22 PC067845190

FAC014CMPS

TH0433 198115 00001

MARIA ALEJANDRA GIL CAMPOS	CC. No. 1.018.462.326
MARIA ANGELICA AGUIRRE APONTE	CC. No. 1.018.430.499
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	CC. No. 52.431.353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	CC. No. 57.463.554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	CC. No. 67.013.937
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	CC. No. 42.011.709
MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	CC. No. 1.017.186.779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	CC. No. 34.546.611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	CC. No. 52.517.325
MAYCOL RAFAEL SANCHEZ VELEZ	CC. No. 1.143.150.933
MELISSA LOZANO HINCAPIE	CC. No. 1.088.332.294
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	CC. No. 75.104.922
MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	CC. No. 1.110.464.235
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	CC. No. 1.053.768.706
NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA	CC. No. 73.380.125
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	CC. No. 88.212.852
NAYROBY DIAZ REINO	CC. No. 34.946.544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	CC. No. 12.106.814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	CC. No. 7.167.913
ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	CC. No. 12.919.935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	CC. No. 19.090.427
PATRICIA CERON SANCHEZ	CC. No. 34.545.617
PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS	CC. No. 1.016.089.697
PAULINA TOUS GAVIRIA	CC. No. 42.137.888
RAFAEL GARCIA MENDEZ	CC. No. 13.719.501
RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES	CC. No. 45.441.500
SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO	C.C.No. 46.386.722
SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA	CC. No. 5.162.675
SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ	CC. No. 92.642.437
SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA	CC. No. 80.875.529
SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO	CC. No. 1.088.023.149
SHULY ROXANA GOMEZ FANG	CC. No. 1.050.957.682
TANIA ISABEL ZAPATA LORA	CC. No. 1.152.694.649
TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS	NIT No. 900.411.483-2
UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	CC. No. 17.970.755
VALENTINA SANCHEZ GONZALEZ	CC. No. 1.070.022.343
VANESSA GIRALDO CIFUENTES	CC. No. 1.088.271.844
VANESSA LICETH BELLO SALCEDO	CC. No. 1.140.855.245
VANESSA PRINCE GARCIA MEJIA	CC. No. 40.945.070
VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA	CC. No. 42.128.976
VLADIMIR MONTOYA MORALES	CC. No. 1.128.276.094
WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS	CC. No. 1.014.217.682
WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ	CC. No. 1.026.293.434
WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES	CC. No. 1.082.926.236

República de Colombia

Nº 3748

5

WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA
YEUDI VALLEJO SANCHEZ
YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA
YULIETH ARIAS ALVAREZ

CC. No. 16.783.965
CC. No. 79.963.537
CC. No. 22.539.744
CC. No. 1.088.276.477

VALOR DEL ACTO: SIN CUANTÍA

SEGUNDO ACTO

PODER ESPECIAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:

PODERDANTE:

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A. con NIT. 800.144.331-3 debidamente representada por
SILVIA LUCÍA REYES ACEVEDO identificado(a) con C.C. No. 37.893.544
expedida en San Gil - Santander

APODERADOS:

ADOLFO TOUS SALGADO
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO
ALEJANDRO ARGOTI NARANJO
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ
AMALIA MARIA TATIS ROMERO
ANA MARIA ROMERO LAGOS
ANA MARIA VALENCIA BOTERO
ANA XIMENA TAMAYO
ANDERSON ALIRIO ARDILA MEDINA
ANDREA AYALA GOMEZ
ANDREA DEL TORO BOCANEGRA
ANDREA PATRICIA ROLONG AVELLA
ANDRES FELIPE ANGARITA ARCINIEGAS
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA
ANDRES GONZALES HENAO
ANDRES LALINDE CERON
ANDRES VALENCIA GUTIERREZ
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO
BEATRIZ LALINDE GOMEZ

CC No. 8.285.008
CC No. 39.777.477
CC No. 53.077.586
CC No. 1.018.447.580
CC No. 79.985.203
CC No. 52.324.621
CC No. 1.019.119.578
CC No. 42.162.378
CC No. 36.286.470
CC No. 1.099.210.744
CC No. 1.140.887.859
CC No. 52.253.673
CC No. 1.045.685.857
CC No. 1.140.857.122
CC No. 1.069.582.580
CC No. 1.053.844.786
CC No. 10.004.318
CC No. 1.037.641.903
CC No. 84.451.973
CC No. 1.098.814.116
CC No. 34.325.896
CC No. 32.305.840

PC011715880

PC067845191

08-07-22 PC011715880

11-10-22 PC067845191

TSUJ00052

DWMCOMJUZ

BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	CC No. 52.033.898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	CC No. 41.421.981
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	CC No. 1.018.467.943
CARLA SANTAFE FIGUEREDO	CC No. 1.130.608.527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	CC No. 91.475.103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	CC No. 79.955.080
CARLOS DANIEL RAMIREZ GOMEZ	CC No. 1.049.632.112
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	CC No. 8.752.361
CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	CC No. 79.693.893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT No. 901.128.523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	CC No. 37.726.059
CATALINA CORTES VIÑA	CC No. 1.010.224.930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	CC No. 51.960.087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	CC No. 79.795.447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	CC No. 43.511.802
CLAUDIA LUCIA BEDOYA MORENO	CC No. 43.730.160
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	CC No. 1.088.306.242
DANIEL FERNANDEZ FLORES	CC No. 1.017.170.491
DANIEL RENDON ACEVEDO	CC No. 1.017.219.299
DANIELA GARCIA VELEZ	CC No. 1.088.023.743
DANIELA GUERRERO ORDÓÑEZ	CC No. 1.018.458.983
DANIELA PELAEZ RODAS	CC No. 1.090.399.073
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	CC No. 1.032.360.506
DIANA MARGARITA BERROGAL LENGUA	CC No. 1.067.874.002
DIANA MARTINEZ CUBIDES	CC No. 52.264.480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	CC No. 84.451.268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	CC No. 1.152.459.617
DUBAN ANDRES JIMENEZ AGUIRRE	CC No. 1.152.463.385
EDUARDO JOSE GIL GONZALES	CC No. 16.613.428
ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	CC No. 43.868.037
ELIZABETH MOJICA CHACON	CC No. 52.794.871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	CC No. 32.779.976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	CC No. 41.469.144
FEDERICO URDINOLA LENIS	CC No. 94.309.563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	CC No. 79.324.734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	CC No. 19.499.248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	CC No. 12.971.749
FREDDY QUINTERO LOPEZ	CC No. 79.581.111
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	CC No. 1.140.838.086
GINNA TATIANA DÍAZ MAHECHA	CC No. 1.030.532.562
GLORIA ESPERANZA MOJICA	CC No. 40.023.522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT No. 830.515.294-0
GRETEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	CC No. 1.129.580.678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	CC No. 13.011.276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	CC No. 1.144.054.635
ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION	CC No. 79.889.501

Nº 3748 República de Colombia

7



IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ
 JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ
 JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAVA
 JENNIFER GUILLEN FONSECA
 JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS
 JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA
 JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ
 JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA
 JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES
 JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA
 JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO
 JOSE ALFREDO ACOSTA ACEVEDO
 JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA
 JUAN DAVID RIOS TAMAYO
 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA
 JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO
 JUAN JOSE JARAMILLO SANCHEZ
 JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO
 JUAN SEBASTIAN RAMIREZ MORALES
 JUANA LUCIA VARGAS ORTIZ
 KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ
 KEREN MARIA PAEZ HOYOS
 LAURA DANIELA PARRA SAENZ
 LAURA DANIELA PEÑA GUEVARA
 LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA
 LAURA MARCELA RAMÍREZ ROJAS
 LAURA XIMENA FLOREZ GONZALEZ
 LEONARDO ANDRES RODELO ORTIZ
 LINA MARIA VARGAS LIBERATO
 LIZ WENDY PEREZ MATOS
 LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.
 LUIS CARLOS GEBAUER MORALES
 LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN
 LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA
 LUIS GUILLERMO IGLESIAS BERMEIO
 LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO
 LUISA FERNANDA CURREA FRANCO
 LUZ DARY CUERVO DUARTE
 LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO
 LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE
 LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES
 MANUELA MOLINA VALENCIA
 MARIA ALEJANDRA GIL CAMPOS
 MARIA ALEJANDRA PLATA ACEVEDO
 MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO
 MARIA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ

CC No. 32.737.160
 CC No. 1.010.185.094
 CC No. 80.879.894
 CC No. 1.018.427.249
 CC No. 1.053.801.795
 CC No. 1.015.401.438
 CC No. 1.110.479.285
 CC No. 1.144.127.106
 CC No. 79.443.280
 CC No. 79.914.477
 CC No. 91.534.199
 CC No. 1.140.880.274
 CC No. 10.097.139
 CC No. 1.130.676.848
 CC No. 19.248.144
 CC No. 72.255.168
 CC No. 1.035.877.468
 CC No. 1.036.623.986
 CC No. 1.036.929.558
 CC No. 1.017.227.899
 CC No. 22.731.988
 CC No. 1.045.675.899
 CC No. 1.030.673.595
 CC No. 1.094.967.852
 CC No. 1.037.595.474
 CC No. 53.905.165
 CC No. 1.098.797.771
 CC No. 1.018.440.292
 CC No. 1.049.639.055
 CC No. 1.143.165.172
 NIT No. 830.118.372-4
 CC No. 77.191.671
 CC No. 79.157.258
 CC No. 10.020.115
 CC No. 1.082.930.759
 CC No. 94.540.769
 CC No. 1.072.709.498
 CC No. 52.966.520
 CC No. 52.647.144
 CC No. 51.768.337
 CC No. 1.094.890.026
 CC No. 1.152.212.193
 CC No. 1.018.462.326
 CC No. 1.098.778.782
 CC No. 52.431.353
 CC No. 57.463.554

PC011715881

PC067845192

08-07-22 PC011715881

JCZ9Y618A

11-10-22 PC067845192

Y69K905-HWD

MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	CC No. 67.013.937
MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD	CC No. 40.043.858
MARIA XIMENA MEDINA RAMIREZ	CC No. 37.393.314
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	CC No. 42.011.709
MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	CC No. 1.017.186.779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	CC No. 34.546.611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	CC No. 52.517.325
MAYCOL RAFAEL SANCHEZ VELEZ	CC No. 1.143.150.933
MELISSA LOZANO HINCAPIE	CC No. 1.088.332.294
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	CC No. 75.104.922
MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	CC No. 1110464235
MIRIAM TATIANA PEÑA MOLANO	CC No. 1.026.274.345
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	CC No. 1.053.768.706
NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA	CC No. 73.380.125
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	CC No. 88.212.852
NAYROBY DIAZ REINO	CC No. 34.946.544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	CC No. 12.106.814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	CC No. 7.167.913
ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	CC No. 12.919.935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	CC No. 19.090.427
PATRICIA CERON SANCHEZ	CC No. 34.545.617
PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS	CC No. 1.016.089.697
PAULINA TOUS GAVIRIA	CC No. 42.137.888
PROCEDER S.A.S	NIT No. 901.289.080-9
RAFAEL GARCIA MENDEZ	CC No. 13.719.501
RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES	CC No. 45.441.500
SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO	CC No. 46.386.722
SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA	CC No. 5.162.675
SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ	CC No. 92.642.437
SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA	CC No. 80.875.529
SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO	CC No. 1.088.023.149
SHIRLY MARCELA VANEGAS TREJOS	CC No. 1.126.598.781
SHULY ROXANA GOMEZ FANG	CC No. 1.050.957.682
TANIA ISABEL ZAPATA LORA	CC No. 1.152.694.649
TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS	NIT No. 900.411.483-2
UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	CC No. 17.970.755
VALENTINA SANCHEZ GONZALEZ	CC No. 1.070.022.343
VANESSA GIRALDO CIFUENTES	CC No. 1.088.271.844
VANESSA LICETH BELLO SALCEDO	CC No. 1.140.855.245
VANESSA PRINCE GARCIA MEJIA	CC No. 40.945.070
VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA	CC No. 42.128.976
VLADIMIR MONTTOYA MORALES	CC No. 1.128.276.094
WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS	CC No. 1.014.217.682
WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ	CC No. 1.026.293.434
WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES	CC No. 1.082.926.236
WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA	CC No. 16.783.965

Nº 3748 República de Colombia

9

YEUDI VALLEJO SANCHEZ
YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA
YULIETH ARIAS ALVAREZ

CC No. 79.963.537
CC No. 22.539.744
CC No. 1.088.276.477

VALOR DEL ACTO: SIN CUANTÍA

En la Ciudad de Bogotá Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los veintidós (22) días de diciembre de dos mil veintidós (2022), en la Notaria Dieciocho (18) del Círculo de Bogotá, estando fungiendo como Notario en propiedad **JOSÉ MIGUEL ROBAYO PIÑEROS**, se otorgó escritura pública en los siguientes términos:

PRIMER ACTO

REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL

COMPARECÍO CON MINUTA ESCRITA

SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.893.544 expedida en San Gil - Santander, quien en su calidad de Vicepresidente y por tanto Representante Legal obra en nombre y representación de **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3, sociedad de servicios financieros legalmente constituida por Escritura Pública número cinco mil trescientos siete (5307) de fecha veintidós (22) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaria Veintitrés (23) del Círculo Notarial de Bogotá, con autorización de funcionamiento conferida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución S.F.C. 3970 del treinta (30) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991) y domicilio principal en Bogotá D.C, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se anexa para su protocolización, y;



PO011715882



PC067845193



08-07-22 PO011715882

20FLOCEYSI

11-10-22 PC067845193

JM5XSBV9DC

MANIFESTÓ

PRIMERO: Que por medio del presente instrumento público se **REVOCA** los **PODERES ESPECIALES Y GENERALES** otorgados por medio de la Escritura Pública número dos mil trescientos veintiséis (1326) otorgada el (11) de mayo de dos mil veintidós (2022) de la Notaría Dieciocho (18) del Circulo de Bogotá D.C., a las personas a las cuales se les había conferido poder especial mediante dicha escritura, dejándola sin valor, ni efecto alguno.

HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA

NOTA UNO (1).- Acude a este despacho a **REVOCAR** en todas y cada una de sus partes **EL PODER ESPECIAL** otorgado a:

ADOLFO TOUS SALGADO	CC. No. 8.285.008
ADRIANA ALEJANDRA ORDÓÑEZ BLANCO	CC. No. 1.098.761.066
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA	CC. No. 39.777.477
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO	CC. No. 53.077.586
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ	CC. No. 79.985.203
AMALIA MARIA TATIS ROMERO	CC. No. 52.324.621
ANA MARIA ROMERO LAGOS	CC. No. 1.019.119.578
ANA MARIA VALENCIA BOTERO	CC. No. 42.162.378
ANA XIMENA TAMAYO	CC. No. 36.286.470
ANDERSON ALIRIO ARDILA MEDINA	CC. No. 1.099.210.744
ANDREA AYALA GOMEZ	CC. No. 1.140.887.859
ANDREA DEL TORO BOCANEGRA	CC. No. 52.253.673
ANDREA PATRICIA ROLONG AVELLA	CC. No. 1.045.685.857
ANDRES FELIPE ANGARITA ARCINIEGAS	CC. No. 1.140.857.122
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA	CC. No. 1.069.582.580
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA	CC. No. 1.053.844.786
ANDRES GONZALES HENAO	CC. No. 10.004.318
ANDRES LALINDE CERON	CC. No. 1.037.641.903
ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	CC. No. 84.451.973
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	CC. No. 1.098.814.116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	CC. No. 34.325.896
BEATRIZ LALINDE GOMEZ	CC. No. 32.305.840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	CC. No. 52.033.898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	CC. No. 41.421.981
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	CC. No. 1.018.467.943
CARLA SANTAFE FIGUEREDO	CC. No. 1.130.608.527

Nº 3748

República de Colombia

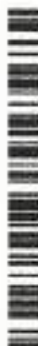
11



CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	CC. No. 91.475.103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	CC. No. 79.955.080
CARLOS DANIEL RAMIREZ GOMEZ	CC. No. 1.049.632.112
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	CC. No. 8.752.361
CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	CC. No. 79.693.893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT. No. 901.128.523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	CC. No. 37.726.059
CATALINA CORTES VIÑA	CC. No. 1.010.224.930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	CC. No. 51.960.087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	CC. No. 79.795.447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	CC. No. 43.511.802
CLAUDIA LUCIA BEDOYA MORENO	CC. No. 43.730.160
CLAUDIA PATRICIA CORZO RINCON	CC. No. 63.508.106
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	CC. No. 1.088.306.242
DANIEL FERNANDEZ FLORES	CC. No. 1.017.170.491
DANIEL RENDON ACEVEDO	CC. No. 1.017.219.299
DANIELA GARCIA VELEZ	CC. No. 1.088.023.743
DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ	CC. No. 1.018.458.983
DANIELA PELAEZ RODAS	CC. No. 1.090.399.073
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	CC. No. 1.032.360.506
DIANA MARGARITA BERROCAL LENGUA	CC. No. 1.067.874.002
DIANA MARTINEZ CUBIDES	CC. No. 52.264.480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	CC. No. 84.451.268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	CC. No. 1.152.459.617
DUBAN ANDRES JIMENEZ AGUIRRE	CC. No. 1.152.463.385
EDUARDO JOSE GIL GONZALES	CC. No. 16.613.428
ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	CC. No. 43.868.037
ELIZABETH MOJICA CHACON	CC. No. 52.794.871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	CC. No. 32.779.976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	CC. No. 41.469.144
FEDERICO URDINOLA LENIS	CC. No. 94.309.563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	CC. No. 79.324.734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	CC. No. 19.499.248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	CC. No. 12.971.749
FREDDY QUINTERO LOPEZ	CC. No. 79.581.111
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	CC. No. 1.140.838.086
GLORIA ESPERANZA MOJICA	CC. No. 40.023.522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT No. 830.515.294-0
GRETTEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	CC. No. 1.129.580.678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	CC. No. 13.011.276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	CC. No. 1.144.054.635
IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ	CC. No. 32.737.160
IVONNE ASTRID ORTIZ GIRALDO	CC. No. 32.243.789
JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ	CC. No. 1.010.185.094



PC011715883



PC067845194



08-07-22 PC011715883

BZGOM6796L

11-10-22 PC067845194

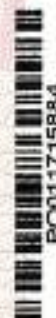
HIZNMJ030Q

JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAVA	CC. No. 80.879.894
JENNIFER GUILLEN FONSECA	CC. No. 1.018.427.249
JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS	CC. No. 1.053.801.795
JEYSON SMITH NORIEGA SUAREZ	CC. No. 1.030.548.705
JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA	CC. No. 1.015.401.438
JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ	CC. No. 1.110.479.285
JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA	CC. No. 1.144.127.106
JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES	CC. No. 79.443.280
JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	CC. No. 79.914.477
JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO	CC. No. 91.534.199
JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA	CC. No. 10.097.139
JUAN DAVID RIOS TAMAYO	CC. No. 1.130.676.848
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA	CC. No. 19.248.144
JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO	CC. No. 72.255.168
JUAN JOSE JARAMILLO SANCHEZ	CC. No. 1.035.877.468
JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO	CC. No. 1.036.623.986
JUAN SEBASTIAN RAMIREZ MORALES	CC. No. 1.036.929.558
JUANA LUCIA VARGAS ORTIZ	CC. No. 1.017.227.899
JULIANA BARONA MORALES	CC. No. 1.015.462.399
KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ	C.C No. 22.731.988
KEREN MARIA PAEZ HOYOS	CC. No. 1.045.675.899
LAURA DANIELA PARRA SAENZ	CC. No. 1.030.673.595
LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA	CC. No. 1.037.595.474
LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	CC. No. 53.905.165
LEONARDO ANDRES RODELO ORTIZ	CC. No. 1.018.440.292
LINA MARIA VARGAS LIBERATO	CC. No. 1.049.639.055
LIZ WENDY PEREZ MATOS	CC. No. 1.143.165.172
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	NIT. No. 830.118.372-4
LUIS CARLOS GEBAUER MORALES	CC. No. 77.191.671
LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN	CC. No. 79.157.258
LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA	CC. No. 10.020.115
LUIS GUILLERMO IGLESIAS BERMEO	CC. No. 1.082.930.759
LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO	CC. No. 94.540.769
LUISA FERNANDA CURREA FRANCO	CC. No. 1.072.709.498
LUZ DARY CUERVO DUARTE	CC. No. 52.966.520
LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO	CC. No. 52.647.144
LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE	CC. No. 51.768.337
LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES	CC. No. 1.094.890.026
MANUELA MOLINA VALENCIA	CC. No. 1.152.212.193
MARIA ALEJANDRA GIL CAMPOS	CC. No. 1.018.462.326
MARIA ANGELICA AGUIRRE APONTE	CC. No. 1.018.430.499
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	CC. No. 52.431.353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	CC. No. 57.463.554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	CC. No. 67.013.937



MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS
 MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO
 MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL
 MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA
 MAYCOL RAFAEL SANCHEZ VELEZ
 MELISSA LOZANO HINCAPIE
 MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL
 MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA
 NATALIA GOMEZ CASTAÑO
 NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA
 NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO
 NAYROBY DIAZ REINO
 NEFTALI VASQUEZ VARGAS
 NELSON RICARDO ARCOS MORENO
 ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO
 OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA
 PATRICIA CERON SANCHEZ
 PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS
 PAULINA TOUS GAVIRIA
 RAFAEL GARCIA MENDEZ
 RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES
 SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO
 SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA
 SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ
 SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA
 SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO
 SHULY ROXANA GOMEZ FANG
 TANIA ISABEL ZAPATA LORA
 TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS
 UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS
 VALENTINA SANCHEZ GONZALEZ
 VANESSA GIRALDO CIFUENTES
 VANESSA LICETH BELLO SALCEDO
 VANESSA PRINCE GARCIA MEJIA
 VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA
 VLADIMIR MONTOYA MORALES
 WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS
 WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ
 WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES
 WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA
 YEUDI VALLEJO SANCHEZ
 YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA
 YULIETH ARIAS ALVAREZ

CC. No. 42.011.709
 CC. No. 1.017.186.779
 CC. No. 34.546.611
 CC. No. 52.517.325
 CC. No. 1.143.150.933
 CC. No. 1.088.332.294
 CC. No. 75.104.922
 CC. No. 1.110.464.235
 CC. No. 1.053.768.706
 CC. No. 73.380.125
 CC. No. 88.212.852
 CC. No. 34.946.544
 CC. No. 12.106.814
 CC. No. 7.167.913
 CC. No. 12.919.935
 CC. No. 19.090.427
 CC. No. 34.545.617
 CC. No. 1.016.089.697
 CC. No. 42.137.888
 CC. No. 13.719.501
 CC. No. 45.441.500
 C.C.No. 46.386.722
 CC. No. 5.162.675
 CC. No. 92.642.437
 CC. No. 80.875.529
 CC. No. 1.088.023.149
 CC. No. 1.050.957.682
 CC. No. 1.152.694.649
 NIT No. 900.411.483-2
 CC. No. 17.970.755
 CC. No. 1.070.022.343
 CC. No. 1.088.271.844
 CC. No. 1.140.855.245
 CC. No. 40.945.070
 CC. No. 42.128.976
 CC. No. 1.128.276.094
 CC. No. 1.014.217.682
 CC. No. 1.026.293.434
 CC. No. 1.082.926.236
 CC. No. 16.783.965
 CC. No. 79.963.537
 CC. No. 22.539.744
 CC. No. 1.088.276.477



PC011715884



PC067845195



08-07-22 PC011715884

MSTRCFB2N9

11-10-22 PC067845195

N.JGMU081VL

NOTA DOS (2).- Con esta revocación, **SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO**, quien actúa en nombre y representación de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT. **800.144.331-3**, declara **CANCELADA** la escritura Publica número mil trescientos veintiséis (1326) otorgada el once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022) de la Notaría Dieciocho (18) del Circulo de Bogotá D.C., en cuanto respecta al poder conferido por la entidad que representa.-----

NOTA TRES (3).- : Teniendo en cuenta que la escritura antes mencionada se encuentra en las dependencias de la Notaría Dieciocho (18) del Circulo de Bogotá D.C., el (la) Notario (a) impondrá la respectiva nota en el protocolo correspondiente del contenido del presente instrumento público. -----

ACEPTACIÓN: Presente (a) **EL (LA) (LOS) COMPARECIENTE (S)**, de las condiciones civiles anteriormente anotadas, manifestó (aron):-----

- Que acepta (n) la presente Escritura de Revocatoria de Poder por estar en todo de acuerdo con todo lo deseado por la entidad que representa-----

-----**SEGUNDO ACTO**-----

-----**PODER ESPECIAL**-----

-----**COMPARECIÓ CON MINUTA ESCRITA**-----

SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.893.544 expedida en San Gil - Santander, quien en su calidad de Vicepresidente y por tanto Representante Legal obra en nombre y representación de **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT **800.144.331-3**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida por Escritura Pública número cinco mil trescientos siete (5307) de fecha veintidós (22) de octubre del año mil novecientos noventa y uno

Nº 3748

República de Colombia

15



(1991), otorgada en la Notaría Veintitrés (23) del Círculo Notarial de Bogotá, con autorización de funcionamiento conferida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución S.F.C. 3970 del treinta (30) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991) y domicilio principal en Bogotá D.C, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se anexa para su protocolización, y;

MANIFESTÓ

PRIMERO: Por medio de este instrumento, **CONFIERO PODER ESPECIAL**, a los siguientes Subgerentes Administrativos de servicio de las sedes Regionales de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, así como a los Abogados de planta y Externos de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, para representarla ante las Autoridades Judiciales y Administrativas, con la facultad general para actuar bajo los parámetros del artículo 74 y 77 del Código General del Proceso, en las audiencias de conciliación y de trámite de que tratan los artículos 77 y 80 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en las audiencias de conciliación de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso y demás normas concordantes conforme a la normatividad vigente, las audiencias de conciliación extrajudiciales, así como para absolver interrogatorio de parte, asistir a funcionarios, notificarse de resoluciones, actos administrativos, demandas judiciales y providencias judiciales, exhibir documentos, confesar y conciliar en los procesos que se adelanten en contra de **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, por sus funcionarios, ex funcionarios, afiliados a los Fondos de Pensiones Voluntarias, Obligatorias y Cesantías, así como por las personas que ostenten la calidad de beneficiarios de éstos, empleadores, o en todos aquellos en los que la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A** sea parte.

TERCERO: Otorgar poder amplio y suficiente a:

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública, verificación y levantamiento del acta notarial



PC011715885

PC067845196



PC011715885

11-10-22 PC067845196

PSEJF8XAO

ADOLFO TOUS SALGADO	CC No.	8.285.008
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA	CC No.	39.777.477
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO	CC No.	53.077.586
ALEJANDRO ARGOTI NARANJO	CC No.	1.018.447.580
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ	CC No.	79.985.203
AMALIA MARIA TATIS ROMERO	CC No.	52.324.621
ANA MARIA ROMERO LAGOS	CC No.	1.019.119.578
ANA MARIA VALENCIA BOTERO	CC No.	42.162.378
ANA XIMENA TAMAYO	CC No.	36.286.470
ANDERSON ALIRIO ARDILA MEDINA	CC No.	1.099.210.744
ANDREA AYALA GOMEZ	CC No.	1.140.887.859
ANDREA DEL TORO BOCANEGRA	CC No.	52.253.673
ANDREA PATRICIA ROLONG AVELLA	CC No.	1.045.685.857
ANDRES FELIPE ANGARITA ARCINIEGAS	CC No.	1.140.857.122
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA	CC No.	1.069.582.580
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA	CC No.	1.053.844.786
ANDRES GONZALES HENAO	CC No.	10.004.318
ANDRES LALINDE CERON	CC No.	1.037.641.903
ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	CC No.	84.451.973
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	CC No.	1.098.814.116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	CC No.	34.325.896
BEATRIZ LALINDE GOMEZ	CC No.	32.305.840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	CC No.	52.033.898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	CC No.	41.421.981
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	CC No.	1.018.467.943
CARLA SANTAFE FIGUEREDO	CC No.	1.130.608.527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	CC No.	91.475.103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	CC No.	79.955.080
CARLOS DANIEL RAMIREZ GOMEZ	CC No.	1.049.632.112
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	CC No.	8.752.361
CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	CC No.	79.693.893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT No.	901.128.523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	CC No.	37.726.059
CATALINA CORTES VIÑA	CC No.	1.010.224.930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	CC No.	51.960.087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	CC No.	79.795.447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	CC No.	43.511.802
CLAUDIA LUCIA BEDOYA MORENO	CC No.	43.730.160
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	CC No.	1.088.306.242
DANIEL FERNANDEZ FLORES	CC No.	1.017.170.491
DANIEL RENDON ACEVEDO	CC No.	1.017.219.299
DANIELA GARCIA VELEZ	CC No.	1.088.023.743
DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ	CC No.	1.018.458.983
DANIELA PELAEZ RODAS	CC No.	1.090.399.073



Nº 3748 República de Colombia

17



DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	CC No.	1.032.360.506
DIANA MARGARITA BERROCAL LENGUA	CC No.	1.067.874.002
DIANA MARTINEZ CUBIDES	CC No.	52.264.480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	CC No.	84.451.268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	CC No.	1.152.459.617
DUBAN ANDRES JIMENEZ AGUIRRE	CC No.	1.152.463.385
EDUARDO JOSE GIL GONZALES	CC No.	16.613.428
ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	CC No.	43.868.037
ELIZABETH MOJICA CHACON	CC No.	52.794.871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	CC No.	32.779.976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	CC No.	41.469.144
FEDERICO URDINOLA LENIS	CC No.	94.309.563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	CC No.	79.324.734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	CC No.	19.499.248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	CC No.	12.971.749
FREDDY QUINTERO LOPEZ	CC No.	79.581.111
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	CC No.	1.140.838.086
GINNA TATIANA DÍAZ MAHECHA	CC No.	1.030.532.562
GLORIA ESPERANZA MOJICA	CC No.	40.023.522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT No.	830.515.294-0
GRETTEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	CC No.	1.129.580.678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	CC No.	13.011.276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	CC No.	1.144.054.635
ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION	CC No.	79.889.501
IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ	CC No.	32.737.160
JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ	CC No.	1.010.185.094
JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAYA	CC No.	80.879.894
JENNIFER GUILLEN FONSECA	CC No.	1.018.427.249
JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS	CC No.	1.053.801.795
JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA	CC No.	1.015.401.438
JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ	CC No.	1.110.479.285
JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA	CC No.	1.144.127.106
JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES	CC No.	79.443.280
JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	CC No.	79.914.477
JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO	CC No.	91.534.199
JOSE ALFREDO ACOSTA ACEVEDO	CC No.	1.140.880.274
JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA	CC No.	10.097.139
JUAN DAVID RIOS TAMAYO	CC No.	1.130.676.848
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA	CC No.	19.248.144
JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO	CC No.	72.255.168
JUAN JOSE JARAMILLO SANCHEZ	CC No.	1.035.877.468
JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO	CC No.	1.036.623.986
JUAN SEBASTIAN RAMIREZ MORALES	CC No.	1.036.929.558
JUANA LUCIA VARGAS ORTIZ	CC No.	1.017.227.899
KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ	CC No.	22.731.988
KEREN MARIA PAEZ HOYOS	CC No.	1.045.675.899



PO011715886



PC067845197



08-07-22 PO011715886

NOTARIA PUBLICA

DELEGADO

11-10-22 PC067845197

2J0T81E1FW

LAURA DANIELA PARRA SAENZ	CC No.	1.030.673.595
LAURA DANIELA PEÑA GUEVARA	CC No.	1.094.967.852
LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA	CC No.	1.037.595.474
LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	CC No.	53.905.165
LAURA XIMENA FLOREZ GONZALEZ	CC No.	1.098.797.771
LEONARDO ANDRES RODELO ORTIZ	CC No.	1.018.440.292
LINA MARIA VARGAS LIBERATO	CC No.	1.049.639.055
LIZ WENDY PEREZ MATOS	CC No.	1.143.165.172
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	NIT No.	830.118.372-4
LUIS CARLOS GEBAUER MORALES	CC No.	77.191.671
LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN	CC No.	79.157.258
LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA	CC No.	10.020.115
LUIS GUILLERMO IGLESIAS BERMEO	CC No.	1.082.930.759
LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO	CC No.	94.540.769
LUISA FERNANDA CURREA FRANCO	CC No.	1.072.709.498
LUZ DARY CUERVO DUARTE	CC No.	52.966.520
LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO	CC No.	52.647.144
LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE	CC No.	51.768.337
LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES	CC No.	1.094.890.026
MANUELA MOLINA VALENCIA	CC No.	1.152.212.193
MARIA ALEJANDRA GIL CAMPOS	CC No.	1.018.462.326
MARIA ALEJANDRA PLATA ACEVEDO	CC No.	1.098.778.782
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	CC No.	52.431.353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	CC No.	57.463.554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	CC No.	67.013.937
MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD	CC No.	40.043.858
MARIA XIMENA MEDINA RAMIREZ	CC No.	37.393.314
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	CC No.	42.011.709
MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	CC No.	1.017.186.779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	CC No.	34.546.611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	CC No.	52.517.325
MAYCOL RAFAEL SANCHEZ VELEZ	CC No.	1.143.150.933
MELISSA LOZANO HINCAPIE	CC No.	1.088.332.294
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	CC No.	75.104.922
MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	CC No.	1.110.464.235
MIRIAM TATIANA PEÑA MOLANO	CC No.	1.026.274.345
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	CC No.	1.053.768.706
NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA	CC No.	73.380.125
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	CC No.	88.212.852
NAYROBY DIAZ REINO	CC No.	34.946.544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	CC No.	12.106.814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	CC No.	7.167.913
ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	CC No.	12.919.935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	CC No.	19.090.427

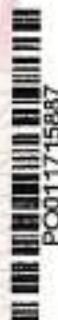


PATRICIA CERON SANCHEZ
 PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS
 PAULINA TOUS GAVIRIA
 PROCEDER S.A.S
 RAFAEL GARCIA MENDEZ
 RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES
 SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO
 SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA
 SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ
 SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA
 SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO
 SHIRLY MARCELA VANEGAS TREJOS
 SHULY ROXANA GOMEZ FANG
 TANIA ISABEL ZAPATA LORA
 TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS
 UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS
 VALENTINA SANCHEZ GONZALEZ
 VANESSA GIRALDO CIFUENTES
 VANESSA LICETH BELLO SALCEDO
 VANESSA PRINCE GARCIA MEJIA
 VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA
 VLADIMIR MONTOYA MORALES
 WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS
 WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ
 WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES
 WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA
 YEUDI VALLEJO SANCHEZ
 YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA
 YULIETH ARIAS ALVAREZ

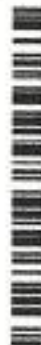
CC No. 34.545.617
 CC No. 1.016.089.697
 CC No. 42.137.888
 NIT No. 901.289.080-9
 CC No. 13.719.501
 CC No. 45.441.500
 CC No. 46.386.722
 CC No. 5.162.675
 CC No. 92.642.437
 CC No. 80.875.529
 CC No. 1.088.023.149
 CC No. 1.126.598.781
 CC No. 1.050.957.682
 CC No. 1.152.694.649
 NIT No. 900.411.483-2
 CC No. 17.970.755
 CC No. 1.070.022.343
 CC No. 1.088.271.844
 CC No. 1.140.855.245
 CC No. 40.945.070
 CC No. 42.128.976
 CC No. 1.128.276.094
 CC No. 1.014.217.682
 CC No. 1.026.293.434
 CC No. 1.082.926.236
 CC No. 16.783.965
 CC No. 79.963.537
 CC No. 22.539.744
 CC No. 1.088.276.477

Los nombrados podrán ejecutar los siguientes actos:-----

1. Representar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** en toda clase de actuaciones y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Nación o ante cualquier autoridad del orden Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito de Bogotá para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la Administración.-----



PC011715887



PC067845198



08-07-22 PC011715887

11-10-22 PC067845198

27M0QIF8P5

2. Notificarse de todo tipo de providencia Judicial o Administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas, absolver interrogatorio de parte, contestar demandas, renunciar a términos en los que haga parte la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A**

3. Asistir en nombre y representación de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** a las audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro de los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que haga parte la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A** en todo el país, con la facultad para conciliar o no de conformidad con los intereses de la Sociedad que Representa. Esta facultad también se extiende a actuaciones administrativas en el Ministerio del Trabajo y demás entidades de carácter administrativo, Centros de Conciliación, Cámaras de Comercio y Ministerio Público.

4. Actuar como Representante Legal de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A** en las audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y saneamiento de Litigio (Ley 712 de 2001, modificada por la Ley 1149 de 2007) para conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas la actuaciones necesarias o indispensables para el buen éxito del Mandato conferido y en fin todas las facultades de Ley.

5. En general los apoderados quedan ampliamente facultados para actuar y para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las decisiones judiciales o emanadas de los Funcionarios administrativos del poder Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades Descentralizadas del Mismo Orden.

6. Igualmente quedan facultados expresamente para recibir, contestar demandas, desistir, conciliar, confesar, sustituir y transigir.

Nº 3748 República de Colombia

21



PARÁGRAFO: Finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos 2156 y siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2189 del Código Civil que dice: "DE LA TERMINACIÓN DEL MANDATO". El mandato termina:-----

1. Por el desempeño del negocio para que fue constituido;-----
2. Por la expiración del termino o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato.-----
3. Por la revocación del mandante;-----
4. Por la renuncia del mandatario.-----

-----HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA-----

ACEPTACIÓN: Presente SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO, quien en su calidad de Vicepresidente y por tanto Representante Legal obra en nombre y representación de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., identificada con NIT 800.144.331-3, de las condiciones civiles y personales ya indicadas manifestó:-----

-*Que suscribe el presente documento público y que lo acepta en todas sus partes por hallarse ajustado en todo a la realidad.-----

EL (LA) (LOS) COMPARECIENTE (S) HACE (N) CONSTAR QUE: -----

1. Ha (n) verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, número correcto de sus documentos de identificación, y aprueba (n) este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. -----
2. Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y el (la) (los) otorgante (s) la aprueba (n) totalmente, sin reserva alguna, en consecuencia, asume (n) la responsabilidad por cualquier inexactitud. -----
3. El Notario no puede dar fe sobre la voluntad real del (la) (los) compareciente (s) y beneficiario (s), salvo lo expresado en este instrumento, que fue aprobado sin reserva alguna por el (la) (los) compareciente (s) y beneficiario (s) en la forma como quedó redactado. -----

PC011715888

PC067845199

08-07-22 PC011715888

11-10-22 PC067845199

CJANIFOG4Z

4. Conoce (n) la Ley y sabe (n) que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones del (la) (los) otorgante (s), ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento. -----

5. Será (n) responsable (s) civil, penal y fiscalmente, en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales. -----

6. Sólo solicitará (n) correcciones, aclaraciones, o modificaciones al texto de la presente escritura en la forma y en los casos previstos por la Ley. -----

Política de Privacidad: El (la) (los) otorgante (s) expresamente declara (n) que NO autoriza (n) la divulgación, ni comercialización, ni publicación por ningún medio, sin excepción alguna, de su imagen personal y/o fotografía tomada en la Notaría Dieciocho (18) del círculo Bogotá, ni su huella digital, ni de sus documentos de identidad, salvo con lo relacionado con el presente instrumento y demás actos notariales que personalmente o por medio de apoderado solicite (n) por escrito, conforme a la Ley. -----

-----ADVERTENCIAS NOTARIALES:-----

1. Cada vez que se pretenda hacer uso del presente poder y/o autorización, se deberá presentar a la autoridad o entidad ante quien se quiera hacer valer, una certificación original, expedida al día por la Notaría Dieciocho del Círculo de Bogotá, donde conste que el poder y/o autorización esta vigente, pues no aparece anotación alguna que indique que fue revocado. -----

2. El suscrito Notario Dieciocho (18) encargado, del Círculo de Bogotá, advirtió al (los) compareciente (s), sobre la importancia y conveniencia que su (s) apoderado (s) comparezca (n) y firme (n) la presente escritura pública, para que quede enterado de la existencia del poder, y así el poderdante siempre este legal y debidamente representado. Hecha la advertencia y recomendación el (los) compareciente (s),

INSISTE (N) en otorgar la presente escritura Pública. -----

3. EL NOTARIO ADVIRTIÓ AL (LOS) OTORGANTE (S), DE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE (N) DE LEER DILIGENTE Y CUIDADOSAMENTE LA TOTALIDAD DEL TEXTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, PARA VERIFICAR LA



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3491220804121124

Generado el 04 de noviembre de 2022 a las 08:53:13

Nº 3748

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016,

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

NIT: 800144331-3

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Anónima De Nacionalidad Colombiana. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 5307 del 22 de octubre de 1991 de la Notaría 23 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).

Resolución S.F.C. No 0628 del 03 de abril de 2013 la Superintendencia Financiera de Colombia, no objeta la adquisición de BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Resolución S.F.C. No 2134 del 22 de noviembre de 2013 La Superintendencia Financiera de Colombia no objeta la fusión por absorción de HORIZONTE Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía PORVENIR S.A., protocolizada mediante Escritura Pública 2250 del 26 de diciembre de 2013 Notaría 65 de Bogotá, produciéndose en consecuencia la disolución sin liquidación de la entidad absorbida.

Resolución S.F.C. No 0750 del 22 de junio de 2022 autoriza al Banco de Occidente (Panamá) S.A., sociedad con domicilio en la República de Panamá, para realizar actos de promoción y publicidad de los productos y servicios relacionados en el considerando quinto de esta Resolución, y al Occidental Bank (Barbados) Ltd., sociedad con domicilio en Barbados, para realizar actos de promoción y publicidad de los productos y servicios relacionados en el considerando sexto de esta Resolución, a través de la AFP Porvenir S.A.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3970 del 30 de octubre de 1991

Resolución S.B. 3970 del 30 de octubre de 1991 Autorizó a la citada sociedad para desarrollar las actividades comprendidas dentro de su objeto social, esto es, la administración de Fondos de Pensiones y de Cesantía, acto a partir del cual administra el FONDO DE CESANTIAS.

Oficio 92642984-9 del 01 de julio de 1993 Autoriza a la sociedad denominada PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., para administrar fondos de pensiones voluntarias

Resolución S.B. 535 del 30 de marzo de 1994 Autoriza a la sociedad denominada PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., para administrar fondos de pensiones del Régimen de ahorro Individual con Solidaridad en lo términos en que dicha autorización fue solicitada y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración y representación de la sociedad estará a cargo del Presidente

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 4



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



PC067845201



11-10-22 PC067845201

VELZNDG72

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3491220804121124

Generado el 04 de noviembre de 2022 a las 08:53:13

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

y de los Vicepresidentes, que para el efecto designe la Junta Directiva. Los representantes legales serán nombrados por la Junta Directiva de manera indefinida, pudiendo ser removidos en cualquier tiempo. Los representantes podrán ser socios o extraños. **FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL** Son funciones de los Representantes Legales las que, dentro de los límites que le imponen el objeto social y los estatutos de la entidad, las que les corresponden de acuerdo con la naturaleza de su cargo y en particular las siguientes: a) Usar la denominación social y ejercer la representación legal y además representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, ante cualquier autoridad o persona natural o jurídica, con facultades para novar, transigir, comprometer y desistirse y para comparecer en juicios en que se dispute la propiedad de bienes o derechos sociales; b) Ejecutar o celebrar toda clase de actos y contratos relativos al objeto social, en que tenga interés la compañía; c) Convocar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias, y presentar en las primeras un informe sobre el estado de los negocios sociales; d) Designar los empleados cuyo nombramiento no esté asignado a otro órgano social, removerlos y firmar los respectivos contratos de trabajo; e) Abrir cuentas bancarias a nombre de la Sociedad para mantener en ella los dineros sociales, girar contra ellas y negociar toda clase de títulos valores; f) Consultar mandatarios que representen a la Sociedad en juicio o fuera de él y delegarles las funciones o atribuciones que considere necesarias, en cuanto sean delegables; g) Suscribir las escrituras de reformas estatutarias; h) Suscribir los contratos que sean necesarios para la administración de los patrimonios autónomos que constituyan las entidades territoriales y sus descentralizadas, con independencia de su cuantía; i) Resolver, en primera instancia, sobre la procedencia de auditorías especiales solicitadas por los accionistas, en los términos definidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad; j) Presentar a la Junta Directiva para su aprobación y velar por su permanente cumplimiento, las medidas específicas de Buen Gobierno de la Sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes en ella invierten o en cualquier otro valor que llegare a emitir y la adecuada administración de sus asuntos y k) Ejercer todas aquellas funciones que le sean asignadas por la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva o la Ley y que no se encuentren aquí relacionadas. (Escritura Pública 1674 del 30 de septiembre de 2009 Notario 65 de Bogotá D.C.). Para efectos de la Representación Legal de la Sociedad, tendrán la calidad de Representantes Legales judiciales los abogados que con tal fin designe la Junta Directiva, quienes representarán a la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado (Escritura Pública 1708 del 11 de octubre de 2010 Notario 65 de Bogotá).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Miguel Largacha Martínez Fecha de inicio del cargo: 06/10/2008	CC - 79156394	Presidente
Andrés Vázquez Restrepo Fecha de inicio del cargo: 08/01/2004	CC - 71695255	Vicepresidente
Erik Andrés Mónica Rasmussen Fecha de inicio del cargo: 15/11/2018	CC - 79781438	Vicepresidente
Roberto Díaz Trujillo Fecha de inicio del cargo: 06/02/2014	CC - 79292143	Vicepresidente
Alejandro Gómez Villegas Fecha de inicio del cargo: 27/10/2011	CC - 79941020	Vicepresidente
Donso Ángel Lozano Fecha de inicio del cargo: 28/10/2010	CC - 16799132	Vicepresidente
Silvia Lucía Reyes Acevedo Fecha de inicio del cargo: 21/05/2020	CC - 37893544	Vicepresidente
Juan Pablo Salazar Aristizabal Fecha de inicio del cargo: 07/10/2004	CC - 71731636	Vicepresidente
Aiba Janneth Moreno Baquero Fecha de inicio del cargo: 13/06/2017	CC - 53077586	Representante Legal Judicial





SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3491220804121124

Generado el 04 de noviembre de 2022 a las 08:53:13

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

3748

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
María Angélica Aguirre Aponte Fecha de inicio del cargo: 27/04/2018	CC - 1018430499	Representante Legal Judicial
Luisa Fernanda Correa Franco Fecha de inicio del cargo: 05/10/2022	CC - 1072709498	Representante Legal Judicial
Daniela Guerrero Ordoñez Fecha de inicio del cargo: 09/08/2019	CC - 1018458983	Representante Legal Judicial
Juliana Barona Morales Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 1015462399	Representante Legal Judicial
Daniel Rondón Acevedo Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 1017219299	Representante Legal Judicial
Miguel José Gregory Villegas Castañeda Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 1110464235	Representante Legal Judicial
Carla Santafé Figueredo Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 1130608527	Representante Legal Judicial
Ivonne Astrid Ortiz Giraldo Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 32243789	Representante Legal Judicial
Erika Isabel Arrieta Ruiz Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 32779976	Representante Legal Judicial
Fredy Quintero López Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 79581111	Representante Legal Judicial
Ana María Romero Lagos Fecha de inicio del cargo: 23/09/2021	CC - 1019119578	Representante Legal Judicial
Carlos Manuel Ramírez Acosta Fecha de inicio del cargo: 23/09/2021	CC - 79693893	Representante Legal Judicial
Oscar Alirio Castillo Rubiano Fecha de inicio del cargo: 23/09/2022	CC - 7336003	Representante Legal Judicial
Diana Marcela Baulista Ruiz Fecha de inicio del cargo: 05/10/2022	CC - 1032360605	Representante Legal Judicial
Andrés Felipe Fernández Cardona Fecha de inicio del cargo: 05/10/2022	CC - 1069582580	Representante Legal Judicial
Jorge Eduardo Montañez Cortés Fecha de inicio del cargo: 19/02/2016	CC - 79443280	Representante Legal Judicial
Carlos Andrés Sánchez Medina Fecha de inicio del cargo: 07/01/2016	CC - 94501244	Representante Legal Judicial
Genny Carolina Ramírez Zamora Fecha de inicio del cargo: 17/03/2015	CC - 52829319	Representante Legal Judicial
Diana Martínez Cubides Fecha de inicio del cargo: 29/01/2014	CC - 52264480	Representante Legal Judicial
Elizabeth Mira Hernandez Fecha de inicio del cargo: 29/01/2014	CC - 43868037	Representante Legal Judicial
Nancy Adriana Rodríguez Casas Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011	CC - 51970146	Representante Legal Judicial
Ivonne Amira Torrente Schultz Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011	CC - 32737160	Representante Legal Judicial

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 3 de 4



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



PC067845202



11-10-22 PC067845202

APWJTR90E

Tratado de Comercio y de Inversión

República de Colombia

Depositar para uso exclusivo de registro de documentos públicos, certificados y documentos del archivo judicial

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3491220804121124

Generado el 04 de noviembre de 2022 a las 08:53:13

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE

Johana Andrea Lesmes Mendieta
Fecha de inicio del cargo: 09/08/2019

IDENTIFICACIÓN

CC - 1015401438

CARGO

Representante Legal Judicial



JOSUÉ OSWALDO BERNAL CAVIEDES
SECRETARIO GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



N° 3748

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

-----TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO (3748)-----
DE FECHA: VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS (2022)-----

OTORGADA EN LA NOTARÍA DIECIOCHO (18) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
D.C. -----

Viene de la página veintidós (22)-----

EXACTITUD DE TODOS LOS DATOS EN ELLA CONSIGNADOS, CON EL FIN DE
ACLARAR, MODIFICAR O CORREGIR LO QUE CONSIDERE (N) PERTINENTE
ANTES DE FIRMARLA, PONIENDO DE PRESENTE QUE LA FIRMA DE LA
ESCRITURA DEMUESTRA SU APROBACIÓN TOTAL DEL TEXTO. EN
CONSECUENCIA LA NOTARÍA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR
ERRORES O INEXACTITUDES ESTABLECIDOS CON POSTERIORIDAD A LA
FIRMA DEL (LOS) OTORGANTE (S) Y LA AUTORIZACIÓN DEL NOTARIO. DE SER
NECESARIO CORREGIR, ACLARAR O MODIFICAR LA PRESENTE ESCRITURA
PÚBLICA, SE DEBERÁ OTORGAR UNA NUEVA, LA CUAL TENDRÁ QUE SER
SUSCRITA POR TODOS LOS QUE INTERVINIERON EN LA INICIAL, SIENDO DE
CARGO DE LOS OTORGANTES LOS COSTOS Y GASTOS QUE ESTO
DEMANDE.-----

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento público por
el (la) (los) compareciente (s) y advertido (a) (s) de su formalidad, lo aprobó (aron)
en todas sus partes y firmó (aron) junto con el suscrito notario quien da fe y lo
autoriza.-----

La presente escritura se elaboró en las hojas de papel notarial números:
PO011715878 - PO011715879 - PO011715880 - PO011715881 - PO011715882 -
PO011715883 - PO011715884 - PO011715885 - PO011715886 - PO011715887 -
PO011715888 - PO011715889.

PO011715889

PC067845200

08-07-22 PO011715889

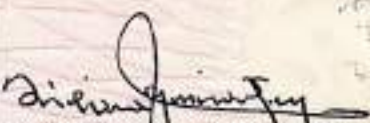
11-10-22 PC067845200

960YLMW16Z

Valor de los derechos Notariales \$ 132.400
Superintendencia de Notariado y Registro \$ 7.130
Fondo Cuenta Nacional del Notariado \$ 7.150
Retención en la fuente \$0
Iva \$ 47.424

SE FIRMA

PODERDANTE



SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO

ÍNDICE DERECHO


Quien en su calidad de Vicepresidente y por ende Representante Legal obra en nombre y representación de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3. C.C. No.37.893.544 expedida en San Gil - Santander

Dirección

Tel.

e-mail:

Firma tomada fuera del Despacho Artículo 12 Decreto 2148 de 1983, hoy Artículo 2.2.6.1.2.1.5 Decreto 1069 de 2015.



JOSÉ MIGUEL ROBAYO PIÑEROS
NOTARIO 18 DE BOGOTÁ D.C.





República de Colombia

Departamento para uso exclusivo de todas las esferas públicas, administrativas y financieras del orden nacional

NOTARÍA DIECIOCHO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

Es Primera copia tomada de su original.

Escritura pública No. 3748 de DIC 22 de 2022

Que se pide y autoriza en Quince (15) días hábiles

Con destino a EL INTERESADO

Fue expedida en Bogotá, D.C. el 26 DIC 2022

[Handwritten signature]



COPIA



PC067845217

ENSR80221F

11-10-22 PC067845217

TRAMITE DE REGISTRO

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.
Sigla: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.
Nit: 830515294 0 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01447565
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2005
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 84A #10-33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: pagos@godoycordoba.com
Teléfono comercial 1: 3174628
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 84A #10-33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación: notificaciones@godoycordoba.com
Teléfono para notificación 1: 3174628
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000138 del 25 de enero de 2005 de Notaría 61 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2005, con el No. 00974508 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 013 de la Junta de Socios del 28 de diciembre de 2009, inscrita el 27 de enero de 2010 bajo el número 01356856 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S sin embargo para su identificación podrá utilizar simplemente la contracción GODOY CORDOBA S A S

Por Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 01356856 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA a GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2018, con el No. 02297434 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S a "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S.".

Por Acta No. 37 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de noviembre de 2018, inscrita el 16 de Mayo de 2019 bajo el número 02466433 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad FRANCISCO BURITICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Acta No. 58 del 19 de julio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 2022, con el No. 02862790 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S." a GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. y adicionó la(s) sigla(s) GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S..

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá, por sí misma o por intermedio o en asocio con terceros, desarrollar cualquier actividad lícita. De manera particular, pero sin limitarse a ello, la Sociedad tiene por objeto social la prestación de servicios de asesoría jurídica en las distintas disciplinas del derecho, así como la planeación y proyección de negocios a nivel nacional e internacional. Así mismo, la Sociedad puede dedicarse a la prestación de servicios integrales en prevención de riesgos laborales, promoción y prevención de la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

salud, asesorías y capacitaciones en las siguientes áreas con profesionales competentes y licencia en salud y seguridad en el trabajo vigente: legal, medicina preventiva y del trabajo, medicina del deporte, nutrición deportiva y ocupacional, fisioterapia, psicología, auditoría, ingeniería, entre otras. Así mismo, podrá prestar servicios integrales para todas las actividades de asesoría en diseño, implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión en Seguridad y salud en el trabajo. También podrá llevar a cabo las demás actividades y servicios que de acuerdo con la legislación vigente en riesgos laborales, se deban diseñar e implementar a nivel empresarial en organizaciones de cualquier sector empresarial ya sea del sector público o privado, entre otras. La Sociedad también podrá poseer y administrar establecimientos de comercio, así como celebrar cualquier tipo de operaciones sobre los mismos, y en general, estará facultada para realizar actividades de importación y exportación de bienes y servicios.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$10.000.000.000,00
No. de acciones : 10.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$154.929.000,00
No. de acciones : 154.929,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$154.929.000,00
No. de acciones : 154.929,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un gerente. El gerente ejercerá el cargo hasta

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cuando sea removido o reemplazado por la Junta Directiva de acuerdo con lo señalado en los estatutos. El gerente será el representante legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá tres (3) suplentes elegidos por la Junta Directiva, quienes reemplazarán al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la Junta Directiva nombre al sucesor o reemplazo del gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente tendrá en desarrollo del objeto social las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General De accionistas y de la Junta Directiva; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva; E) Presentar oportunamente a consideración de la Junta Directiva el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; F) Presentar a la Junta Directiva en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará conjuntamente por los administradores a la Asamblea General de Accionistas; G) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; H) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; I) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; J) Cuidar de la recaudación e inversión

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de los fondos de la sociedad; K) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Esta función se cumplirá dentro de los parámetros de la estructura de la sociedad y teniendo en cuenta las funciones y procedimientos asignados a otros funcionarios de la sociedad, como cabezas de área; L) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y a las extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando le corresponda de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y en la ley; M) Las demás que le asignen la ley y estos estatutos. Parágrafo.- No obstante lo anterior, en cualquier caso y para desarrollar o ejercer cualquiera de sus funciones, el gerente requerirá la previa autorización de la Junta Directiva para celebrar cualquier acto o contrato a nombre de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato o de las obligaciones a cargo de la sociedad de manera individual o a través de una serie de operaciones relacionadas exceda el equivalente en pesos colombianos a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1000 SMMLV) a la fecha de celebración del acto o contrato, o de la última operación en el caso de operaciones relacionadas. Parágrafo. - Los suplentes del gerente tendrán las mismas facultades otorgadas al gerente (incluida la facultad de representación legal de la sociedad) y no existirá para su actuación, un orden de prioridad entre los suplentes del gerente. Cuando en estos estatutos se haga referencia al gerente, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, a los suplentes del gerente. Los suplentes no requerirán acreditar, para su actuación, la configuración de una falta temporal o absoluta del gerente. Bastará con su actuación para que se presuma la falta temporal o absoluta del gerente.

Por Documento Privado No. Sin Núm del 08 de marzo de 2019, registrado el 9 de Marzo de 2019 bajo el No. 02433332 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fueron inscritos como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Guerrero Orbe Diego Alexander	C.C. 1.018.426.052	222.814
Barros Cardenas Jhon Alex	C.C. 1.043.015.010	287.301

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 5 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

julio de 2019, registrado el 17 de Julio de 2019 bajo el número 02487223 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Rey Londoño Oscar Alberto	C.C. 1.140.866.487	300.858

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 22 de octubre de 2019, registrado el 23 de Octubre de 2019 bajo el número 02517724 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Ana Maria Rodriguez Marmolejo	C.C. 1.151.946.356	253.718
Gabriela Restrepo Caicedo	C.C. 1.144.193.395	307.837
John Jairo Rodriguez Bernal	C.C. 1.070.967.487	325.589
Omar Alonso Camargo Mercado	C.C. 1.043.010.907	285.256
Jorge Andres Sanchez Rodriguez	C.C. 1.013.641.075	278.768

Por Documento Privado Sin Núm del Representante Legal del 27 de diciembre de 2019, registrado el 27 de Diciembre de 2019 bajo el número 02537409 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Chavez Alvarado Andres Felipe	C.C. 1.075.655.441	232007

Por Documento Privado No. Sin Núm del 28 de febrero de 2020, registrado el 2 de Marzo de 2020 bajo el número 02559054 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Bernal García Federico	C.C. 80.873.156	175488
Lara Marquez Amaranta Andrea	C.C. 1.032.683.377	283576
Benrey Zorro Juliana	C.C. 1.072.642.954	190673
Duarte Villalobos Irene	C.C. 1.020.744.847	273878
Carrasco Boshell Brigitte Natalia	C.C. 1.121.914.728	288455
Cano Gonzalez Claudia Andrea	C.C. 1.143.869.669	338180

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Documento Privado Sin núm del Representante Legal, del 29 de julio de 2020, registrado el 30 de julio de 2020 bajo el número 02602260 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Viviel Gonzalez Jorge Enrique	C.C. 1.014.225.303	277.946

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 13 de agosto de 2020, registrado el 13 de agosto de 2020 bajo el número 02606331 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P:
Romero Méndez Andrés Felipe	C.C.1.019.080.336	286.638
Duque Duque Juan Antonio	C.C.80.085.295	138.464

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 03 de septiembre de 2020, registrado el 4 de septiembre de 2020 bajo el número 02612596 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P.
Visbal Restrepo Juliana	C.C. 1.020.760.990	290190
Puentes Cespedes Ana Carolina	C.C. 1.010.229.148	330105

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 25 de septiembre de 2020, registrado el 25 de septiembre de 2020 bajo el número 02619669 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Palacio Varona Daniela	C.C. 1.019.132.452	353.307
Bejarano Rengifo Diana Marcela	C.C. 1.144.087.101	315.617

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 11 de febrero de 2021, registrado 4 de Marzo de 2021 bajo el número

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

02669512 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Carlos Augusto Suarez Pinzón	C.C. 1.032.470.700	347.852
Miguel Alejandro Lombana Cuevas	C.C. 1.022.398.901	308.077
Deivid Alexander Rodríguez Ramirez	C.C. 1.233.690.042	LT25399
Juanita Alexandra Silva Tellez	C.C. 1.023.967.067	334.300
Natalia Alzate Garcia	C.C. 1.095.786.682	173.261
Sara Heshusius Sancho	C.C. 1.144.068.042	346.483
Youssef Norredine Amara Pachon	C.C. 1.019.069.334	311.472

Por Documento Privado Sin Núm. del 12 de mayo de 2021 del Representante Legal, registrado 27 de Mayo de 2021, bajo el número 02709540 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Melani Vanessa Estrada Ruíz	C.C. 1.151.965.730	353898
Nicolás Eduardo Ramos Ramos	C.C. 1.018.469.231	365094
Daniel Andres Paz Erazo	C.C. 1.085.291.127	329936
Laura María Valderrama Medrano	C.C. 1.010.220.471	307507

Por Documento Privado sin num. del 18 de agosto de 2021, inscrito el 23 de Agosto de 2021 con el No. 02736169 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre	Identificación	Tarjeta Profesional
Miguel Angel Salazar Cortes	C.C. No. 1.019.128.867	347296
Shiara Faride Trujillo Canchon	C.C. No. 1.022.358.557	231596
Michelle Valeria Mina Marulanda	C.C. No. 1.234.195.459	359423

Por Documento Privado del 16 de diciembre de 2021, inscrito el 18 de Diciembre de 2021 con el No. 02773873 del libro IX, de conformidad

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre Identificación Tarjeta Profesional

Angélica María Cure Muñoz	C.C. No. 1.140.887.921	369821
Paula Huertas Borda	C.C. No. 1.020.833.703	369744
Juan Camilo Lamprea Gil	C.C. No. 1.014.242.610	367728
María Alejandra Ramírez Olea	C.C. No. 1.152.225.557	359508

Por Documento Privado del 01 de julio de 2022, inscrito el 8 de Julio de 2022, con el No. 02856173 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andres Felipe Duque Velásquez	C.C No. 1.053.772.677	221517
Daniel Felipe Ramirez Sanchez	C.C No. 1.070.018.966	373906
Deivid Alexander Rodriguez Ramirez	C.C No. 1.233.690.042	378503
Jorge Andres Ballesteros Hernandez	C.C No. 1.026.266.184	236678
Juan Pablo Briceño Santamaria	C.C No. 1.020.825.640	377383
Manuel Rodrigo Jaimes Beltran	C.C No. 1.071.169.446	30272
Nedy Johana Dallos Pico	C.C No. 1.019.135.990	373640

Por Documento Privado del 22 de julio de 2022 , inscrito el 27 de Julio de 2022 con el No. 02862244 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Diana Camila Gaitan Hemelberg	C.C No. 1.019.123.311	334532
David Ricardo Rodriguez Preciado	C.C.No. 1.057.581.246	251947

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2022 , inscrito el 26 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Agosto de 2022 con el No. 02872678 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Octavio Andrés Castillo Ocampo	C.C No. 1.017.267.151	380131
Stephany Obando Perea	C.C No. 1.107.080.046	361681
Diana Esperanza Gomez	C.C No. 1.023.697.512 LT 30201	
Lina María Varela Vélez	C.C No. 1.234.091.873	364597

Por Documento Privado del 04 de octubre de 2022, inscrito el 7 de Octubre de 2022 con el 02887434 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andrea Juliana Hernández Rueda	C.C No. 1.098.751.528	295.390
Juliana Araque Quiroz	C.C No. 1.035.868274	293.693
Juliana Ramos Gaviria	C.C No. 1.020.814.258	375.572

Por Documento Privado del 28 de noviembre de 2022, inscrito el 30 de Noviembre de 2022 con el No. 02904376 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
María Carolina Martinez Portillo	C.C No. 1.020.721.389	207.162
Valentina Gomez Trujillo	C.C No. 1.012.459.669	366.614
Gina Paola Espinosa Martinez	C.C No. 22.464.396 116.498-D1	
Karen Sofia Sanchez Gonzalez	C.C No. 1.152.454.659	383.959
Paola Andrea Aponte Lopez	C.C No. 1.144.089.950	387.090
Mariana Pérez Cuenca	C.C No. 1.020.824.515	367.191
Maria Clara Jaramillo Berrio	C.C No. 1.152.702.664	388.141
Daniel Francisco Gomez Cortes	C.C No. 1.019.133.337	389.914

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 80086521

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 19251626

Por Acta No. 67 del 3 de agosto de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2022 con el No. 02870110 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Caroline Fraser Gonzalez	C.C. No. 1020796887

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**JUNTA DIRECTIVA**

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Santiago Andres Martinez Mendez	C.C. No. 81717493
Segundo Renglon	Gustavo Jose Gnecco Mendoza	C.C. No. 19431641

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Tercer Renglon	Andres Dario Godoy	C.C. No. 80086521
	Cordoba	
Cuarto Renglon	Daniel Francisco	C.C. No. 80873703
	Buritica Cordoba	
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy	C.C. No. 19251626
	Fajardo	

Por Acta No. 31 del 17 de noviembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2017 con el No. 02278076 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Tercer Renglon	Andres Dario Godoy	C.C. No. 80086521
	Cordoba	

Por Acta No. 36 del 1 de junio de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2018 con el No. 02347445 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Segundo Renglon	Gustavo Jose Gnecco	C.C. No. 19431641
	Mendoza	

Por Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de julio de 2020 con el No. 02582656 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Primer Renglon	Santiago Andres	C.C. No. 81717493
	Martinez Mendez	

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Cuarto Renglon Daniel Francisco C.C. No. 80873703
 Buritica Cordoba

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 19251626

Por Acta No. 51 del 23 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de septiembre de 2021 con el No. 02740441 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 59 del 9 de noviembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901235 del Libro IX, se designó a:

CARGO		NOMBRE			IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Persona Jurídica	BAKER TILLY	COLOMBIA	N.I.T. No. 800249449	5

Por Documento Privado del 11 de noviembre de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901236 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE			IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Nydia Torres	Jasmin	Mora	C.C. No. 1022334637 T.P. No. 165330-T
Revisor Fiscal	Erika Tatiana	Castaño		C.C. No. 1026276146 T.P.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Suplente

Cruz

No. 272902-T

PODERES

Por Documento Privado No. Sin núm del Representante Legal, del 22 de noviembre de 2018, registrado el 23 de noviembre de 2018 bajo el número 00040473 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

NOMBRE:

Ana Cristina Medina González

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 52.991.736

NOMBRE:

Carlos Hernán Godoy Fajardo

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 19.251.626

NOMBRE:

Francisco Erney Buriticá Ruiz

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 10.529.620

NOMBRE:

Andrés Fernando Da Costa Herrera

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 80.505.099

NOMBRE:

Gustavo Gnecco Mendoza

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 19.431.641

NOMBRE:

Santiago Andrés Martínez Méndez

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 81.717.493

NOMBRE:

María Isabel Vinasco Lozano

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 53.006.455

NOMBRE:

Jhon Sebastián Molina Gómez

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.018.466.887

NOMBRE:

Sergio Andrés Campos Guzmán

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.015.433.588

NOMBRE:

José David Ochoa Sanabria

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.010.214.095

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18**

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Jennifer Lorena Molina Mesa	C.C. 1.129.511.816
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Daniel Mauricio Contreras Jaimes	C.C. 1.090.424.399
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Fabio Andrés Salazar Reslen	C.C. 1.032.358.377
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ricardo José Aguirre Bejarano	C.C. 1.018.442.942
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ernesto Rosales Jaramillo	C.C. 1.090.420.262
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Juan Sebastián Velandia Párraga	C.C. 1.018.456.181

Por Documento Privado del 25 de agosto de 2022, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 14 de Septiembre de 2022, con el No. 00048142 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial a Diana Carolina Soler, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.727.319, para que represente al Poderdante y actúe en su nombre en los diferentes temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, afiliación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad. Específicamente, la Apoderada podrá desempeñar las siguientes funciones y todas aquellas directamente relacionadas con ellas o necesarias para poderlas ejercer, sin que se extiendan a temas o materias sustancialmente distintas: (i) Preparar, firmar y presentar cualquier documento en los temas relacionados con la administración, contratación y relevo de personal de la Sociedad, incluyendo contratos de trabajo, de prestación de servicios, diligenciamiento de formularios y documentos de vinculación ante cualquier tipo de autoridad pública o privada relacionada con el sector de salud, de trabajo o de seguridad social; (ii) Representar a la Sociedad administrativa, judicial y extrajudicialmente ante los empleados, funcionarios, terceros y toda clase de autoridades públicas, judiciales y administrativas en los temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad; (iii) Notificarse personalmente de cualquier decisión proferida por las autoridades

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

administrativas y judiciales en las cuales resulten involucrados de cualquier forma los intereses de la Sociedad en los temas referidos, presentar recursos, solicitar pruebas, responder y/o elevar peticiones frente a ellas.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002230 del 26 de junio de 2007 de la Notaría 21 de Bogotá D.C.	01147130 del 26 de julio de 2007 del Libro IX
Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de la Junta de Socios	01356856 del 27 de enero de 2010 del Libro IX
Acta No. 24 del 11 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02099420 del 2 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02297434 del 30 de enero de 2018 del Libro IX
Acta No. 37 del 2 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02466433 del 16 de mayo de 2019 del Libro IX
Acta No. 39 del 13 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02407938 del 21 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02582655 del 2 de julio de 2020 del Libro IX
Acta No. 51 del 31 de enero de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02790542 del 9 de febrero de 2022 del Libro IX
Acta No. 58 del 19 de julio de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02862790 del 28 de julio de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 46.394.370.833

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de enero de 2005. Fecha de envío de información a Planeación : 30 de noviembre de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2022 Hora: 09:16:18

Recibo No. AB22704721

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B227047217AA99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.018.966

RAMIREZ SANCHEZ

APELLIDOS

DANIEL FELIPE

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ABR-1997

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

04-MAY-2015 CAJICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



P-1503100-00717405-M-1070018966-20150626

0044615840A 1 42099505



Consejo Superior
de la Judicatura

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

NOMBRES:

DANIEL FELIPE

APELLIDOS:

RAMIREZ SANCHEZ

PRESIDENTE CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GLORIA STELLA LÓPEZ JARAMILLO



UNIVERSIDAD

DE LA SABANA

FECHA DE GRADO

23/11/2021

CONSEJO SECCIONAL

BOGOTÁ

CEPULA

1070018966

FECHA DE EXPEDICIÓN

21/12/2021

TARJETA N°

373906